

Cuarenta años de sindicalismo peronista, frente a un período anterior casi equivalente, es algo que nos obliga a replantear nuestra visión de conjunto de la historia del movimiento obrero argentino. La versión apocalíptica que divide a esa historia en dos momentos cualitativamente diferentes y casi sin vinculación entre sí, separados por un súbito cataclismo, ya no resulta convincente. El problema de la transición del sindicalismo preperonista al sindicalismo peronista se presenta así como el asunto más crucial de la historia del movimiento obrero argentino y, en cierto modo, de toda nuestra historia más reciente. El propósito de este trabajo es contribuir al esclarecimiento de ese problema.

Hugo del Campo, argentino, nacido en Buenos Aires en 1941, estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue docente en esa facultad entre 1966 y 1973 y profesor en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora, del Sur y de La Pampa entre 1973 y 1975. Publicó Los anarquistas, 1972, y artículos en Polémica ("La semana trágica"), Documentos de Polémica ("Porteños y provincianos: la polémica Rosas-Ferré"), Historia de América en el siglo XX ("Villarroel: ejército y nacionalismo en Bolivia") y "Frondizi: desarrollismo y crisis en Argentina") y en Historia del Movimiento Obrero ("Los orígenes del movimiento obrero argentino" y "De la FORA a la CGT").

clacso

Sindicalismo y peronismo

Hugo del Campo

clacso

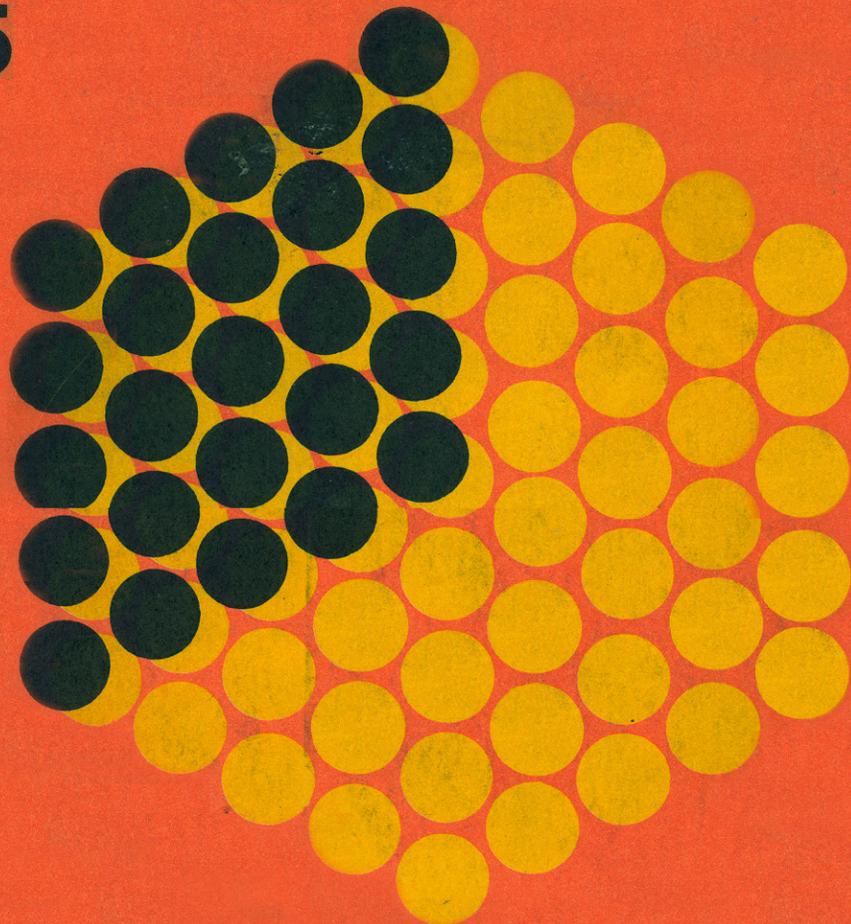
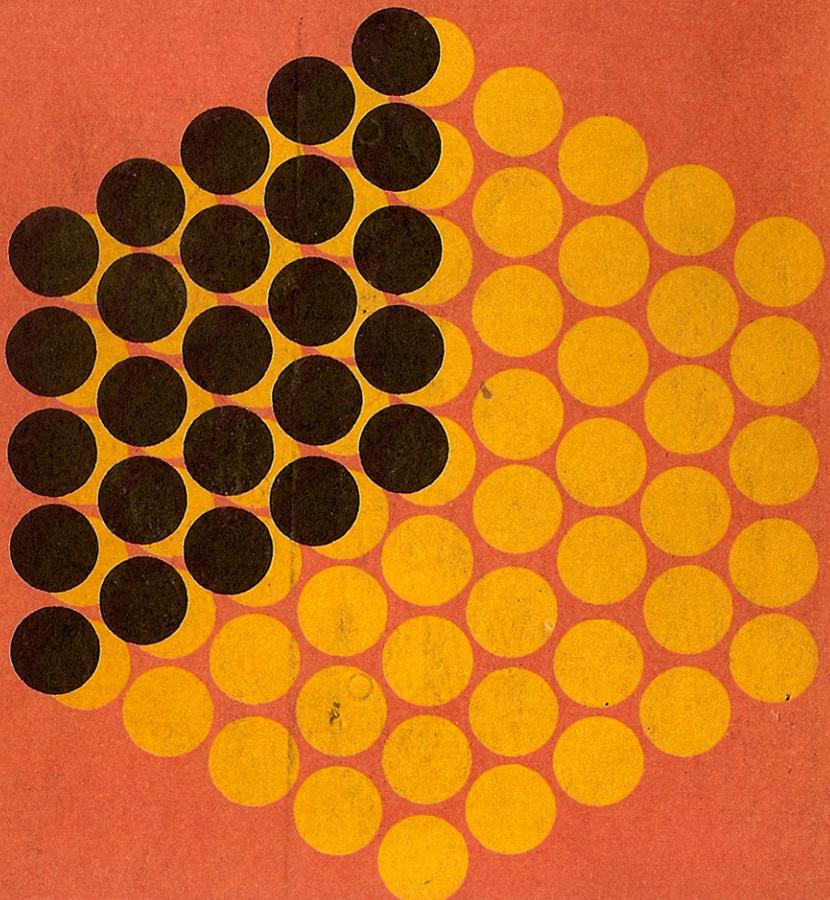
Biblioteca de ciencias sociales

Hugo del Campo

# Sindicalismo y peronismo

Los comienzos de un vínculo perdurable

5



**Sindicalismo  
y peronismo**

los comienzos  
de un  
vínculo perdurable

Hugo del Campo

# Sindicalismo y peronismo

los comienzos  
de un  
vínculo perdurable

**clacso**

Consejo  
Latinoamericano  
de Ciencias  
Sociales

Biblioteca de Ciencias Sociales  
Director: Mario R. dos Santos

I.S.B.N. 950-9231-03-9

Diseño gráfico: Oscar Díaz  
Composición e impresión: Artes Gráficas Santo Domingo S. A.  
Primera edición: agosto de 1983  
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723  
Copyright de todas las ediciones en español por  
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)  
Av. Callao 875, 3º E, Buenos Aires, Argentina

Este trabajo es el resultado de una investigación realizada mediante una beca correspondiente al Programa de Asistencia Académica Individual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Año académico 1982-83. La publicación fue financiada con aportes del International Development Research Center (IDRC), Ottawa, Canadá.

## Introducción

Es comprensible que los primeros estudios sobre el peronismo, iniciados poco después de 1955, tendieran a considerarlo como una especie de exabrupto histórico, consecuencia fortuita de una muy peculiar combinación de circunstancias cuya disolución implicaría necesariamente la desaparición de esa "anomalía política" en un lapso relativamente corto. Hoy, veintisiete años después, resulta imposible mantener esa actitud: lejos de desaparecer, el peronismo se ha incorporado a nuestra compleja y cambiante realidad como uno de sus elementos más constantes, y así como sobrevivió a la pérdida del poder, todo parece indicar que sobrevivirá también a la pérdida de su líder.

Claro que esta permanencia no significa inmutabilidad, y no sería difícil señalar las diferencias entre el peronismo actual y el que se constituyó hacia 1945. Salta a la vista, por ejemplo, que al ir perdiendo el apoyo de los sectores militares que lo prohicieron, de la Iglesia que bendijo su advenimiento y de las fracciones de la burguesía que se le acercaron durante su gobierno, el peronismo ha pasado a ser —independientemente de los eventuales acercamientos y alejamientos de las clases medias y de la ideología de sus dirigentes— un movimiento de base casi exclusivamente obrera. Han pasado casi cuarenta años desde que la clase obrera se volcó masivamente al peronismo y no parece que esa situación vaya a cambiar a breve plazo: todas las interpretaciones basadas en la idea de "manipulación desde el poder" se estrellan ante esta realidad.

Cuarenta años de sindicalismo peronista, frente a un período casi equivalente —si recordamos que las organizaciones obreras no lograron un desarrollo verdaderamente importante y estable hasta principios de siglo— de sindicalismo dirigido por otras tendencias: ¿no es algo que nos obliga a replantear nuestra visión de conjunto de la historia del movimiento obrero argentino?

Por empezar, creo que ya no se puede dejar de considerar al peronismo —haciendo abstracción por el momento de los demás elementos que lo integran— como una etapa, la más importante sin duda, de esa historia<sup>1</sup>. Planteada así la cuestión, surge inmediatamente el problema de cómo se articula esa etapa con las precedentes. La versión apoca-

líptica que divide la historia del movimiento obrero argentino en dos momentos cualitativamente diferentes y casi sin vinculación entre sí, separados por un súbito cataclismo en que desaparecen sin dejar rastros más de cuarenta años de sindicalismo y son reemplazados por otro totalmente nuevo que surge *ex nihilo*, ya no resulta convincente. Originada en las vivencias de algunos de los actores y espectadores del proceso —sobre todo, de los que fueron marginados por el mismo—, divulgada luego por publicaciones de ambos bandos con intención proselitista, recogida incluso por los primeros estudios académicos<sup>2</sup>, esa versión no sólo es anti-histórica —ya que en la historia permanencia y cambio aparecen siempre tan indisolublemente unidos como la urdimbre y la trama de una tela— sino que no resiste a la confrontación con los hechos. Así las cosas, el problema de la transición del sindicalismo pre-peronista al sindicalismo peronista —proceso aún poco conocido ya que prácticamente no ha sido objeto de estudios específicos— se presenta, a mi juicio, como el asunto más crucial de la historia del movimiento obrero argentino y, en cierto modo, de toda nuestra historia más reciente.

Dos trabajos pioneros comenzaron a desbrozar el camino: el de Celia Durruti<sup>3</sup> y el de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero<sup>4</sup>. Carlos S. Fayt, por su parte, ya había reunido algunos elementos<sup>5</sup> y Juan Carlos Torre analizó acontecimientos claves de ese proceso<sup>6</sup>. Es mucho, sin embargo, lo que queda por hacer, y el objeto de este trabajo es contribuir al esclarecimiento del problema mediante la divulgación de algunos testimonios poco conocidos —estadísticas del Departamento Nacional del Trabajo (DNT), entrevistas registradas en el Proyecto Historia Oral del Instituto Torcuato Di Tella (PDT.ITDT), actas de los congresos y las reuniones del Comité Central Confederal (CCC) de la Confederación General del Trabajo (CGT), publicaciones y folletos de la época, etc.— y la utilización de otros más accesibles pero no siempre mejor aprovechados —memorias publicadas por los protagonistas de los hechos, discursos de Perón, informaciones periodísticas, etc.

No pretendo haber agotado todas las fuentes disponibles y no dudo de que una investigación más exhaustiva pueda aportar modificaciones de importancia al esquema que aquí esbozaré. No intento entonces, poner un punto final al tratamiento del tema, sino todo lo contrario: llamar la atención sobre un problema que me parece fundamental y promover la búsqueda de nuevos elementos de juicio y la discusión de nuevas interpretaciones que puedan echar más luz sobre el asunto. Porque creo que una mejor comprensión de aquella instancia decisiva de nuestro pasado ayudaría a desentrañar una de las claves más determinantes de nuestro dramático presente.

## Primera parte

### El movimiento obrero hasta 1943

Dada la abundante bibliografía existente sobre este tema<sup>7</sup> —especialmente para el período anterior a 1930— nos limitaremos a destacar tres aspectos que hacen directamente al problema central que nos ocupa y que han sido menos estudiados.

El primero se refiere al desarrollo de la tradición **sindicalista**<sup>\*</sup> en el seno del movimiento obrero argentino: como este desarrollo cubre un período muy prolongado —prácticamente los cuarenta años anteriores a 1943— sólo podremos tratarlo en forma muy sucinta y dando por conocido el contexto que lo rodea. El objetivo es tratar de corregir —sobre la base de una re-lectura de la bibliografía conocida— una imagen habitual de esta etapa que consideramos distorsionada por una óptica partidista, y simultáneamente rastrear en la tradición **sindicalista** el origen de algunas características del movimiento obrero argentino que se desarrollaron en la década del 30 y que contribuyeron a la configuración del sindicalismo peronista.

El segundo aspecto se relaciona con las transformaciones que sufrió la clase obrera y el conjunto de los sectores populares entre 1930 y 1945, en cuanto a su composición y su situación objetiva, en el marco de una estructura económico-social en transición. Veremos también cuáles fueron las reacciones primarias de la clase obrera frente a esa situación y qué acogida encontraron sus aspiraciones por parte de quienes con-

<sup>\*</sup> Esta es la denominación más habitual en la época, aunque en sus comienzos se llamó "sindicalismo revolucionario" y luego —menos frecuentemente y con un término que se presta a confusiones— "anarcosindicalismo". Sus militantes también recibieron de sus rivales el mote peyorativo de "sorelianos", sobre todo desde que Georges Sorel fue invocado por Mussolini como uno de sus inspiradores.

Dado que las palabras "sindicalismo" y "sindicalista" también tienen en nuestro idioma una acepción más amplia, que abarca todo lo relativo a la actividad sindical, los usaremos en negrita cuando se refieran específicamente a esta tendencia ideológica y en tipos comunes cuando tengan el sentido amplio.

trolaban el poder político. Se trata aquí de bosquejar el trasfondo sobre el que se desarrolló el movimiento obrero en esa etapa.

Finalmente, analizaremos la evolución del movimiento obrero entre 1930 y 1943 buscando, por debajo de las luchas políticas internas y los cambios de orientación, la continuidad de ciertos rasgos esbozados en el período anterior y que podríamos sintetizar en tres conceptos: burocratización, reformismo pragmático y vinculación con el poder político. Se trata, como vemos, de características que suelen asociarse con el sindicalismo peronista y rara vez con el anterior a 1943: la de estas tendencias en el mismo —sobre todo, de las dos últimas— puede contribuir a explicar el rápido éxito del coronel Perón en el ámbito sindical y a cuestionar la imagen de su súbita e inesperada irrupción, como rayo en cielo sereno, destinada a trastocar fundamentalmente las más viejas y arraigadas tradiciones del sindicalismo argentino.

## 1. La tradición sindicalista en el movimiento obrero argentino

La impresión de un corte radical que, en 1943-46, separara en dos compartimientos estancos la historia del movimiento obrero argentino deriva, en gran medida, de la imagen parcial y deformada que solemos tener del período anterior. Las primeras historias del mismo —escritas con fines apologéticos por militantes socialistas y comunistas<sup>8</sup>— han sido la principal fuente de inspiración e información para casi todos los autores que, con o sin motivaciones políticas manifiestas, se ocuparon posteriormente del tema<sup>9</sup>. Sólo las escritas por militantes anarquistas o **sindicalistas**<sup>10</sup> traen abundante información sobre esas tendencias, pero, al no existir en la actualidad ninguna fuerza política interesada en reivindicarlas como antecesoras, pocos son los que han tratado de rectificar, a partir de los elementos que aportan esas obras, una imagen convencional de la historia de nuestro movimiento obrero modelada sobre la interpretación socialista-comunista.

En general, esa versión nos presenta un panorama en el que anarquismo y **sindicalismo** sólo aparecen marginalmente, como elementos perturbadores de una corriente central socialista —y luego también comunista— en permanente ascenso y con profundo arraigo en las masas obreras. Hemos intentado, en un trabajo anterior<sup>11</sup>, resaltar la importancia que tuvo el anarquismo, como tendencia mayoritaria, desde los comienzos de nuestro movimiento obrero hasta mediados de la década del 10. Trataremos ahora de demostrar que su influencia dominante no sería sustituida por la de socialistas y comunistas hasta después de 1930, correspondiendo el período que media entre ambas fechas a una neta mayoría **sindicalista**.

El hecho de que socialistas y comunistas —debido, en gran parte, a la tenaz resistencia **sindicalista**— sólo hayan logrado controlar a la mayor parte del movimiento obrero a mediados de la década del 30 ya nos da una pauta de que su arraigo era menos antiguo y fuerte de lo que usualmente se supone. Aún después de esa fecha no son pocos los dirigentes gremiales socialistas que sustentan actitudes muy similares a las tradicionalmente sostenidas por los **sindicalistas** —anteponiendo,

por ejemplo, la defensa de los intereses específicos de su gremio a las directivas generales del partido, o escudándose en la necesidad de prescindencia política por parte de las organizaciones gremiales para negociar más fácilmente con todos los gobiernos—. Esto podría deberse a una influencia ideológica difusa que se extendiera más allá de los límites del predominio institucional del **sindicalismo**, pero también a una tendencia general, impuesta por las realidades de la época, que los **sindicalistas** habrían sido los primeros en poner en práctica.

Tengamos en cuenta, finalmente, que muchas de las modalidades que adoptaría en sus comienzos el movimiento peronista —organización basada fundamentalmente en los sindicatos, vinculación directa de los mismos con sectores del poder político, reformismo pragmático sin mayores preocupaciones teóricas— coinciden objetivamente con las que habían practicado los **sindicalistas** durante las décadas anteriores. ¿Se trata de una simple coincidencia? En todo caso no parece superfluo revisar, antes de entrar en nuestro tema, la trayectoria del movimiento obrero anterior a 1930 a la luz del papel desempeñado por la tendencia **sindicalista**.

### Las raíces europeas del sindicalismo <sup>12</sup>

Como las otras ideologías dominantes en el movimiento obrero argentino hasta 1943, el **sindicalismo** tiene origen europeo: fue su desarrollo en Francia y en Italia el que influyó principalmente sobre nuestro país.

En Francia el **sindicalismo** tenía una larga tradición y había llegado a predominar en el movimiento obrero a principios de siglo. Ya durante la década de 1880, frente a la corriente socialista —que consideraba a los sindicatos como una escuela donde los obreros, al entrar en contacto directo con la lucha de clases, irían incrementando su conciencia y acercándose al partido y que, por consiguiente, intentaba controlarlos— había surgido una tendencia que concebía a las organizaciones gremiales como el principal instrumento revolucionario y ponía el acento en su desarrollo autónomo. Reivindicando la acción directa como única forma de acción revolucionaria y considerando al parlamentarismo proclive a la colaboración de clases, esta tendencia centraba la lucha en el terreno económico y entendía que por esa vía se llegaría finalmente a la huelga general revolucionaria que terminaría con el capitalismo.

Este conjunto de ideas había sido sintetizado por Fernand Pelloutier, quien además elaboró una concepción de la sociedad futura basada en los sindicatos: la federación de éstos constituiría, a nivel local, la administración comunal, y las comunas así formadas se federarían a su vez en unidades más amplias. Durante la década siguiente Pelloutier organizó y dirigió las Bolsas de Trabajo, que agrupaban a los sindicatos de cada localidad y que se unieron en una Federación Nacional.

Desde 1902, en que las Bolsas se integraron a la CGT, esa tendencia pasó a controlarla, bajo la conducción de Victor Griffuelhes, iniciando la "época heroica", la etapa más combativa de la central obrera francesa.

La extrema división en que se hallaba el socialismo francés y las constantes querrelas entre sus fracciones llevaba a las organizaciones

sindicales a tratar de preservar su unidad mediante una actitud de prescindencia política que, además, entroncaba con la tradición antipolítica del anarquismo. La nueva corriente, sin embargo, no se oponía a la lucha por una legislación favorable, como hacían los anarquistas, sino que trataba de conseguirla mediante la acción directa de las organizaciones sindicales y no a través de la vía electoral.

Lo cierto es que en su Congreso de Amiens (1906) la CGT francesa aprobó, por abrumadora mayoría, una declaración que proclamaba la absoluta independencia del movimiento sindical y rechazaba cualquier tipo de alianza con los partidos políticos. Esa declaración sería tomada como modelo por varias centrales obreras argentinas.

Fue probablemente el ejemplo de la CGT francesa, más que los escritos de los teóricos del **sindicalismo**, lo que influyó sobre los primeros **sindicalistas** argentinos. Obreros en su mayoría, éstos nunca se mostraron particularmente interesados en cuestiones teóricas y doctrinarias: no parece, por ejemplo, que hayan puesto mucho empeño en leer y difundir las obras de los generadores de esta ideología, como hacían los militantes de las tendencias rivales.

Aunque la obra de Georges Sorel —que sólo coincidía parcialmente con la auténtica tradición **sindicalista** y exaltaba, en cambio, algunos aspectos que en ésta tenían un papel muy marginal, como la apología de la violencia— parece haber sido la más difundida, es difícil saber hasta dónde fue realmente leído por los militantes o solamente mencionado. Otro tanto ocurre con la de Hubert Lagardelle, pensador más sólido y más vinculado con el movimiento obrero francés, aunque según Enrique Dickmann terminó siendo ministro del régimen de Vichy <sup>13</sup>.

Pero si de Francia llegaba la inspiración ideológica y el modelo que representaba su poderosa CGT, las circunstancias que provocaron el auge de la corriente **sindicalista** en nuestro país se parecen más a las que lo rodearon en Italia. Allí, donde la tradición anarquista era más fuerte, el movimiento obrero se había desarrollado en un ambiente de violencia y represión con el que contrastaba fuertemente el legalismo y la moderación del Partido Socialista (PS).

Sus dirigentes y legisladores, casi todos intelectuales procedentes de las clases medias, despertaban profunda desconfianza en una clase obrera más reciente, heterogénea y poco instruida. Así, desde 1893 una Federación de Cámaras de Trabajo —similares a las Bolsas francesas— rivalizaba con el PS en la conducción de los trabajadores, oponiéndose fundamentalmente a la participación socialista en gobiernos burgueses y muchas veces represivos.

La discusión también se daba dentro del partido, y en el Congreso de Bolonia (1903) el ala izquierda, aliada con los **sindicalistas** dirigidos por Arturo Labriola\* y Enrico Leone, se impuso sobre las tendencias moderadas. Pero la influencia **sindicalista** en el movimiento obrero ita-

\* Que no debe confundirse con el más conocido teórico marxista Antonio Labriola.

liano no llegó a ser tan preponderante como en el francés: aparte de subsistir un importante sector anarquista —con el que no siempre podía llegar a un acuerdo— las disidencias internas debilitaban a la tendencia. De modo que cuando se constituyó la Confederazione Generale del Lavoro (CGL) en 1906 los socialistas lograron controlarla y los **sindicalistas** se separaron. Finalmente, en el Congreso de Roma (1907) los sectores moderados retomaron la conducción del PS y al año siguiente expulsaron a los **sindicalistas**, que en 1912 fundarán la Unione Sindacale Italiana, rival de la CGL.

Los ecos de estos enfrentamientos llegaban siempre a los medios socialistas y obreros argentinos, que mantenían fluida relación con los Italianos.

### Difusión de las ideas sindicalistas en la Argentina

Hay varias versiones acerca del comienzo de la difusión de las ideas **sindicalistas** en nuestro medio. Enrique Dickmann sostiene que fue Gabriela L. de Coni —francesa que se mantenía al tanto de las modas intelectuales de su país de origen— y el abogado Julio A. Arraga —que había residido en Francia durante algún tiempo— quienes iniciaron esa propaganda a través de artículos y folletos entre 1903 y 1906. A ellos se habrían sumado luego otros afiliados socialistas, como Bartolomé Bossio y Luis Bernard, y el propio secretario general del partido, Aquiles S. Lorenzo <sup>14</sup>.

Nicolás Repetto, en cambio, asigna especial importancia a la visita de Walter Mocchi, corresponsal viajero de *Avanti*, en 1904. A través de conferencias y artículos publicados en *La Vanguardia* (LV), éste habría divulgado las disidencias que planteaba Arturo Labriola en el PS italiano, consiguiendo el apoyo de algunos militantes de ese origen y de un grupo de intelectuales <sup>15</sup>.

Sebastián Marotta, por su parte, no menciona los orígenes europeos de esa ideología, minimiza la participación de intelectuales en su difusión y atribuye su aparición exclusivamente al anhelo de las organizaciones obreras de liberarse de la tutela del PS <sup>16</sup>.

Lo cierto es que para julio de 1905 ya publicaban un periódico, **La Acción Socialista**, desde el que defendían el siguiente programa:

"a) Fijar la posición del movimiento obrero en el terreno de la lucha de clases, manteniendo el espíritu revolucionario que ha de animarlo, procurando impedir toda interpretación dual sobre las funciones de los órganos e instituciones de dominación burguesa;

"b) Enaltecer la acción directa del proletariado, desarrollada por su simple y deliberada voluntad de modo independiente de toda tutela legal, dirigida a disminuir prácticamente las condiciones de inferioridad económica en que lo tiene colocado el capitalismo;

"c) Demostrar teórica y prácticamente el papel revolucionario del sindicato, su efectiva superioridad como instrumento de lucha y su función histórica en el porvenir como embrión de un sistema de producción y gestión colectivista;

"d) Integrar la acción revolucionaria del proletariado por medio de la subordinación de la acción parlamentaria a los intereses de la clase trabajadora, correspondiendo a ésta señalar a sus mandatarios la conducta a seguir en los parlamentos burgueses;

"e) Ratificar el concepto marxista sobre el significado de la acción del proletariado en su fundamental expresión de la lucha de clases;

"f) Negar que el Estado sea órgano social y universal y demostrar su naturaleza de institución de clase;

"g) Adjudicar al parlamentarismo, como único papel en el proceso revolucionario, funciones de crítica y descrédito de las instituciones políticas del régimen capitalista" <sup>17</sup>.

La rapidez con que cundieron estas ideas en los medios sindicales se puso en evidencia durante el 3er Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT), agosto de 1905, en el que se impuso una resolución que, si bien no rechazaba de plano la acción política, la aceptaba con tantas limitaciones que implicaba un verdadero viraje en la línea de una central proujeda por el PS \*. Mientras el 2º Congreso (1904) había invitado a los trabajadores a ejercer sus derechos políticos, y a naturalizarse a los que fueran extranjeros, respondiendo así a dos preocupaciones básicas del PS, el 3º declaraba:

"Considerando: que si se entiende por acción política la acción de clase realizada revolucionariamente por el proletariado argentino, a fin de reducir moral y materialmente la dominación capitalista, y que si se entiende por una forma parcial de esa acción la representación parlamentaria socialista, **con un papel secundario y complementario** de la obra de transformación social por que lucha la clase obrera, **y que ella no puede atribuirse nunca la dirección del movimiento obrero**, sino atenerse en todos los momentos y circunstancias a las necesidades, fiscalización y mandato de los trabajadores que la eligen, resuelve: Aceptar la lucha política en el verdadero significado que ella tiene de lucha de clases; y a la acción parlamentaria en el concepto de que **no realiza obra efectiva revolucionaria** y sólo sirve para complementar la acción material y positiva que realiza el proletariado en la fuente verdadera de la explotación y dominio capitalista, o sea en el campo económico" <sup>18</sup>. (El subrayado es nuestro, H. d. C.).

Jacinto Oddone, que fue secretario de ese congreso, atribuye el éxito de los **sindicalistas** a todo tipo de fraudes y maniobras (sindicatos fraguados, gestión de delegaciones de gremios del interior, etc.) <sup>19</sup>, pero lo cierto es que, lejos de ser circunstancial, el predominio **sindicalista** no dejaría de afirmarse en los siguientes años, demostrando así que su influencia era real. Según el mismo autor, mientras en el seno de las or-

\* Cabe recordar que las pequeñas organizaciones gremiales de la época estaban constituidas casi exclusivamente por militantes de una u otra tendencia, muy atentos siempre a las definiciones ideológicas, a las que asignaban una importancia fundamental. Las resoluciones de los Congresos ofrecen, por eso, el mejor indicador para evaluar la relación de fuerzas en el seno de las centrales obreras.

ganizaciones sindicales se desarrollaba una intensa campaña de propaganda y se procuraba desprestigiar a los socialistas, eran sobre todo dirigentes ya consolidados quienes se volcaban hacia la nueva corriente.

Si tenemos en cuenta que los obreros organizados eran en su mayoría inmigrantes de países donde las tendencias anti-políticas eran muy fuertes, y que largos años de propaganda anarquista habían reforzado aquí mismo esa orientación, no es aventurado suponer que la adhesión al PS —vista por muchos trabajadores como sumisión a una dirección no obrera— resultaría para esos dirigentes un obstáculo en su actividad sindical. El escaso papel que la estructura del partido y la mentalidad de sus dirigentes permitía alcanzar a los dirigentes sindicales en sus órganos directivos no compensaba en absoluto las desventajas que su militancia política les ocasionaba en el campo gremial. La ideología **sindicalista**, menos definida —y por lo tanto más flexible— que la de las tendencias rivales, y no sometida en cuanto a su aplicación al control de severos guardianes de la ortodoxia —como eran, en los otros casos, el PS y la Federación Obrera Regional Argentina (FORA)— permitirla además a esos dirigentes moverse con mayor holgura en un medio saturado de discusiones doctrinarias y de actitudes sectarias y que aspiraba a encontrar formas más prácticas y eficaces de organización y de lucha. Finalmente, la llegada del primer diputado socialista al parlamento hacía que cobraran realidad las cuestiones sobre el papel del parlamentarismo y su relación con las organizaciones obreras, que hasta entonces sólo habían sido hipotéticas. Todos estos factores influyeron seguramente sobre el rápido desarrollo que tuvo el **sindicalismo** en los medios obreros desde su aparición.

Dentro del partido, donde también se sostenían intensas polémicas doctrinarias, la nueva tendencia parece haber atraído, sobre todo, a los militantes más radicalizados que se oponían a la orientación reformista y extremadamente moderada que le habían impreso sus fundadores. La situación hizo crisis en el 7º Congreso (abril de 1906), cuya mayoría resolvió que "vería con agrado que el grupo de afiliados titulados **sindicalistas** se constituya en partido autónomo a fin de realizar la comprobación experimental de su doctrina y táctica" (*La Vanguardia*, 15-4-1906). Un grupo importante de afiliados se apartó entonces del partido, protagonizando la primera de las múltiples escisiones que caracterizarían su historia. El tono de la amable invitación parece sugerir que se dejaba la puerta entreabierta para un posible regreso, pero éste no se produciría.

### El ascenso del sindicalismo

El enfrentamiento entre socialistas y **sindicalistas** no podía dejar de reflejarse en el 4º Congreso de la UGT (diciembre de 1906), donde la relativa paridad de fuerzas hizo que se discutiera largamente sobre la forma de votación (los socialistas tenían mayoría de delegados, pero los **sindicalistas** decían representar a un mayor número de cotizantes). El triunfo del criterio **sindicalista** hizo que éstos dominaran el congreso,

imprimieran un nuevo giro a la posición doctrinaria de la central —esta vez en relación con el concepto de huelga general— y formaran la mayoría de la nueva Junta Ejecutiva.

Ese congreso apoyó también la propuesta de la FORA de reunir un Congreso de Fusión, que se concretó en marzo de 1907. La mayoría anarquista y su insistencia en mantener el Pacto de Solidaridad de la FORA y la declaración en favor del comunismo anárquico de su 5º Congreso preanunciaban claramente el fracaso de este intento. Tiene interés para nosotros, sin embargo, porque en él se define más claramente frente a sus rivales la ideología **sindicalista** y se anticipa la táctica que los llevaría al copamiento de la FORA ocho años después.

En cuanto a lo primero, veamos algunos párrafos del discurso del gráfico Luis Bernard: "Las declaraciones hiperbólicas —dice— son infantiles, nada pueden y nada realizan. Toda la condensación revolucionaria está en capacitar a los trabajadores para la fecunda labor de conquista y emancipación futuras. He aquí la obra que sólo puede ser cumplida por la lucha incesante, por la vida activa y transformadora de los organismos sindicales. El verdadero y genuino instrumento de la revolución proletaria es la misma organización (...)

"Se ha pretendido que las ideologías son todo dentro del movimiento obrero. La teoría parlamentaria socialista, hermosa, muy hermosa; la idea anárquica, hermosa también. Pero no valen nada, absolutamente nada ante la organización sindical. Pueden subir a la tribuna los políticos a predicar la eficacia de su ideal parlamentario; pueden treparse a las mesas los oradores anarquistas y con ampulosas frases idealizar todo lo que quieran. Nada de esto tendrá, ni remotamente, el valor de la más pequeña mejora, del más insignificante adelanto conquistado en una huelga. Pueden proclamar las virtudes de la boleta electoral los políticos socialistas, convocando a los obreros a la conquista de los poderes públicos; pueden los ideólogos anárquicos cifrar todas las esperanzas en la propagación del ideal. Nada de esto conseguirá, en lo más mínimo, detrimenar el edificio capitalista, mover una sola piedra. Esta obra sólo está reservada a la clase, al pueblo trabajador, hecho fuerte y capaz en el seno de sus organismos sindicales, únicos depositarios de las armas y del poder"<sup>20</sup>.

Si las últimas palabras anunciaban la futura consigna: "Todo el poder a los sindicatos", en el resto de la exposición se advierten los gérmenes de una actitud que, al ir diluyéndose con el correr del tiempo el contexto ideológico revolucionario en que se insertaba, llevaría a los **sindicalistas** hacia posiciones cada vez más economicistas.

En cuanto a la táctica, recuerda Oddone que en una reunión de delegados **sindicalistas**, socialistas y autónomos, los primeros proponían realizar la fusión aún a costa de aceptar la recomendación en favor del comunismo anárquico, "pues como los anarquistas carecían de conocimientos de organización y administración, pronto la nueva central habría caído 'en nuestras manos'"<sup>21</sup>.

El fracasado intento de fusión y el subsiguiente incremento de las disputas ideológicas debilitó a ambas centrales, aumentando el número

de las organizaciones que se mantenían autónomas. Fue precisamente un grupo de éstas quien tomó la iniciativa de reunir un nuevo congreso unificador. De este congreso (septiembre de 1909) surgió la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA), como resultado de la unión de la UGT, algunos sindicatos autónomos y algunos que se separaron de la FORA.

El carácter anti-político y anti-estatal de la nueva central quedaba definido en el artículo 7º de su Pacto Solidario: "Nuestra organización, puramente económica, es distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos y religiosos, puesto que así como ellos se organizan para la conquista del poder político, nosotros nos organizamos para que los estados políticos actualmente existentes queden reducidos a funciones puramente económicas, estableciéndose en su lugar una libre federación de libres asociaciones de productores libres" <sup>22</sup>. La única diferencia de este texto con el del artículo 6º del Pacto de Solidaridad de la FORA es que la frase "todos los partidos políticos y religiosos" suplanta a "todos los partidos políticos obreros" que aparece en aquél.

El rechazo de la fusión por parte del 8º Congreso de la FORA (abril de 1910), a pesar de la similitud del Pacto adoptado por la CORA con el suyo, y su insistencia en mantener el principio del "sindicalismo rotulado" serían el comienzo de su decadencia. Hasta entonces había sido la central más poderosa y agrupada a muchos gremios que, aún sin compartir la ortodoxia del comunismo anárquico, la preferían a una entidad dominada por el PS. Mientras la UGT no llegó a los 8.000 adherentes, la FORA parece haber tenido casi 33.000, aunque, como dice el historiador de esta última, es difícil precisar cantidades porque "fueron condenadas en la práctica las estadísticas y los informes regulares internos" <sup>23</sup>. Ahora, ante la circunstancia de una central acrecentada por la incorporación de organizaciones autónomas e independiente del partido, la persistencia en el aislacionismo doctrinario aparecía para muchos como una actitud sectaria y divisionista. La intensa repercusión desencadenada durante esos años sobre los anarquistas influyó también sobre su declinación. La FORA fue perdiendo, entonces, muchos adherentes, que se pasaban a la CORA o permanecían autónomos. Un tercer intento de fusión, realizado en 1912, volvió a fracasar ante la intransigencia de los anarquistas.

Finalmente, sintiéndose ya lo bastante fuertes como para copar la FORA, los sindicalistas convocaron un nuevo Congreso de Concentración, que en septiembre de 1914 decidió la disolución de la CORA y la incorporación de sus integrantes a la FORA. Esta se concretó en el 9º Congreso de la misma (abril de 1915), en el que los **sindicalistas** impusieron una nueva definición a la central: "La FORA —establecía— es una institución eminentemente obrera, organizada por grupos afines de oficios, cuyos componentes pertenecen a las más variadas tendencias ideológicas y doctrinarias, que para mantenerse en sólida conexión necesitan la más amplia libertad de pensamiento, aunque sus acciones es imprescindible que se encuadren dentro de la orientación revolucionaria de la lucha de clases, de la acción directa, y con absoluta prescindencia de

los grupos y partidos que militan fuera de la organización de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la FORA no se pronuncia oficialmente partidaria ni aconseja la adopción de sistemas filosóficos ni ideologías determinadas, cuya propaganda, de acuerdo con la autonomía del individuo en el sindicato, de éste en las Federaciones locales y de éstas en la Regional, no está vedada ni puede ser coartada en nombre de ningún principio de restricción, sino, por el contrario, deberá permitirse la más amplia y tolerante discusión de temas científicos, filosóficos e ideológicos, en homenaje a los diferentes modos de pensar de los obreros federados, y a fin de mantener la unidad orgánica de los mismos y evitar de este modo las susceptibilidades y enconos que resultarían en perjuicio de la FORA si ésta aceptara o adoptara determinada ideología" <sup>24</sup>.

Los anarquistas, reducidos ya a una docena de organizaciones, no aceptaron esta resolución y decidieron mantener la declaración del 5º Congreso y el nombre de FORA, de modo que dos centrales llevaran desde entonces el mismo nombre, con el agregado del congreso cuya declaración sostenían: la del 9º (integrada por **sindicalistas**, **socialistas** e indefinidos) y la del 5º (exclusivamente anarquista).

La etapa de neto predominio **sindicalista** que entonces se iniciaba coincidiría aproximadamente con la de los gobiernos radicales: si es difícil pensar que se trata de una mera casualidad, tampoco resultan evidentes los motivos de esa vinculación. Hemos visto que una de las causas de la rápida declinación del anarquismo después de 1910 fue la intensa persecución que se desencadenó contra sus militantes: al atenuar los gobiernos radicales esa política represiva, podrían haber facilitado su resurgimiento. La práctica de una mayor limpieza electoral y una actitud más receptiva para los problemas sociales en los medios parlamentarios pudieron haber permitido al socialismo mejorar sus posiciones en el ámbito gremial. Pero esas posibilidades no se concretaron, ya que otros actores actuaban en sentido contrario.

Por un lado, la decadencia del anarquismo venía impulsada por circunstancias más profundas y complejas que la simple represión: los cambios en la composición de la clase trabajadora hacían que sus tácticas —que tantas veces habían llevado a sangrientos fracasos— resultaran cada vez menos atractivas. Una incipiente concentración y estratificación iba cambiando la fisonomía de una clase trabajadora hasta entonces muy dispersa e indiferenciada. Muchos de sus miembros —especialmente en los oficios que requerían cierto grado de calificación— habían adquirido una estabilidad en su trabajo que los llevaba a aceptar su posición laboral como definitiva, orientándose entonces a tratar de mejorarla en lugar de rebelarse contra ella. Aunque la movilidad social seguía siendo alta, no todos los inmigrantes habían logrado "hacer la América" y no eran pocos los hijos de inmigrantes que debieron conformarse con seguir siendo asalariados como sus padres: también ellos se orientaban más hacia la reforma que hacia la rebelión. El rechazo absoluto e intransigente de toda la realidad social existente en nombre de una hermosa utopía, la protesta simbólica y violenta precursora del estallido revolucionario donde los oprimidos se jugarían al todo o nada, iban perdiendo entonces sus adeptos frente a quienes preferían dirigir

sus energías hacia la conquista paulatina de mejores condiciones de vida y de trabajo.

Pero, dado que esas condiciones eran muchas veces insoportables, su mejoramiento debía ser rápido y concreto. No podía esperarse que, luego de varias azarosas elecciones, algún diputado socialista llegara finalmente a la Cámara y allí planteara, ante la indiferencia o la hostilidad de sus colegas, algún proyecto que, aún en el caso de aprobarse, sólo se transformaría en una de las tantas leyes incumplidas. Si muchos trabajadores habían ido superando la desesperada situación que los llevó a volcarse al anarquismo, no eran tantos, en cambio, los que podían darse el lujo de esperar que sus problemas fueran resueltos por una lenta evolución. Además, los diputados —así como los principales dirigentes del PS— eran por lo general personajes inaccesibles para el común de los trabajadores, de quien los separaba una diferencia de clase que sólo una gran dosis de confianza podía obviar. De modo que la propuesta socialista seguía siendo poco atractiva para la mayoría de los trabajadores, lo que no sólo se refleja en la escasa incidencia del partido sobre las organizaciones gremiales, sino también en el reducidísimo porcentaje de extranjeros que se naturalizaban.

Frente a ambas corrientes, los **sindicalistas** ofrecían una alternativa más flexible y más pragmática. Sin renunciar al idealismo revolucionario que seguía impregnando su retórica y que, al insertar las luchas parciales de los trabajadores en el marco de un grandioso proceso de redención de la humanidad, reforzaba su fe en el triunfo final, tampoco se limitaban a su exaltación. Al lado de ello —y cada vez más— concentraban todos sus esfuerzos en la organización de los trabajadores, buscando principalmente en el sindicato no tanto un ámbito propicio para la difusión de su ideología —como hacían anarquistas y socialistas—, sino el instrumento para lograr mejoras concretas e inmediatas. Así, frente a la huelga general —arma preferida por los anarquistas como expresión de protesta— o a la acción educativa y parlamentaria de los socialistas, los sindicalistas centraban su estrategia en la huelga reivindicativa. Esto les permitía adecuar en cada caso sus consignas a las necesidades de una clase trabajadora heterogénea y atraer de ese modo, en torno de objetivos concretos, a sectores más amplios de los que podría nuclear una determinada ideología.

Al centrarse en la lucha por las reivindicaciones inmediatas, la práctica **sindicalista** fue dejando de lado, paulatinamente, los fines revolucionarios que postulaba su ideología original, para desembocar en un reformismo que sólo se diferenciaba del que practicaban los socialistas por el hecho de que en lugar de fundarse sobre una posición doctrinaria, emergía de consideraciones puramente pragmáticas. "En las formas de lucha —dice, por ejemplo, el veterano dirigente de los gráficos René Stordeur— no se diferenciaban de manera alguna de los socialistas: eran partidarios de la conversación, partidarios del convenio colectivo, partidarios de la conciliación, y, desde luego, partidarios de la huelga cuando no se podía llegar a la solución de los problemas por esos medios persuasivos"<sup>25</sup>.

Algo parecido ocurrió con su actitud frente al Estado: a pesar del carácter fuertemente anti-estatal de sus concepciones iniciales, los **sindicalistas** terminaron por descubrir que el apoyo de algún sector del aparato estatal podía ser vital para la obtención de sus objetivos, y que ese apoyo no siempre era imposible de lograr. En lugar del enfrentamiento frontal que predicaban los anarquistas o de la conquista por medio del sufragio sostenida por los socialistas, los **sindicalistas** advirtieron que se podía negociar con funcionarios del Estado sobre la base de conveniencias mutuas. El acceso al poder del radicalismo abrió prácticamente esa posibilidad.

### Sindicalismo y radicalismo

La reforma electoral y la llegada del radicalismo al gobierno abrían nuevas perspectivas en las relaciones entre los gobernantes y el movimiento obrero. La primera, al reemplazar las maquinarias electorales del "régimen" por el más azaroso sufragio secreto y obligatorio, hacía que la captación de votos pasara a primer plano en la preocupación de los políticos, y si bien los trabajadores eran en su mayoría extranjeros, igualmente sumaban muchos miles los que estaban en condiciones de votar. Los radicales, que habían triunfado en 1916 por una ajustada mayoría, no podía desdeñar esos votos potenciales y, además de hacer una profusa propaganda sobre la sensibilidad social y las simpatías "obreristas" de Yrigoyen, trataron de conectarse con algunas organizaciones obreras. Descontando la cerrada oposición de los anarquistas y la no menos hostil actitud de los socialistas —para quienes estos exponentes de la "política criolla" eran sobre todo sus rivales en el distrito metropolitano— el único sector del movimiento obrero con el que podían comunicarse era el dirigido por los **sindicalistas**.

Estos controlaban, por otra parte —y en ello radicaba en gran medida la clave de sus éxitos— los dos gremios cuya actividad era el eje de la economía agro-exportadora: marítimos y ferroviarios. De los primeros dependía no sólo la navegación de cabotaje sino también —a través de la tripulación de los remolcadores— la actividad portuaria; los segundos dominaban el único transporte terrestre importante antes de la expansión del automotor. Ambos podían, entonces, paralizar las exportaciones, resorte vital de la economía de la época. Se trataba, además, de gremios numerosos y concentrados en grandes empresas, cuyos miembros gozaban de una movilidad geográfica que no sólo les permitía mantenerse en contacto entre sí —y organizarse, por lo tanto, en escala nacional— sino también con los trabajadores de todas las regiones del país. Su solidaridad fue esencial para la organización de los trabajadores del interior, a los que prestaron asesoramiento y apoyo material y cuyas luchas reivindicativas respaldaron frecuentemente —sobre todo los marítimos— mediante el recurso del boicot a las empresas en conflicto.

El primero de esos gremios en lograr una organización estable, representativa y poderosa, fue el de los marítimos. Fundada en 1910, la Fe-

deración Obrera Marítima (FOM) creció en los años siguientes bajo la conducción del sindicalista Francisco J. García hasta incorporar a la mayoría del gremio y se convirtió, por su organización y disciplina, en el sindicato modelo de la época. Influyó en la organización de los demás trabajadores en todos los puertos del país y su amplio espíritu solidario —expresado en el referido uso del boicot— le acarreó un enorme prestigio en los medios obreros. Por estos motivos, la FOM fue la columna vertebral de la FORA-9º —a la que se incorporó en 1915— y posteriormente de la Unión Sindical Argentina.

Más dificultosa resultó la organización de los ferroviarios. Sólo los maquinistas y fogoneros estaban agrupados desde 1887 en La Fraternalidad (LF); su fracaso en la huelga de 1912 llevó a esta asociación a apoyar los intentos organizativos de las otras categorías de trabajadores ferroviarios. Así surgió la Federación Obrera Ferrocarrilera (FOF), dirigida por el sindicalista Francisco Rosanova. Esta organización protagonizó varias huelgas parciales, con diversos resultados, durante los años siguientes, pero su crecimiento debió enfrentarse con la resistencia de las empresas, que trataron de dificultarlo por todos los medios. De modo que al celebrar su primer congreso, en 1915, sólo contaba con unos 4.000 cotizantes regulares sobre un total de 15.000 afiliados.

Fue sobre estos dos gremios claves que intentó Yrigoyen ganar influencia poco después de su llegada a la presidencia. Sus motivaciones no son difíciles de comprender<sup>26</sup>: además de la necesidad de atraerse votos obreros —que podían, por ejemplo, definir la mayoría en la Capital Federal, siempre disputada de cerca por el PS—, el mantenimiento de buenas relaciones con el movimiento obrero, si se tradujera en una relativa paz social, representaría un triunfo considerable para un gobierno acechado por la oligarquía desplazada y que debía demostrar su capacidad para mantener el orden.

Dos factores facilitaban el acercamiento entre Yrigoyen y los sindicalistas. Por un lado, la común rivalidad de ambos frente al PS: si a Yrigoyen le interesaba consolidar la dirección sindicalista de los gremios como una barrera contra el avance de la influencia socialista, a los sindicalistas no les preocuparía que los obreros votaran por un gobierno que se mostraba dispuesto a apoyarlos en lugar de hacerlo por sus rivales en el campo gremial. Por otro lado, como hemos dicho, la orientación crecientemente pragmática y economicista de los sindicalistas hacía que no dudaran en dejar de lado viejos principios si, con la ayuda que se les ofrecía desde el Estado, podían obtener más fácilmente sus reivindicaciones.

La posibilidad de un acercamiento fue puesta a prueba, al poco tiempo de asumir Yrigoyen, por la huelga que declararon los marítimos. Después de recibir a una delegación de la FOM y de la FORA-9º —hecho que tenía pocos precedentes\*—, Yrigoyen intercedió ante los armados

\* Los dirigentes de LF, por ejemplo, habían sido recibidos por Roque Sáenz Peña en 1912.

res y, al no conseguir que éstos aceptaran sus propuestas, ordenó el retiro de las tropas que custodiaban el puerto. Esto permitió a la FOM impedir el acceso de rompehuelgas y las empresas terminaron por aceptar el arbitraje del gobierno, que fue ampliamente favorable a los obreros. Al año siguiente, nuevamente con el apoyo del gobierno, la FOM se impuso en otra huelga: su prestigio iba en aumento, así como su vinculación con el radicalismo. "García, según mi información —dice R. Stordeur—, fue hombre que se apoyó mucho en Yrigoyen, y también en Alvear a través de su ministro Ortiz (...) Sacaba ventajas para su gremio aprovechando el apoyo de Yrigoyen (...) Los dirigentes marítimos, con García a la cabeza, desarrollaban una política proclive al yrigoyenismo, pero en base a que el yrigoyenismo les había concedido una cantidad de cosas muy importantes"<sup>27</sup>.

Desde entonces, los socialistas no dejaron de denunciar esta connivencia "anarco-radical": "Los anarco-sindicalistas pueden disfrazar sus verdaderos propósitos —decía, por ejemplo, La Vanguardia el 17-5-1927—, que son los de servir los intereses del señor Irigoyen y de su camarilla (...) Señores pseudo anti-políticos, anarco-sindicalistas, a definirse llaman y vuestro juego sucio ya no engaña a nadie. Vuestra máscara anti-burguesa es apenas un miserable ardid de histriones en desgracia". "Los sindicalistas —afirma, por su parte, el dirigente de los municipales Francisco Pérez Leirós— tenían conexiones subterráneas con gobernantes, y sobre todo con el gobierno de Yrigoyen"<sup>28</sup>. "Si los sindicalistas tuvieron cierta caracterización política —agrega R. Stordeur— se los podría calificar de radicalizantes"<sup>29</sup>. El ferroviario José Domenech es aún más contundente: "Yo he llegado a esta conclusión: el grupo sindicalista (...) allá en lo más recóndito de su corazón, eran radicales, todos radicales"<sup>30</sup>.

La última afirmación resulta, en realidad, exagerada: como veremos, salvo en el caso de la FOM —en que la relación inicial se mantuvo hasta 1930— la vinculación de los dirigentes sindicalistas con el radicalismo ni llegó a ser estable ni permanente. El caso de los ferroviarios establece los límites a que podía llegar el caudillo radical en sus intentos de mantener buenas relaciones con el movimiento obrero. En 1917, una serie de huelgas parciales culminó con la declaración de la primera huelga general ferroviaria que paralizó el tráfico durante veinticuatro días. El gobierno empezó por instar a las empresas a satisfacer las demandas obreras, pero ante su negativa dictó un decreto ordenando la normalización compulsiva del trabajo. Este fue rechazado por la FOF y la FORA-9º amenazó con una huelga general: el gobierno dejó entonces sin efecto el decreto e inició laboriosas negociaciones que culminaron con una reglamentación del trabajo que recogía buena parte de las demandas obreras.

Desde entonces, la prensa radical no dejó de recordar el papel de Yrigoyen en la solución del conflicto. Para hacer cesar la huelga ferroviaria —recordaba, por ejemplo, La Epoca el 5-1-1919— la oposición reclamaba mano dura: "Se quería que se fusilasen masas de obreros; se reclamaba el estado de sitio, se pedía aumento de fuerzas, en una palabra: se exigía que el gobierno ahogara en sangre, como en tiem-

pe del 'régimen', las justas reivindicaciones del trabajo, porque, en su egoísmo incalificable, pensaban en sus intereses en peligro, prefiriendo cuidarse de éstos antes de concurrir a la acción del gobernante que, dándose cuenta de los deberes de la hora presente, estaba obligado a afrontar los problemas de orden social con el criterio de un hombre ilustrado, altruista y humano, y porque pensaba y sigue pensando que estas cuestiones que afectan la vida y el porvenir de los que concurren con su esfuerzo a la grandeza nacional, deben ser las que principalmente preocupen a un gobierno nacido de las fuentes de una democracia de verdad (...). El país está palpando ahora los beneficios de su sabia política social, y con las acertadas medidas de gobierno que se adoptan, ha de poder mirar tranquilo el tiempo que viene, sin que puedan perturbarlo en su desarrollo los espasmos de los que piden más justicia, porque ella se hará cumplida y completa".

"Desde el 12 de octubre de 1916 —decía, por su parte, Horacio B. Oyhanarte en la Cámara de Diputados— sabe la clase trabajadora argentina que se ha iniciado en el país una nueva era, que ninguno de sus derechos será hollado, que ninguna de sus legítimas aspiraciones será defraudada (...). Hoy como nunca saben las clases trabajadoras del país (...) que una gran justicia y una gran seguridad se ciernen en nuestro ambiente, y que ya pasaron —felizmente— los espectáculos bochornosos a que nos tenía acostumbrados el régimen; cuando creía desarmar con el pararrayos de la fuerza las más legítimas reivindicaciones sociales (...). Todo el mundo sabe que el presidente de la república ha sido acusado de parcialidad, pero no a favor de las empresas ni de sus patrones —y aunque sea injusta la acusación, mejor es que se haya producido en esa dirección— sino a favor de los obreros"<sup>31</sup>.

Irónicamente, ambos testimonios —que ilustran el tono de la propaganda radical de esos años— preceden en unos pocos días a los acontecimientos de la "semana trágica", lo que nos revela las contradicciones que encerraba la política obrera de Yrigoyen. Efectivamente, su actuación en el conflicto ferroviario había sido duramente criticada por todos los sectores patronales y conservadores, que movilizaron todos sus recursos para frenar la "demagogia" yrigoyenista, llegando a amenazar la propia estabilidad del gobierno. Es por eso que al año siguiente, ante una nueva huelga en los ferrocarriles Sur y Pacífico, la actitud del gobierno fue diferente: esta vez no vaciló en recurrir a las tropas y la huelga fracasó, saliendo la FOF muy debilitada del conflicto. Igualmente represiva fue la actitud del gobierno ante la huelga de los municipales (dirigida por socialistas) y la de los frigoríficos (que, iniciada con el auspicio de la FORA-99, escapó luego a su control). Es que, aparte de las consideraciones políticas implicadas en estos casos, el intento de Yrigoyen de establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y las organizaciones obreras se enfrentaba con las condiciones económico-sociales más adversas.

La Primera Guerra Mundial repercutía negativamente sobre la situación económica, produciendo carestía y desocupación. Frente a un alza del 60 % en el costo de la vida entre 1914 y 1918, los salarios se ha-

bían mantenido estancados, con lo que el salario real bajó prácticamente en un 40 %. El alto grado de desocupación —cerca del 20 % de la población activa en 1917— había limitado las posibilidades defensivas de los trabajadores: el número de huelgas entre 1914 y 1916 fue el más bajo desde que se tienen datos (1907). Pero al recuperarse, desde 1917, el nivel de ocupación, todos los trabajadores se lanzaron a la lucha por la recuperación de su salario, y es así que el período 1917-1921 registra el mayor número de huelguistas de toda nuestra historia, con cifras que oscilan por encima de los 130.000 anuales, para ascender en 1919 a más de 300.000.

La promesa de una actitud neutral, e incluso favorable, por parte del gobierno, así como el resonante ejemplo de los marítimos y ferroviarios, no estuvieron ausentes, sin duda, entre las motivaciones de esta oleada de luchas reivindicativas. De hecho, la oposición achacó la entera responsabilidad por esta escalada huelguística a la demagogia y a la excesiva tolerancia del gobierno radical, reforzando sus presiones para que se impusiera una política de mano dura. Desde 1918 la Asociación Nacional del Trabajo (ANT) comenzó a organizar, además, elementos de choque al servicio patronal.

Punto culminante de esta intensificación de las luchas sociales, el estallido de la "semana trágica" —cuyas complejas motivaciones y dramático desarrollo hemos analizado en otra parte<sup>32</sup>— obligó al gobierno radical, amenazado incluso por un golpe militar, a ordenar una sangrienta represión. Aunque la FORA-99 trató de limitar el movimiento, su influencia no pudo superar el clima de violencia y represión desencadenada por las fuerzas policiales y para-policiales. La formación de la Liga Patriótica Argentina y su rápido crecimiento tendió a prolongar ese clima y ejerció una constante presión sobre el gobierno de Yrigoyen, jaqueado por la oposición y vigilado por los mandos del ejército. La superación de esta crisis y la supervivencia del gobierno radical sólo se logró a costa de abandonar el intento de introducir un cambio sustancial en la actitud del Estado frente al problema social. La violenta represión de las huelgas patagónicas de 1921-22 confirma el sentido de la nueva orientación.

De la etapa "obrerista" del gobierno de Yrigoyen sólo quedó, pues, la relación personal del caudillo con los dirigentes de la FOM y el recuerdo de su actuación en los conflictos de marítimos y ferroviarios, exaltada hasta el panegírico por la propaganda radical. Esa propaganda no dejaba de encontrar eco en algunos sectores de la clase trabajadora: un petitorio de los ferroviarios de Henderson (Provincia de Buenos Aires) solicitando el apoyo de Yrigoyen —ya a fines de su primera presidencia— para que impulsara en las Cámaras ciertas reformas a la ley de jubilaciones, ejemplifica el tono que caracterizaba las relaciones de esos sectores con la figura paternal y protectora del caudillo radical. La nota —que *La Epoca* publicaba con satisfacción y *La Vanguardia* reproducía malévola— comenzaba en estos términos: "El obrero del riel, el pobre trabajador, cuyo bienestar depende de las almas nobles de los hombres que rigen el destino de la nación, sin más fuerza que el mayor

número y su mísera condición que conmueve el corazón de los que tienen el deber de velar por el engrandecimiento común (...) ha reconocido unánimemente al magnánimo presidente, único que ha tomado bajo su amparo al pueblo que sufre las consecuencias de su condición humilde" <sup>33</sup>. Esa actitud mendicante y aduladora, tan ajena a las tradiciones del movimiento obrero, no dejaría de ser estimulada por la propaganda radical.

Durante la presidencia de Alvear, la mayoría radical en el Congreso permitió la sanción de una serie de leyes sociales que, proyectadas en muchos casos durante el gobierno de Yrigoyen, habían sido bloqueadas hasta entonces por la oposición conservadora. Esto permitió agregar un nuevo elemento a la propaganda yrigoyenista: "Todas las leyes benefactoras y de completo amparo, y principalmente la de jubilaciones —decía, por ejemplo, el Comité Ferroviario pro-candidatura presidencial de Yrigoyen en 1927—, fueron discutidas y sancionadas bajo los auspicios del gobernante más honrado y justo de los últimos tiempos. Para la consecución de esas notables mejoras, sin las cuales nuestro gremio sería todavía un conglomerado sin base, sin orden y sin protección alguna, fue menester que ocupara la presidencia de la república un hombre bueno en toda la extensión de la palabra; enérgico y justiciero en todos los casos; un hombre inteligente, sencillo y trabajador, con una visión clara y profunda de las cosas, y dueño de un corazón sano, que es al fin de cuentas lo que se necesita para gobernar este país (...) Y nosotros, todos los ferroviarios, los que constituimos la columna gremial más poderosa del país, obligados por un deber de gratitud y alentados por la certidumbre de llegar a obtener el perfeccionamiento de nuestras leyes protectoras y mayores beneficios aún, que han de ser en breve una hermosa realidad, debemos formar un solo frente para que, unidas nuestras fuerzas, podamos hacer flamear airosa e inmovible nuestra bandera de paz junto al doctor Hipólito Yrigoyen" <sup>34</sup>.

Como vemos, la política de Yrigoyen no sólo resulta precursora en su intento de establecer un nuevo tipo de relación entre el poder político y el movimiento sindical, sino también en la configuración de una relación fuertemente personalizada y paternalista entre el caudillo y sus seguidores, basada en un sentimiento de gratitud y lealtad. "Todas las aspiraciones proletarias logran el eco debido en el corazón del ilustre mandatario —machacaba *La Epoca* durante la segunda presidencia—, y su espíritu comprensivo, noble y generoso, va logrando que la legislación social argentina sea de justicia social. Todos los gremios, todo el proletariado, mejora su suerte. Y es por ello que, respondiendo a sinceros sentimientos de justicia, reconoce que el presidente Yrigoyen es, en la ley, un verdadero padre de los trabajadores argentinos" (23-6-1930). No es casual, pues, que tras quince años de orfandad, muchos yrigoyenistas hayan encontrado en Perón a su nuevo líder.

#### Auge y declinación del sindicalismo

Mientras tanto, el crecimiento de la FORA-9ª, al calor de la intensificación de las luchas reivindicativas, era fulminante. Si la CORA ha-

bía tenido alrededor de 10.000 adherentes (de los cuales entre 5.000 y 7.000 cotizaban regularmente), la FORA-9ª reunirá, en su 10º Congreso (diciembre de 1918) a representantes de 127 sindicatos con 36.000 cotizantes (aunque el total de sus efectivos se elevaría a 200 organizaciones y 43.700 adherentes) <sup>35</sup>. Para el 11º Congreso (enero-febrero de 1921) estarían en condiciones de concurrir más de 500 organizaciones con 95.000 adherentes (aunque asistieron efectivamente unos 200 sindicatos con 46.500 cotizantes). Pero en este congreso aparecieron ya los signos precursores de una nueva división. La credencial del delegado de los curtidores, Agustín Muzio, fue rechazada por considerarse que al ser elegido diputado había dejado de ser obrero en el ejercicio de su profesión. Esta situación, que se reiteraría en todos los congresos posteriores, revela el grado de enfrentamiento que oponía a la mayoría **sindicalista** contra la creciente actividad socialista en el campo gremial. También hizo su aparición en el congreso un grupo comunista que planteó la adhesión a la Internacional Sindical Roja y, al ser rechazada su propuesta, renunció a los cinco cargos que se le habían asignado en el Consejo Federal.

Estas disputas intestinas debilitaban a la central, de modo que al reunirse un nuevo Congreso de Unidad, en marzo de 1922, ésta participó con sólo 102 organizaciones, frente a 60 autónomas y 14 de la FORA-5ª. En este congreso volvió a plantearse la cuestión de compatibilidad entre el desempeño de cargos políticos y la representación gremial: la credencial del concejal comunista José F. Penelón fue rechazada por 115 votos contra 79. Después de arduas discusiones, de este congreso surgió la Unión Sindical Argentina (USA), que reunía a los sindicatos de la FORA-9ª y algunos autónomos, mientras que la FORA-5ª se mantenía refractaria.

La declaración de principios de la USA es un verdadero manifiesto **sindicalista**: "Considerando (...) que las enseñanzas objetivas de la historia, y en particular de las luchas sostenidas por el proletariado contra su enemigo natural —el capitalismo burgués— han demostrado plenamente la inutilidad de la política colaboracionista, del recurso parlamentario y de la táctica corporativista limitada a la simple obtención de mejoras (...);

"Que sólo la acción directa, el incesante batallar en los sindicatos, la educación revolucionaria del proletariado, ha dado frutos positivos, librando a los trabajadores de tutelajes bochornosos de políticos y logreiros de toda especie;

"Que el proletariado de cada región ofrece particularidades propias, producto de las influencias ideológicas que han sedimentado su educación societaria, determinado su orientación e influido preponderantemente en la elección de sus medios de lucha; y que en la región argentina las tendencias proletarias son manifiestamente adversas al colaboracionismo, anti-políticas y fervientemente revolucionarias.

"Por tanto determina:

1º) Desconocer todo derecho de intervención y tutelaje a las fracciones organizadas en partidos políticos en las cuestiones fundamentales

que atañen e interesan al proletariado argentino que milita en las filas de la USA;

2º) Declinar toda invitación de partidos políticos para intervenir en campañas electorales o de protesta con fines políticos;

3º) Proclamar como principio invariable en el período de lucha contra el capitalismo la insuperable superioridad de las armas que ofrece la acción directa, desde la huelga, el boicot y el sabotaje hasta los movimientos insurreccionales y la propia revolución social;

4º) Afirmar que la única vanguardia del proletariado la constituyen los aguerridos sindicatos que constituyen la USA, haciendo suya la tesis: 'Todo el poder a los sindicatos' para el caso de una efectiva revolución, como la única que encuadra a la tradición sindical revolucionaria del país'<sup>36</sup>.

Pero este alto grado de definición ideológica conspiraba contra la extensión de la central, y así la USA aparece bastante disminuída con respecto a su antecesora: en el referéndum convocado poco después sobre la asistencia a sendos congresos internacionales que se reunían en Berlín y en Moscú, sólo participaban 130 organizaciones con menos de 30.000 cotizantes. La presencia comunista ya era importante (votaron por Moscú 23 organizaciones con 5.600 cotizantes), y la socialista no dejaba de serlo, pero los **sindicalistas** tenían todavía una considerable mayoría (por la no concurrencia a ninguno de los dos, que era la posición **sindicalista**, votaron 63 organizaciones con 17.500 cotizantes).

El primer congreso de la USA (abril de 1924) se convirtió nuevamente en un campo de batalla: primero, acerca del consabido rechazo de credenciales (esta vez le tocó al diputado Francisco Pérez Leirós, delegado de los municipales); después, sobre la adhesión a la Internacional Roja. Poco después del congreso, la Unión de Obreros y Empleados Municipales (UOEM) se desafiló de la USA, y los curtidores siguieron su ejemplo. Finalmente, en febrero de 1926 los sindicatos socialistas y otros que, sin serlo, se sentían rechazados por el embanderamiento **sindicalista** de la USA y por su extremismo verbal, decidieron formar una nueva central, con el nombre de Confederación Obrera Argentina (COA). La USA ya no agrupaba, en su 2º Congreso (mayo de 1926), más que a 101 organizaciones con 16.100 cotizantes. La declinación de la corriente **sindicalista** había comenzado: por primera vez desde 1906 se veía en minoría frente a una central socialista, apoyada en dos de los gremios más importantes —ferroviarios y municipales— que la superaba en número de adherentes.

La situación, sin embargo, no era tan definida. Los efectivos de la COA aparecían abultados, sobre todo, por la incorporación de la Unión Ferroviaria (UF) —que tendría, en esos momentos, unos 45.000 asociados<sup>37</sup>— y ese gremio no lo controlaban todavía los socialistas. Cuando sobre los restos de la FOF, se constituyó en 1922 un organismo centralizado, con el nombre de UF, su presidente fue Antonio Tramonti, que la dirigirla durante más de una década (1922-34). Aunque atacado al principio por los **sindicalistas** de la USA<sup>38</sup>, Tramonti —cuya ideología personal no parece haber sido demasiado definida— terminó aliándose

con ellos, con quienes compartió la conducción del movimiento obrero durante la primera mitad de la década del 30.

Por otra parte, el alejamiento de los ferroviarios de la USA se había producido, más que por diferencias ideológicas de fondo, por discrepancias en cuanto a la forma de organización. Parte de su delegación había sido cuestionada en el congreso de 1922 porque en lugar de ser elegida por las seccionales lo había sido por los Comités Centrales de los sindicatos de Tráfico y de Talleres, que estaban en proceso de reorganización y centralización. Se trataba, por un lado, de una lucha interna en el gremio ferroviario (pues también había seccionales que habían elegido sus delegados directamente, sin ceder ese derecho al Comité Central) y, por otro, de una cuestión de principios sobre el papel de los cuerpos directivos y los peligros de la centralización. Después de largos debates, los delegados fueron finalmente aceptados, pero el incidente dejó su secuela de resquemores y, cuando meses después se constituyó la UF con una organización fuertemente centralizada, esta se mantuvo al margen de la USA, la que acepto, en cambio, a una Federación rival que tuvo una existencia muy efímera. De modo que la incorporación de la UF a la COA se produjo más por resentimiento contra la USA que por afinidad con los sindicatos socialistas que organizaron la nueva central.

No es extraño, entonces, que al unirse ambas centrales en 1930, formando la CGT, los **sindicalistas** de la USA pudieran llegar a una alianza con los ferroviarios, consiguiendo así una sólida mayoría en el Comité Nacional Sindical (CNS) encargado de dirigirla, y que solo a fines de 1935 —después de que la UF cambiara de manos— pudieran ser desalojados de esa posición mediante un procedimiento inusitado.

Pero si la decadencia del sindicalismo era en algunos aspectos aparente, en otros no dejaba de ser real. La creciente prosperidad de la década del 20 se traducía en un considerable aumento del salario real (ver gráfico 4, en pág. 44), que llegó a duplicarse durante la misma. Las luchas sociales se atenuaron sensiblemente y la segunda mitad de la década registra, por ejemplo, el menor promedio anual de jornadas perdidas por huelgas anterior a 1945 (ver cuadro 5, en pág. 49). El relativo bienestar alejaba, pues, a los trabajadores de las luchas reivindicativas en que los **sindicalistas** centraban su actividad, hacía menos atractivas sus propuestas. La situación era, en cambio, más favorable para el desarrollo del gremialismo socialista, y a medida que crecía su influencia, los **sindicalistas** se atrincheraban en una actitud cada vez más sectaria que difícilmente podría mejorar su posición.

Esta etapa terminaría bruscamente en 1930, con la drástica transformación en la situación política y económica del país y el comienzo de un proceso que modificaría sustancialmente su estructura económico-social, influyendo en forma decisiva sobre el desarrollo de la clase obrera y sus orientaciones. Veamos, pues, cuál era el sentido y la magnitud de estos cambios antes de seguir con el desarrollo de los acontecimientos.

## 2. La clase obrera en una época de transición

Hasta 1930, el movimiento obrero se había desarrollado en el marco de una estructura económico-social relativamente estable. Desde entonces, la crisis económica mundial primero y la forma en que se reorganizaron las relaciones económicas internacionales después, hicieron que esa estructura se fuera transformando. Ese proceso, que implicaba cambios importantes en la composición de la clase obrera y en su papel en la sociedad, no era tan fácil de percibir mientras se estaba realizando, y escapó en gran medida a la captación de los dirigentes sindicales y políticos. Su adaptación a las nuevas condiciones que imponía una realidad rápidamente cambiante fue entonces dificultosa e incompleta, y terminaron siendo superados por la misma.

Trataremos aquí de sintetizar los aspectos esenciales de esos cambios y sus repercusiones sobre la composición y la situación de la clase obrera.

### La crisis económica y la desocupación

Dado el alto grado de integración de la Argentina en el mercado mundial, la crisis desencadenada en los centros capitalistas desde fines de 1929 no podía dejar de repercutir intensamente sobre su economía. La caída de la demanda y de los precios en Europa pronto se tradujo en disminución del volumen y, sobre todo, del valor de las exportaciones (que se redujo a la mitad), lo que llevaría a un retroceso en la actividad agrícola-ganadera. Al mismo tiempo, la transferencia de capitales al exterior debilitó el valor de la moneda, que sufrió una devaluación del 40%. Ante esta situación, para cumplir con sus obligaciones financieras en el exterior, el gobierno debió limitar sus gastos —mediante la reducción, entre otras cosas, de las obras públicas y del sueldo de los empleados— y aumentar sus ingresos incrementando los impuestos (y estableciéndolo a los réditos). Finalmente, tanto para cubrir las necesidades fiscales como para equilibrar la balanza comercial desalentando las importaciones, se elevaron los derechos aduaneros.

Todo esto influyó en forma contradictoria sobre la actividad industrial: la caída de los precios agropecuarios y el aumento de los derechos de importación favorecían a las industrias que elaboraban materia prima nacional (alimenticias, textiles); la desvalorización del peso, en cambio, perjudicaba a las que debían importar sus materias primas (metalúrgicas por ejemplo). El aumento de los equipos y productos intermedios importados, así como la reducción del mercado por la recesión general, las afectaba a todas, aunque en distinta medida. En suma, la producción global de la industria también declinó, y para 1932 se estima que estaba trabajando al 55 % de su capacidad<sup>39</sup>.

Esta situación se tradujo, para la clase trabajadora, en un aumento de la desocupación como no se conocía desde los días de la primera guerra mundial. Según los datos oficiales, el número de desocupados llegaba en 1932 a 334.000, de los cuales 264.000 lo estaban en forma total y 70.000 en forma parcial. Un 44 % del total eran trabajadores agrícolas y jornaleros sin especificación de tareas y un 37 % obreros industriales y del transporte; más de la mitad de los desocupados estaban en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires —lo que muestra la incidencia de la construcción, la industria y el comercio— y casi un 30 % en las otras provincias agrícolas más importantes (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos)<sup>40</sup>. Los sectores urbanos más afectados eran: construcción y materiales (en que el nivel de ocupación había descendido en un 40 % respecto al de 1929), madera (27 % menos), comunicaciones (23 %), metales y confecciones a domicilio (22 % en ambos casos). La ocupación sólo había aumentado en algunas actividades improductivas (hotelería, 74 %; espectáculos públicos, 4 %), los transportes (7 % los terrestres y 6 % el resto) y unas pocas industrias (textiles, 17 %; gráficas, 7 %; confecciones en taller, 8 %)<sup>41</sup>. A fines de 1933, el vice-cónsul de los EE.UU. informaba sobre la existencia de 500.000 desocupados<sup>42</sup>.

Es por eso que, a pesar de la reducción de los salarios (el salario medio de un obrero industrial bajó de 130 \$ en 1929 a 105,5 \$ en 1932) y del consumo (el valor promedio del presupuesto familiar descendió en esos años de 157,10 \$ a 122,60 \$)<sup>43</sup>, las luchas reivindicativas alcanzaron por entonces los niveles más bajos de toda la historia del movimiento obrero. Estas condiciones, sumadas a la represión desencadenada por el régimen de Uriburu, explican también la impotencia de la CGT durante sus primeros años de existencia, su actuación puramente defensiva y, en parte, su actitud complaciente frente al gobierno, aceptada quizá como el precio que había que pagar para sobrevivir.

Pero estas consecuencias inmediatas de la crisis pronto serían superadas: ya en 1933 comenzó la recuperación económica y desde el año siguiente la ocupación volvía a sus niveles anteriores gracias, sobre todo, a la creciente actividad industrial. Es precisamente en ese campo donde la crisis y la larga depresión que le siguió producirían efectos más perdurables.

## La sustitución de importaciones

Además de ser más lenta que en la Argentina, la recuperación en los países centrales no significó un retorno a la situación anterior. El comercio internacional, trabado por una serie de medidas proteccionistas (formación de bloques, acuerdos bilaterales, cuotas de importación, controles de cambio, tarifas aduaneras), tardaría muchos años en recuperar los niveles anteriores a la crisis, y el deterioro de los términos del intercambio para las exportaciones agropecuarias se haría permanente. El flujo de capitales, por su parte, no sólo se detuvo sino que invirtió su sentido tradicional al producirse un intenso retorno de inversiones hacia los países centrales. Demasiado bien adaptada a la anterior estructura del mercado mundial, la adecuación de la Argentina a las nuevas condiciones no sería fácil y sólo lo lograría mediante una considerable transformación de su economía, cuyo rasgo esencial será el papel cada vez más importante de la industria.

Ya hemos visto cómo algunas de las medidas tomadas para paliar los efectos de la crisis habían favorecido el desarrollo de ciertas industrias. Al perpetuarse las circunstancias que habían determinado esas medidas (lenta recuperación de las exportaciones, deterioro de los términos del intercambio, desequilibrio de la balanza de pagos), el grupo dominante se verá forzado a mantenerlas, a pesar de que no respondían estrictamente a sus intereses y menos aún a su ideología<sup>44</sup>. No sólo se mantuvieron entonces las tarifas aduaneras, que habían sido aumentadas como recurso transitorio, sino que el control de cambios establecido en 1933 permitió una verdadera regulación de las importaciones.

Con esta protección, un mercado interno que comenzaba a expandirse con el aumento de la ocupación, capitales disponibles y mano de obra barata, el crecimiento de la industria sería rápido. Si durante la década del 20 el número de establecimientos industriales había aumentado a razón de 1.700 por año, durante la siguiente lo hará a razón de 2.800, y entre 1940 y 1945, de 5.000. Ya en 1935, el 25 % de los establecimientos industriales censados se habían fundado después de 1931, y la proporción era aún mayor en los rubros del caucho y sus derivados (65 %), textiles (34 %), vehículos y maquinarias (28 %), etc.<sup>45</sup>. En 1946, el porcentaje de establecimientos fundados en los últimos quince años había ascendido al 62 % del total, superando ese porcentaje en las industrias del cuero (88 %), caucho (80 %), maquinarias y aparatos eléctricos (77 %), textiles (71 %), piedras, vidrio y cerámica (68 %), madera, papel y cartón, productos químicos, vehículos y maquinarias, confecciones y metales. Sólo ocupaban al 42 % de los obreros y representaban el 37 % de la producción, lo cual —si tenemos en cuenta que entre ellos se contaban muchas grandes empresas de capitales extranjeros— nos da la pauta de las escasas dimensiones de la mayoría<sup>46</sup>. El 79 % de los establecimientos empleaba a menos de 10 obreros, y sólo el 1,6 % a más de 100<sup>47</sup>, pero los establecimientos con un capital de 1.000.000 \$ (2,6 % del total) ocupaban a un 49 % de los obreros y elaboraban un 65 % de la producción<sup>48</sup>. Vale decir que, pese a la pro-

liferación de pequeños talleres, el avance de la gran industria era también considerable.

A ello contribuía en gran medida el hecho de que la mayor parte de las inversiones extranjeras —a diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces— se orientaban hacia la industria. Así aparecieron en esa época, por ejemplo, Nestlé, Suchard, Bols y Quaker Oats entre las alimenticias; Sudamtex, Anderson Clayton y Ducilo entre las textiles; Firestone, Pirelli y Michelin en la industria del caucho; Philips, General Electric y Osram en la de artefactos eléctricos; Johnson y Johnson, Abbot, Pond's y Coty en productos farmacéuticos; Santa Rosa, Olivetti y National Lead entre las metalúrgicas. En su mayoría de origen norteamericano o europeo continental, estas empresas aprovechaban las altas tasas de ganancia que proporcionaba un mercado protegido y una expansión. Pero a pesar de sus dimensiones, las empresas extranjeras sólo representaban, en 1935, un 50 % de la producción nacional; el resto correspondía a una multitud de pequeñas y medianas empresas de capital nacional<sup>49</sup>.

Las ramas que se desarrollaron más rápidamente fueron la de maquinarias y artefactos eléctricos y la de derivados del caucho: casi inexistentes hasta 1930, se beneficiaban con la ampliación del consumo (electrificación, auge del automotor) y con fuertes inversiones extranjeras. Les siguen la de refinación del petróleo (nuevamente el automotor) y la de maquinarias, vehículos y equipos. Pero las más importantes para la sustitución de importaciones fueron la textil y la de alimentación y bebidas. Estos rubros, que representaban todavía un 39 % del valor de las importaciones en 1933 podían beneficiarse con los bajos precios de la materia prima nacional.

El 71 % de los establecimientos textiles censados en 1946, con un 50 % del personal y un 54 % de la producción, habían sido fundados después de 1930<sup>50</sup>. Ya en 1933 la producción nacional proporcionaba la totalidad de los hilados y el 80 % de los tejidos de lana, pero sólo la mitad de los hilados y el 25 % de los tejidos de algodón. Seis años después, casi todos los hilados y el 40 % de los tejidos de algodón se producían en el país, lo mismo que todos los tejidos de punto y de seda.

Los aceites comestibles, para ejemplificar el avance en la rama de la alimentación, eran importados en un 67 % antes de 1930, proporción que había bajado a un 26 % en 1936 y prácticamente a cero al terminar el período<sup>51</sup>. En su conjunto, si los productos importados representaban en 1925-29 un 35 % del consumo total, para 1935-40 ese porcentaje se había reducido a un 24 % y en un quinquenio siguiente bajaría a menos del 20 %<sup>52</sup>. Paralelamente, si en 1925-29 se exportaba un 39 % de la producción nacional, después de 1940 la proporción sería de menos de un 25 %.

Las condiciones creadas por la guerra, finalmente, darían un nuevo impulso a la industrialización. Las dificultades en que se encontraron las exportaciones agrícolas (escasez de bodegas, caída del precio de los cereales), junto con el encarecimiento de los artículos importados y la escasez de algunos de ellos, estimularon el crecimiento y la diversifi-

cación de las industrias. Si bien algunos rubros sufrieron por la falta de materias primas (caucho, metales), la mayoría se benefició con la restricción de las importaciones.

En total, el valor de la producción industrial se triplicó entre 1935 y 1945, mientras que el de la producción agropecuaria no llegó a duplicarse<sup>53</sup>. Así la industria, que ya representaba un sector de fundamental importancia —en 1942, el 44,7 % del valor de la producción nacional<sup>54</sup>—, comenzó a recibir mayor atención por parte de los gobiernos: en 1940, el Plan Pinedo proponía una serie de medidas de apoyo; en 1943 se creó el Banco de Crédito Industrial y al año siguiente la Secretaría de Industria y Comercio.

Sin embargo, la situación de buena parte de esa industria tan rápidamente desarrollada no era demasiado firme. Durante la guerra, por ejemplo, ante la imposibilidad de importar nuevos equipos, el incremento de la producción se había hecho principalmente sobre la base de una intensa explotación de maquinarias que ya comenzaban a mostrarse envejecidas y agotadas. ¿Qué sucedería al terminar la guerra y tener que enfrentar nuevamente la competencia externa? Muchos de estos industriales en apuros o temerosos de llegar a estarlo buscarían en el peronismo una representación que no encontraban en ninguno de los partidos tradicionales. Y lo mismo ocurriría con sus obreros.

#### Las migraciones internas

Durante el proceso que acabamos de reseñar, la clase obrera no sólo aumentó cuantitativamente al ritmo de la industrialización, sino que también experimentó importantes cambios en cuanto al origen de sus integrantes.

La inmigración europea, que había aportado la mayor parte de la mano de obra necesaria para la expansión económica durante las décadas anteriores, se redujo desde 1930 a cifras insignificantes. Así, mientras que en 1914 los extranjeros representaban un 47 % de la población ocupada, en 1947 sólo constituían el 22 %<sup>55</sup>. En cambio, el porcentaje de nativos censados fuera de su jurisdicción natal aumentó, entre esos años, del 14 al 25 %<sup>56</sup>. Esto nos indica hasta qué punto las migraciones internas habían reemplazado a la inmigración como proveedoras de mano de obra y, aunque no hay cifras globales intermedias, todo indica que la mayor parte de esa sustitución se produjo a partir de 1930.

En cuanto al origen de estos migrantes, muchos de ellos provenían de las zonas cerealeras donde las consecuencias de la crisis se sumaban a los tradicionales problemas derivados de las formas de tenencia de la tierra y, desde 1938, a la declinación de la agricultura a favor de la ganadería: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa aportaron el 50 % de los mismos. Sin embargo, los emigrados de las primeras cuatro provincias no representaban en relación con los nacidos en las mismas un porcentaje superior al del total del país, y por otra parte, ellas también recibían inmigrantes de otras provincias en

proporciones importantes. En cambio, un territorio exclusivamente agrícola-ganadero como La Pampa vio emigrar un 37 % de sus nativos sin que los inmigrantes que recibió de otras provincias representaran más de 1/3 de esa cantidad.

Peor era la situación de las provincias "pobres", crónicamente estancadas, con altos porcentajes de emigración —San Luis (35 %), La Rioja (42 %), Catamarca (31 %), Corrientes (28 %), Santiago del Estero (26 %)— no compensados por cifras importantes de inmigración.

Un tercer grupo lo constituirían aquellas provincias cuyas economías regionales sufrían también los efectos de la crisis (Mendoza y San Juan, Tucumán, Chaco) pero que, si bien eran abandonadas por parte de sus nativos, atraían en cambio a los emigrantes de sus vecinas más pobres<sup>57</sup>.

En cuanto al punto de llegada de ese flujo de migrantes eran, sobre todo, las ciudades (la población urbana aumentó del 53 al 62 % entre ambos censos) y principalmente la Capital Federal y su periferia. La capital y la provincia de Buenos Aires ya reunían, en 1935, el 59 % de los establecimientos industriales del país, con un 71 % de los obreros ocupados, un 70 % de la fuerza motriz y un 65 % de las inversiones<sup>58</sup>. Si tenemos en cuenta que los partidos que rodean a la capital representaban más del 70 % de la fuerza motriz, el personal ocupado y la producción industrial de la provincia, veremos hasta qué punto había llegado ya la concentración de la industria en lo que se llamaría luego el Gran Buenos Aires. Sumemos a ésta la creciente actividad en construcciones, obras públicas, transportes, etc. y entenderemos fácilmente que haya sido el principal foco de atracción para los emigrantes del interior, reuniendo al 56 % de los mismos.

El crecimiento de este conglomerado, que llegaría a nuclear el 29 % de la población del país en 1947, tuvo un ritmo de 66.000 nuevos habitantes por año entre 1914 y 1936, 85.000 entre ese año y 1943, y 142.000 entre 1943 y 1947, ritmo que estuvo sostenido después de 1930 fundamentalmente por la llegada de migrantes del interior (8.000, 72.000 y 117.000 por año en los periodos mencionados)<sup>59</sup>. No es extraño, entonces, que el porcentaje de nativos del interior del país sobre el total de la población subiera en la capital de 9 en 1914 a 15 en 1936 y 32 en 1947, mientras que el de extranjeros bajaba de 49 a 36 y 27 en los mismos años<sup>60</sup>. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de nativos del interior sobre la población total era en 1947 de 22, pero subía considerablemente en los partidos recientemente industrializados del conurbano: San Martín (45 %), Avellaneda (34 %), Lanús (33 %)<sup>61</sup>. Del mismo modo, mientras que el crecimiento anual medio por cada 1.000 habitantes fue para toda la provincia de 21 entre 1914 y 1947, la tasa supera a los 40 en San Martín y La Matanza y a los 30 en Avellaneda, Esteban Echeverría, General Sarmiento, Morón, Quilmes y San Isidro<sup>62</sup>. Es así como en el conjunto del Gran Buenos Aires los migrantes internos constituían un 28 % de la población en 1943 y un 37 % en 1947<sup>63</sup>.

Dado que estos migrantes pertenecían en su gran mayoría a los sectores populares, su incidencia en la composición de los mismos era aún mayor que sobre la población en general. Germani estima que en esa

zona más de la mitad de la clase obrera estaba constituida por migrantes recientes, en su mayor parte con menos de cinco años de residencia urbana, en 1947. Esa estimación ha sido discutida, sin embargo, por E. Kenworthy, para quien sólo 1/3 de la clase obrera del Gran Buenos Aires reuniría esas características en esa época<sup>64</sup>. Sea cual fuere la proporción exacta, se trata, sin duda, de algo más que una cuestión puramente cuantitativa.

La importancia de estos cambios y sus consecuencias socio-políticas han sido ampliamente destacadas por diversos autores. G. Germani, por ejemplo, señala: "Es importante advertir que en vísperas de la serie de cambios políticos y sociales que ocurrieron a partir de 1943, la población del Gran Buenos Aires estaba integrada por una fuerte proporción de personas inmigradas del interior del país, y desde fecha muy reciente. En efecto, si es razonable suponer que el ritmo de inmigración estimado para el período 1936-43 corresponde también a algunos años precedentes, la cantidad de inmigrantes del interior con una antigüedad de radicación no mayor de 10 ó 11 años puede fijarse con todo fundamento para la segunda de esas fechas alrededor de los 800.000, proporción muy elevada si se piensa que esos inmigrantes se concentran sobre todo en una clase social —la clase obrera— y en determinado grupo de edad —las personas adultas o por lo menos mayores de 14 años—. Es perfectamente lógico suponer que la inmisión relativamente brusca de esta nueva masa de población —dotada de características psico-sociales propias y diferentes de las de los habitantes de larga radicación en la ciudad— haya influido significativamente en las maneras de pensar y obrar de las masas urbanas, especialmente en su sector obrero"<sup>65</sup>.

En efecto, la afluencia de una cantidad tan grande de población de origen rural o de pueblos chicos y la incorporación de su mayor parte a la industria implica una profunda transformación de la clase obrera. Sin tradición sindical, la mayoría quedará al margen de las organizaciones obreras, que en general se mostraron incapaces de atraerla. Recién después de 1946 comenzarán a ingresar masivamente en los sindicatos, transformando a los viejos y dando un carácter diferente a los recientemente creados.

Por otra parte, tampoco conviene exagerar el carácter "tradicional" de los lugares de origen de esos inmigrantes: el 60 % de los que vivían en el Gran Buenos Aires en 1947 provenían de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, es decir, de las provincias más "modernas"<sup>66</sup>.

Digamos finalmente que si no profundizamos acá sobre este tema no es porque ignoremos su importancia, sino porque consideramos que la misma ya ha sido suficientemente destacada por varios autores y porque nuestro objeto es subrayar, precisamente, el aspecto opuesto y complementario de esta transformación, es decir, los elementos de continuidad que —por debajo de estos cambios y en forma menos evidente— vincularán a la vieja clase obrera con la nueva.

## La estructura ocupacional y social

Globalmente, la estructura ocupacional no parece haber sufrido un cambio tan radical como el que se podría suponer, si bien esta impresión puede deberse en gran medida a las deficiencias de nuestras fuentes. Baste recordar al respecto que el Censo de 1947 registra un **descenso** en el porcentaje de la población ocupada en el sector secundario con respecto a 1914 (de 36 a 27 %), dato que —si tomamos en cuenta, por ejemplo, que más de 400.000 censados (el 36 % del sector secundario) aparecían agrupados en 1914 bajo el enigmático rubro de "industrias desconocidas"— sólo puede atribuirse a la vaguedad de algunas denominaciones y al uso de diferentes criterios de clasificación. Incluso en relevamientos muy próximos entre sí —como el Censo Industrial de 1946 y el Censo General de 1947— encontramos enormes discrepancias: por ejemplo, entre los ocupados en la producción secundaria (excluyendo construcción) según el segundo y los censados por el primero hay una diferencia de 233.475. Como esa diferencia se da casi íntegramente en el rubro Confecciones, la explicación no parece en este caso muy difícil: mientras el Censo General recoge también los datos de quienes trabajan en su domicilio en forma artesanal —individual, familiar o en ínfima escala—, al Censo Industrial —que se basa en los establecimientos visibles— esos datos se le escapan.

Con las limitaciones del caso, digamos entonces que en 1947 el sector terciario representaba un 42 % de la población ocupada, con neto predominio de tres rubros: comercio, bancos, oficinas y seguros (33 % del sector); Actividades de los Estados nacional, provinciales y municipales (23 %) y transporte terrestre (12 %). Tanto el conjunto del sector como los dos últimos rubros habían aumentado su importancia relativa desde 1914. En cambio, el otro rubro importante, servicio doméstico, había descendido del 27 al 15 %<sup>67</sup>. Si esto último denota un apreciable grado de modernización, lo mismo que el crecimiento del papel del Estado —que aún antes de las nacionalizaciones había casi duplicado su participación relativa en el sector—, lo abultado del primer rubro implica la subsistencia de una enorme, aunque decreciente, masa de pequeños comerciantes.

En cuanto al sector secundario, sus principales rubros eran en 1947 construcción y materiales (19 % del sector) y confecciones (17 %), mientras que las industrias fabriles ocupaban a contingentes más reducidos: alimentación (16 %), metales y maquinarias (15 %), textiles (8 %), madera (7 %), químicas (6 %), gráficas y del papel (4 %). El mantenimiento de estos rasgos tradicionales no debe ocultarnos, sin embargo, que mientras el porcentaje de ocupados en confecciones se había reducido (era de 24 en 1914), en el caso de todas las industrias fabriles juntas se había más que duplicado (de 25 % en 1914 a 56 % en 1947)<sup>68</sup> y que el promedio de personas ocupadas por establecimiento había subido de 8,4 a 14,7.

El número total de obreros ocupados en la industria se había más que duplicado entre 1935 y 1946 (de 396.303 a 899.032) y, si muchos de

ellos trabajaban en pequeños talleres, el 47 % lo hacía en fábricas de más de 100 obreros y el 14 % en establecimientos de más de 1.000<sup>69</sup>.

Es cierto que si tomamos en cuenta el total de la población ocupada en el sector secundario —que incluye una amplia gama de actividades artesanales y semi-artesanales— el grado de concentración disminuye considerablemente. Basándose en diversas fuentes, Germani lo ha calculado en los términos que reflejan los Cuadros N° 1 y N° 2.

Como vemos, el papel del obrero típicamente industrial estaba aún lejos de ser netamente preponderante en el sector secundario y el gra-

**Cuadro 1. Población económicamente activa del sector secundario en diferentes niveles económico-sociales (%).**

Obreros de la gran industria (+ de 100 obreros)	31,2
Obreros de la industria mediana (10 a 100 obreros)	15,0
Obreros de la industria pequeña y actividades artesanales	43,6
Trabajadores por cuenta propia	10,2

Fuente: Germani, Gino, *Estructura social de la Argentina*, Raigal, Buenos Aires, 1955, pág. 180.

**Cuadro 2. Grado de concentración de los trabajadores en los tres grandes sectores de actividad (cifras por 100 personas incluidas en las clases populares)**

Grado de concentración por empresa	predominantemente					total
	urbana		rural			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Alta (100 o + obreros aprox.)	11,4	7,4	18,8	—	—	18,8
Mediana (de 10 a 100 obr. aprox.)	8,5	3,5	12,0	—	—	12,0
Baja (— de 100 obreros aprox.)	4,3	3,0	7,3	25,0	3,8	60,9
Unico dependiente (aprox.)	8,8	16,0	24,8			
Cuenta propia	3,7	2,7	6,4	1,7	0,2	8,3
<b>Total</b>	<b>36,7</b>	<b>32,6</b>	<b>69,3</b>	<b>26,7</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

- (1) Industria
- (2) Comercio y servicios
- (3) Total predominantemente urbana
- (4) Agropecuaria
- (5) Sin determinar

Fuente: Germani, G., *Estructura...*, ob. cit., pág. 207.

do de concentración de los trabajadores en sus lugares de trabajo no era muy alto. Sólo el elevado índice de concentración geográfica en el Gran Buenos Aires —alrededor del 70 % de los obreros del país—<sup>70</sup> compensaba en parte esta relativa dispersión, facilitando el desarrollo de la conciencia de clase y de la organización y dándoles la posibilidad de alcanzar una mayor gravitación socio-política.

En cuanto al papel relativo de los sectores populares y la clase media inferior en el conjunto de la sociedad, también ha sido estimado por Germani en los términos que reproducimos parcialmente en el Cuadro N° 3 (pág. 41). Según esas estimaciones, como vemos, los obreros industriales sólo representarían en 1947 un 19,7 % de la población ocupada, y los obreros en general un 39,9 %, subsistiendo en la clase media inferior una importante proporción de autónomos. Si esto ocurría al finalizar el período que estamos considerando, es lógico suponer que en sus comienzos la estructura social era aún más tradicional, y esto nos explica muchas de las limitaciones del movimiento obrero.

### Situación de la clase obrera y de los sectores populares

Como podemos ver en el gráfico 1 (pág. 43), el nivel de ocupación, después de haber encontrado su punto más bajo en 1932, creció luego en forma regular —salvo una pequeña caída al comienzo de la guerra y otra más leve en el último año de la misma— hasta alcanzar en 1945 un incremento del 55 % respecto a 1930, mientras que la población había aumentado menos de un 20 %. Hasta 1939, los mayores aumentos se habían producido en espectáculos públicos y hotelería, pero también se había duplicado el número de ocupados en textiles y construcción y registraban aumentos superiores al 40 % confecciones en taller; gráficas, papel y prensa; industrias químicas y metales<sup>71</sup>. Para 1944 sólo se registraban 11.195 desocupados, la mayoría de ellos en las zonas rurales de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y aunque al año siguiente la cifra se había decuplicado en las dos primeras, el motivo principal parece haber sido la reacción de los patrones ante la aplicación del Estatuto del Peón, a la que respondieron con el despido de gran cantidad de jornaleros<sup>72</sup>. De modo que el fantasma de la desocupación, que había reducido al movimiento obrero a la impotencia durante los primeros años de la década pronto fue desvaneciéndose y dando lugar a condiciones más favorables para el planteo de reivindicaciones.

En cuanto a los salarios nominales, después de disminuir en un 19 % entre 1929 y 1932, alcanzaron su punto más bajo en 1934, en que sólo representaban un 77 % del nivel de 1929, para volver a subir luego en forma regular pero lenta: sólo desde 1942 superaron los niveles de 1929. Aunque en general acompañaron la marcha del costo de la vida, lo hicieron siempre con retraso hasta 1942 (en 1932 la caída de los precios fue superior a la de los salarios, hecho que sólo se repitió, aunque en escala insignificante, en 1935) (ver gráfico 2 en pág. 43). De modo que, salvo esas excepciones, el salario real quedó por debajo del de 1929 hasta 1942 (ver gráfico 3). Ese estancamiento del salario real contras-

**Cuadro 3. Composición de las clases sociales.**

(Cifras por cada 100 personas económicamente activas o con recursos propios).

Clase media inferior	Autónomos		Dependientes	
	%		%	
I	8,2	Pequeños patrones agrop.	7,9	Empleados subalternos de explot. agrop.
II	4,4	Pequeños industriales	2,3	Empleados subalternos de la industria
III	17,1	Pequeños patrones del comercio y servicios	4,8	Empleados subalternos del comercio y servicios del Estado y entes públicos
varios	3,2	Pequeños rentistas y otros propietarios sin especificar	1,0	Jubilados
	32,9		16,0	Empleados sin especificar
				16,9
Clases populares				
I	16,0	Cuenta propia agr. y ganad.	1,0	Campeños
II	21,9	Trabajadores "libres" de la industria	2,2	Obreros industriales
III	19,5	Trabajadores "libres" del comercio y servicios	1,8	Obreros y dependientes del comercio y servicios
varios	2,4	Trabajadores "libres" sin especific.	0,1	Obreros y dependientes sin especificar
	59,8	Total de trabajadores por cuenta propia	4,9	Total de trabajadores dependientes
				54,9

Fuente: Germani, G., *Estructura...*, ob. cit., pág. 197.

ta claramente con el continuado y considerable ascenso que había experimentado durante la década anterior (ver gráfico 4). Entre 1942 y 1944 el salario real subió un 17%; en 1945, frente al gran alza del costo de la vida, sólo se mantuvo en el mismo nivel gracias a la introducción del aguinaldo, pero volvió a tener un leve aumento al año siguiente.

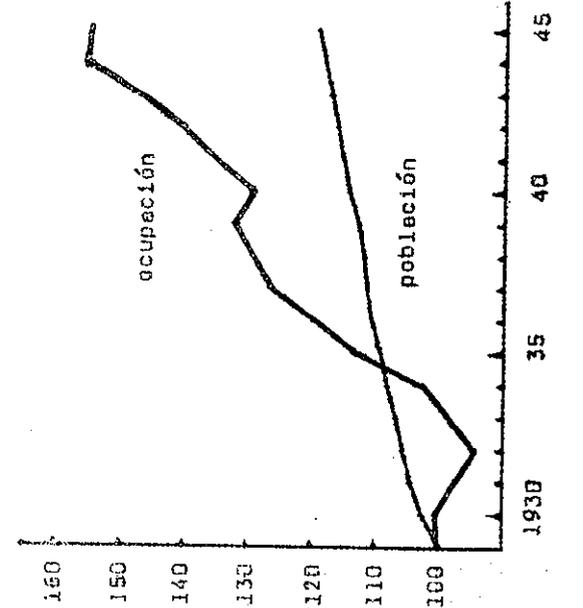
Si bien las estadísticas oficiales pueden no ser del todo confiables, las manejadas por la oposición confirman, en rasgos generales, esta evolución del salario real. Por ejemplo, el socialista Rómulo Bogliolo analizó la evolución de precios y salarios desde 1939 en una conferencia pronunciada en julio de 1946 y publicada luego en forma de libro. Basándose en las estadísticas oficiales y en las suyas propias (precios al por menor tomados del catálogo "de una despensa responsable"), concluye que mientras el aumento de los precios fue entre esos años del 111%, el de los salarios sólo alcanzó al 69%. Luego pasa a explicar la causa del incremento de los precios, atribuyéndolo exclusivamente a las políticas del régimen militar, y concluye que "la clase trabajadora ha sufrido, así, el espejismo de un aumento de salarios, que sólo la ocupación sostenida y la posibilidad de empleo de todos los miembros de la familia obrera ha ocultado a su percepción"<sup>78</sup>. Lo que olvida señalar es que, según sus propias cifras, esos aumentos se distribuirían de la siguiente manera:

	1939-43	1943-46
precios	+ 87 %	+ 13 %
salarios	+ 36 %	+ 19 %
diferencia	- 51	+ 6

Vale decir que, frente a una fuerte reducción durante los años anteriores, el salario real había experimentado un leve ascenso entre 1943 y 1946, inflexión que desaparece al considerarse las cifras en su conjunto y que no debe haber dejado de influir sobre los "espejismos" de los interesados. Paradójicamente, estos cálculos no son confirmados por las estadísticas oficiales, que registran respecto de ambos períodos un ascenso del salario real casi equivalente, de alrededor del 10%<sup>74</sup>.

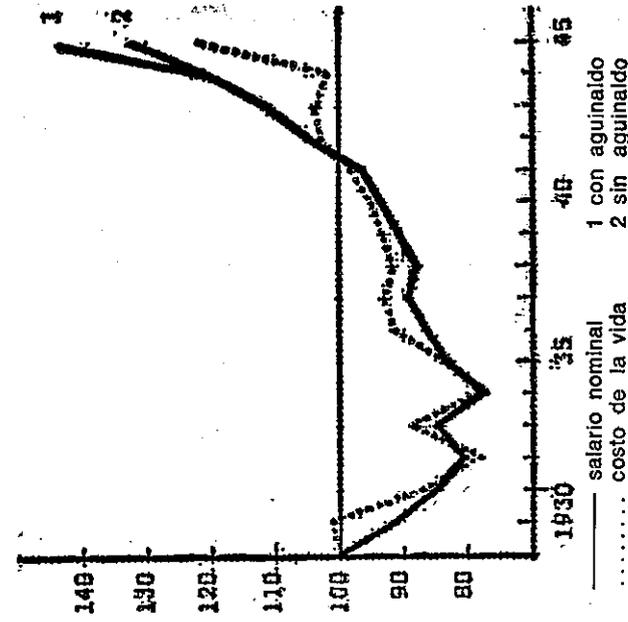
Los empleados de la industria ganaban un 64% más que el promedio de los obreros<sup>75</sup>, y entre éstos había diferencias considerables según la rama de la industria en que trabajaran: el salario medio de los petroleros, por ejemplo, era en 1941 casi el doble del de los trabajadores del caucho o de productos forestales, que eran, junto con los textiles, papeleros y de productos químicos, los peor pagados. Esto se explica, en el caso de los forestales, porque en ese rubro se incluían los hacheros de los obrajes y los que se dedicaban a producir carbón vegetal (que constituían 1/3 del rubro y tenían muy bajos salarios). En los demás casos se debe fundamentalmente al alto porcentaje de mujeres y menores empleados en esas ramas: textiles (52 y 8% respectivamente); caucho (45 y 6%); papel (33 y 10%); químicas (31 y 4%)<sup>76</sup>. El salario femenino era, efectivamente, muy inferior al de los hombres:

Gráfico 1. Población y ocupación.  
Número índice 1929 = 100.



Fuentes: DNT, Investigaciones sociales, 1939, pág. 42 y DES, Investigaciones sociales, 1943-45, pág. 61.

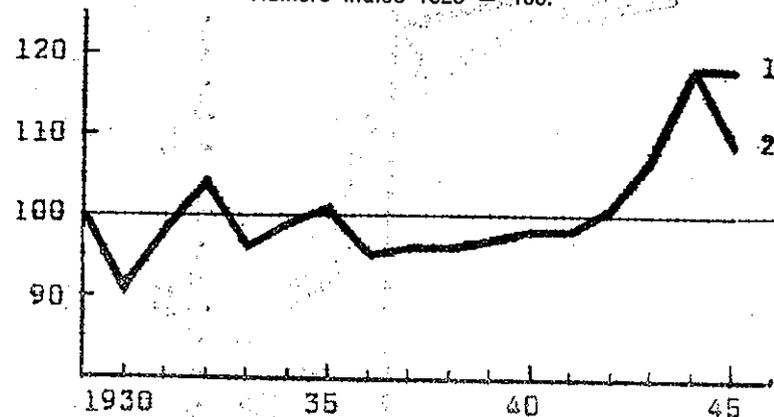
Gráfico 2. Costo de vida y salario nominal.  
Número índice 1929 = 100.



Fuente: DES, Investigaciones sociales, 1943-45, pág. 258.

Gráfico 3. Salario real 1930-45.

Número Índice 1929 = 100.

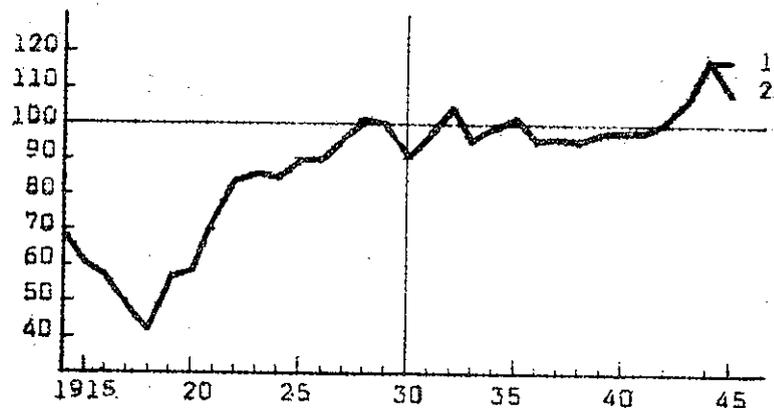


1 con aguinaldo  
2 sin aguinaldo

Fuente: DES, *Condiciones de vida de la familia obrera. 1943-45*, pág. 73.

Gráfico 4. Salario real 1914-45.

Número Índice 1929 = 100.



1 con aguinaldo  
2 sin aguinaldo

Fuente: DES, *Investigaciones sociales. 1943-45*, pág. 258.

en 1940 por ejemplo, mientras el 90 % de las mujeres ganaba menos de 100 \$ por mes, sólo el 34 % de los hombres estaba en esa situación<sup>77</sup>.

En el otro extremo, encontramos que después de los petroleros, los mayores salarios se pagaban en fábricas de electricidad, maquinaria y vehículos, imprenta y publicaciones, mientras que los obreros ocupados en industrias alimenticias y metalúrgicas se acercaban al promedio.

La general insuficiencia de los salarios era reconocida por los mismos organismos oficiales: en 1933, por ejemplo, el Departamento Nacional del Trabajo calculaba el presupuesto de la familia tipo en 130,15 \$ mientras que el salario medio era de 119,89 \$<sup>78</sup>; en 1937 los mismos rubros se estimaban en 164,19 \$ y 127,26 \$ respectivamente<sup>79</sup> y en 1943 la relación seguía siendo deficitaria: 176,75 \$ de presupuesto frente a un salario de 157,85 \$<sup>80</sup>. Otras estimaciones ampliaban la brecha aún más: según la *Revista de Economía Argentina*, en 1940 el 50 % de los trabajadores ganaba menos de 100 \$ y el 80 % menos de 150 \$<sup>81</sup>. El déficit del presupuesto familiar sólo podía ser cubierto por el trabajo de mujeres y niños que, como hemos visto, representaban un alto porcentaje del personal en varias ramas de la industria y un 21 % del total de la mano de obra industrial<sup>82</sup>.

Otro indicador de lo estrecho del presupuesto familiar es el alto porcentaje del mismo destinado a alimentación y alojamiento (57 y 20 % respectivamente en 1937)<sup>83</sup>, y si éste último no resulta demasiado alto se debe en gran medida a que el 59 % de las familias obreras de Buenos Aires vivía en ese año en una sola pieza, habitualmente de conventillo<sup>84</sup>. Se trataba, por lo general, de una pieza de 16 a 20 m<sup>2</sup>, sin otra abertura que la puerta y una banderola sobre la misma. El 64 % de las familias que ocupaban una sola pieza estaba compuesta por más de cuatro personas; el 77 % no tenía baño exclusivo, el 46 % carecía de agua corriente, el 24 % no tenía cocina independiente y el 8 % compartía incluso el retrete. Sólo un 30 % de las familias obreras disponía de dos piezas y un 11 % de más de dos, pero aún tomando en cuenta esas familias más desahogadas seguían siendo muchas las que carecían de las comodidades más elementales: baño exclusivo (62 %), agua corriente (38 %), cocina independiente (19 %), retrete propio (8 %)<sup>85</sup>.

En cuanto a la jornada de trabajo, fue reduciéndose a lo largo de la década —gracias a la paulatina imposición del “sábado inglés”— de un promedio de 48 horas semanales al principio a uno de 44 al final<sup>86</sup>. En 1935, los obreros se repartían aproximadamente por mitades entre ambos tipos de jornada<sup>87</sup> y eran muy pocos los gremios que gozaban de vacaciones pagas.

Las condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos, eran fijadas unilateralmente por la parte patronal. Aunque la práctica de los convenios colectivos se fue extendiendo lentamente durante la segunda mitad de la década, la mayoría de los trabajadores no llegó a gozar de sus beneficios. De 1936 a 1943 se firmaron 82 convenios en la Capital Federal, que involucraban a 202.140 obreros. En la provincia de Buenos Aires los convenios eran mucho más numerosos (660), pero se trataba en su mayor parte de convenios por empresa (46 % de los convenios en 1942) o de carácter local, que incluían a escaso número de

obreros (en 1942, por ejemplo, el 53 % de los convenios comprendía a menos de 100 trabajadores)<sup>88</sup>. En el interior, la práctica era aún menos frecuente.

La falta de convenios dejaba un amplio margen para la arbitrariedad patronal, que las organizaciones sindicales —no siempre reconocidas por las empresas— trataban de limitar con éxito variado. Aún en el caso de que existiera un convenio, no era raro el incumplimiento de sus cláusulas por parte de los propietarios, y lo mismo ocurría frecuentemente con respecto a la legislación laboral. En ambos casos era también la organización sindical la encargada de bregar por que se pusieran en práctica las disposiciones, ya que si los convenios no tenían carácter obligatorio, el Estado no se mostraba tampoco muy interesado ni eficaz en asegurar el cumplimiento de las leyes que dictaba.

Otro factor que gravitaba enormemente sobre la situación de los trabajadores era la falta de seguridad de protección. Sólo muy lentamente fue extendiéndose a lo largo de la década el derecho a indemnización por despido y a licencia por enfermedad. Ambos puntos estaban incluidos en la reforma del Código de Comercio por la que luchó incansablemente, sobre todo, la Federación de Empleados de Comercio (FEC). Habiendo logrado mediante extensas campañas su sanción parlamentaria, la ley fue vetada por Justo en 1932 y promulgada finalmente dos años después (Ley 11.729). Aunque sólo cubría inicialmente a los empleados, varias presentaciones judiciales lograron que su aplicación se extendiera a los obreros, pero esto determinó la reacción de la Unión Industrial Argentina (UIA), que consiguió que la Corte Suprema declarara inconstitucional uno de sus artículos. Desde entonces, la lucha por la defensa de la ley 11729, permanentemente amenazada, debió ser incesante.

Sólo unos pocos gremios —como los ferroviarios y municipales— contaban con Cajas de jubilaciones y pensiones, y las indemnizaciones por accidentes de trabajo eran insuficientes y de cobro dificultoso, de modo que la defensa de los trabajadores frente a la incapacidad, la enfermedad o la vejez estaba lejos de estar asegurada y la muerte del trabajador solía dejar a su familia totalmente desvalida.

En suma, el Programa Mínimo que la CGT planteó en 1931 siguió teniendo vigencia durante todo el período y representa una buena síntesis de las principales necesidades y aspiraciones de la clase obrera. Este planteaba:

"1º) Reconocimiento de los sindicatos. Por el mero hecho de existir los sindicatos serán considerados como instituciones de bien público, con facultades para vigilar la aplicación de la legislación social.

"2º) Jornada de trabajo y vacaciones. 8 horas de trabajo para adultos en trabajos diurnos y 6 en trabajos nocturnos y en las industrias insalubres. El ciclo semanal será de 5 días como máximo. Vacaciones anuales con goce de sueldo.

"3º) Derecho de vida y seguro social. Salario mínimo fijado periódicamente por comisiones integradas por representantes de los sindicatos obreros y de organizaciones patronales de industria o región. Es-

tablecimiento del seguro nacional sobre la desocupación, enfermedad, vejez y maternidad.

"4º) Intervención obrera. Intervención y contralor de la organización obrera en diversos organismos del Estado.

"5º) Oficinas de colocación. Supresión de las agencias particulares; las oficinas de colocación serán establecidas por las municipalidades y en su administración tendrán intervención directa los sindicatos.

"6º) Protección a la maternidad. Pensión proporcional al número de hijos menores de 14 años a toda mujer sin marido y sin recursos.

"7º) Defensa de la infancia. Instrucción pública y obligatoria, laica y gratuita, hasta los 14 años, debiendo el Estado proveer, también gratuitamente, alimentos, vestidos y los útiles necesarios a la enseñanza.

"8º) Ley 9.688 (Accidentes de trabajo). Reforma de la ley en estos aspectos: las incapacidades se contarán desde que se produce el accidente. Extensión de la ley a todos los asalariados indistintamente. Aumentar los beneficios de la indemnización parcial al 100 % del salario. Elevar las indemnizaciones máximas a 15.000 \$. Supresión del límite de salario para tener derecho a los beneficios de la ley. Los seguros por accidente estarán a cargo del Estado.

"9º) Estabilidad y escalafón para los trabajadores del Estado y demás entidades de carácter público.

"10º) Carestía de la vida. Fijación de los alquileres rústicos y urbanos con arreglo al valor; construcción de casas económicas para obreros por cuenta del Estado y las municipalidades.

"11º) Derogación de la ley 4144"<sup>89</sup>.

La modestia de la mayor parte de estas reivindicaciones nos habla a las claras de la situación precaria y de desamparo en que se encontraban los trabajadores. Por otra parte, el hecho de que se apele a la acción del Estado para la solución de casi todos los problemas, es bastante sintomático viniendo de una central controlada por los **sindicalistas**, ya bastante olvidados de sus teorías acerca de la superioridad absoluta de la acción directa. Es que los resultados de esa estrategia se mostrarían, a lo largo de la década, bastante decepcionantes.

### Las luchas reivindicativas

Como vemos en el cuadro 4, el número de huelgas, huelguistas, jornadas y salarios perdidos por huelgas se redujeron al mínimo en 1931 para llegar a sus más bajos niveles —salvo el primero— en 1933. Estas son, por otra parte, las cifras más bajas desde 1907, lo que revela claramente la brutal incidencia de la desocupación y la represión sobre la capacidad defensiva del movimiento obrero.

Solo a partir de 1934 —en que la ocupación recuperó sus niveles anteriores a 1930— los índices comienzan a remontar hasta alcanzar las cifras máximas de todo el período en 1935-36. Estos años marcan también el récord en cuanto al número de reuniones sindicales y de concurrentes a las mismas. Desde entonces, todos los índices vuelven

Cuadro 4. Actividad sindical 1930-45

Año	Número índice 1929 = 100				Número índice 1935 = 100	
	Huelgas	Huelguistas	Jornadas perdidas	Salarios perdidos	Reuniones sindicales	Concurrentes
1930	111	104	153	150		
1931	38	16	12	11		
1932	93	122	284	231		
1933	46	12	9	7		
1934	37	92	162	101		
1935	61	184	573	343	100	100
1936	96	302	294	170	142	90
1937	73	177	113	82	126	45
1938	39	31	50	36	129	45
1939	43	70	53	33	125	38
1940	47	45	49	31	109	30
1941	48	23	54	37	67	20
1942	100	141	139	113	64	27
1943	75	24	19	15	45	11
1944	24	32	9	10	51	21
1945	42	156	111	83	72	39

Fuentes: DNT, *Investigaciones sociales*, 1939, págs. 49-50 y Dirección de Estadística Social (DES), *Investigaciones sociales*, 1943-45, págs. 13 y 55.

a mantenerse bajos hasta 1942, en que se produce un nuevo pico en las huelgas. El golpe de 1943, con su política inicial represiva y desmovilizadora, logró reducir nuevamente al mínimo la actividad sindical, que recién volvió a incrementarse al calor de las luchas políticas de 1945.

En una perspectiva más amplia, al comparar el período que nos interesa con los anteriores (cuadro 5), vemos que, en general, continúa la tendencia decreciente del número de huelgas y de huelguistas —salvo, en este último caso en el quinquenio 1935-39— que venía manifestándose desde el pico de 1915-19. Esto se relaciona con el cambio de las tendencias predominantes en el movimiento obrero —declinación del anarquismo, creciente moderación del **sindicalismo**, ascenso del socialismo— y la consiguiente propensión a no recurrir a la huelga antes de haber agotado las posibilidades de negociación. Por otro lado, la creciente intervención del Estado en los conflictos laborales —sobre todo desde 1935— tendía también a solucionarlos a través de la mediación y el arbitraje antes de que desembocaran en huelga. El aumento de la

Cuadro 5. Movimientos huelguísticos 1907-44

Período	Promedio anual			Jornadas perdidas por huelguista
	Huelgas	Huelguistas	Jornadas perdidas	
1907-09	162	61.780	344.966	6
1910-14	132	18.725	421.752	22
1915-19	169	122.894	1.567.562	13
1920-24	116	114.953	1.397.021	12
1925-29	92	37.756	289.506	8
1930-34	73	19.587	568.083	29
1935-39	71	43.233	994.897	23
1940-44	66	15.013	341.201	23

Fuentes: Dorfman, Adolfo, *Historia de la industria argentina*, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1970, pág. 262; DNT, *Investigaciones sociales*, 1939, pág. 47 y DES, *Investigaciones sociales*, 1943-45, pág. 55.

duración de las huelgas, notable desde 1930, no sólo habla de una mayor resistencia patronal sino también de una mayor organización y capacidad de resistencia por parte de los obreros.

Como puede verse en el cuadro 6, los principales protagonistas de los movimientos reivindicativos en 1929-37 fueron los obreros industriales y de la construcción. Entre los primeros, sobresalen netamente los ocupados en confecciones y madereros (70 % de las jornadas perdidas por el total de obreros industriales), seguidos por los metalúrgicos, grá-

Cuadro 6. Huelgas por actividad, 1929-37 (porcentajes)

	Industria manufacturera	Construcción	Servicios
Número de huelgas	66,2	13,9	19,3
Número de huelguistas	46,4	38,8	14,5
Jornadas perdidas	54,0	43,8	5,7

Fuente: DNT, *Investigaciones sociales*, 1937, págs. 10-11.

ficos y textiles. Las grandes huelgas de la construcción, el calzado y la madera resultan así en gran medida responsables del piso de 1935-36, así como los metalúrgicos lo son del de 1942.

El salario real de los huelguistas fue, entre 1933 y 1939, inferior en un 45 % al del conjunto de los trabajadores, por lo que resulta comprensible que la mayoría de estos movimientos (58 % de las huelgas y 89 % de los huelguistas entre 1934 y 1939) fueran motivados por reivindicaciones salariales<sup>90</sup>. Si tenemos en cuenta que durante esos años el salario real se mantuvo estancado, podemos deducir que el éxito de los huelguistas fue relativo. Efectivamente, entre 1934 y 1939 sólo el 18 % de los mismos obtuvo la totalidad de sus demandas, mientras que el 16 % fracasó y el 65 % las obtuvo parcialmente. Por otra parte, si en los primeros años predominan las huelgas perdidas (56 % de los huelguistas en 1934) o ganadas (la misma proporción en 1935), en los siguientes predominan en cambio notablemente las huelgas transigidas (78 % entre 1936 y 1939).

Esto ha sido interpretado de diferentes maneras. Según Murmis y Portantiero<sup>91</sup>, implicaría un aumento de las aspiraciones insatisfechas y de las tensiones consecuentes. Para Gaudio y Pilone, en cambio, la categoría de huelgas transadas no debe asimilarse a la de fracasadas, sino a la de parcialmente exitosas, debiéndose el incremento de esa categoría al desarrollo de la negociación colectiva y al creciente intervencionismo del Estado en ese terreno. Tomando como ejemplo el caso de 1938, en que las condiciones económicas adversas apenas si se reflejaron sobre los salarios, sostienen estos últimos autores que "a juzgar por la tradicional sensibilidad que los salarios nominales habían venido evidenciando con respecto a los movimientos del ciclo económico, el fenómeno aludido constituye un hecho verdaderamente nuevo. El desarrollo de la movilización laboral de los años anteriores y, especialmente, la forma más o menos extendida que ya revestía para esa fecha la negociación colectiva tuvieron como consecuencia impedir que las presiones provenientes de la situación económica pesaran drásticamente sobre la posición de los trabajadores". Finalmente, señalan que "la imposición de un estándar salarial mínimo (o, al menos, el establecimiento de un principio afín) con el cual se logró defender un determinado nivel de vida fue un hecho, para no pocos gremios, ya en la segunda parte de la década del treinta (subrayado en el original)"<sup>92</sup>.

Naturalmente, el hecho de que el nivel de vida de los trabajadores no mejorara ni empeorara sustancialmente durante la década puede considerarse como un éxito o como un fracaso, según el punto de vista. Pero si tenemos en cuenta cuál era ese nivel de vida que se logró "defender" y que el estancamiento del salario real durante esta década contrasta con su permanente y considerable ascenso durante la anterior, podemos suponer que la mayoría de los trabajadores no se sentirían demasiado satisfechos con su éxito.

Lo que sí es indudable es la creciente participación del Estado en la resolución de los conflictos. Veamos, por ejemplo, el caso de 1942:

Cuadro 7. Métodos utilizados para solucionar las huelgas, 1942 (porcentajes).

	Huelgas	Huelguistas
Negociación directa	7,97	2,48
Conciliación con intervención del sindicato solamente	37,17	6,84
Conciliación con intervención del DNT	50,44	26,97
Arbitraje	4,42	63,71

Fuente: DNT, *Investigaciones sociales*, 1942, pág. 99.

Como vemos, más del 90 % de los huelguistas habían solucionado sus conflictos con la intervención de organismos o funcionarios estatales, lo que representa la culminación de una tendencia iniciada pocos años antes.

#### El DNT y la intervención del Estado en las relaciones laborales

Si bien, como veremos, la actitud de los gobiernos de la época respecto a los problemas sociales oscilaba entre la hostilidad y la indiferencia, el auge adquirido desde 1935 por las huelgas obligó a prestar una mayor atención a esos problemas. El cambio se advierte, sobre todo, en la creciente intervención del DNT en los conflictos laborales.

Hasta entonces, y de acuerdo con la ley que en 1912 había determinado sus funciones, este Departamento se había dedicado principalmente a recoger, elaborar y publicar los datos referidos a cuestiones laborales, proporcionando un considerable monto de material estadístico sumamente detallado. Menos relevante, había sido en cambio su desempeño en las otras dos funciones que se le habían asignado: preparar la legislación del trabajo y organizar la inspección y vigilancia de las leyes vigentes en la materia. En cuanto a la capacidad de mediación y arbitraje que la ley también le reconocía, tenía un alcance bastante limitado: podía ofrecer su mediación o intervenir cuando ésta le fuera requerida, pero las partes no estaban obligadas a aceptar esa mediación ni las decisiones arbitrales que produjera. De modo que, hasta 1935, su intervención en los conflictos laborales fue sólo ocasional.

Desde entonces, sin embargo, y a pesar de carecer de un sustento legal más adecuado, su participación en la solución de los conflictos fue tornándose una práctica habitual. Es sintomático que en ese año el *Boletín Informativo del DNT* inaugura una sección especial dedicada al tema. También en ese año, con motivo de su intervención en la huelga de la confección, el DNT logró que las partes se comprometieran a acep-

tar obligatoriamente su resolución arbitral. En el caso de la huelga de la construcción, para dar otro ejemplo, consiguió que las empresas —que se resistían a concertar un convenio colectivo— consintieran en registrar sus ofertas salariales en un Registro de Salarios Mínimos y en integrar una comisión paritaria encargada de controlar el cumplimiento de las condiciones acordadas, mecanismos ambos que equivalían a un convenio.

El compromiso de aceptar la mediación del DNT en los entredichos que pudieran suscitarse comenzaba a aparecer en la mayoría de los convenios arreglados mediante su intervención, y muchos le otorgaban también la tarea de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones acordadas y de fijar los procedimientos de reclamo y de conciliación. De ese modo el DNT fue logrando poco a poco, en la práctica, que su intervención en los conflictos laborales fuera generalmente aceptada y que los acuerdos alcanzados con su participación adquirieran cierta obligatoriedad.

La falta de un marco legal más apropiado limitaba, sin embargo, la eficacia de su desempeño, de ahí que propusiera sin éxito una serie de iniciativas para superar esas limitaciones: creación de tribunales de trabajo, arbitraje obligatorio, imposición oficial del cumplimiento de los convenios. Reclamaba, en suma, una legislación que le permitiera ir más allá de la simple mediación y le diera la autoridad ejecutiva necesaria para imponer obligatoriamente las soluciones que implidieran la interrupción del trabajo<sup>93</sup>.

La doctrina que guió la acción del DNT desde la segunda mitad de la década del 30 aparece claramente expuesta por el Jefe de la División de Estadística del Trabajo, José Miguel Figuerola —antiguo funcionario de la dictadura de Primo de Rivera en España— en una nota del 18 de marzo de 1943: "De la dosis de justicia con que se equilibran las fuerzas que intervienen en la producción, cambio y consumo de riqueza —dice—, depende el bienestar de los ciudadanos y la paz y progreso de los pueblos. Si las reglas que garantizan los derechos y progreso de los pueblos. Si las reglas que garantizan los derechos y exigen el cumplimiento de las obligaciones no son aceptadas de modo espontáneo, debe imponerse imperativamente su acatamiento. Este es el fin primordial que se propone la organización del Estado.

"Pero la formación del Derecho del Trabajo, de igual manera que ha sucedido en la gestación del derecho en general, ha sido precedida por un período de autodefensa en que los derechos, ya declarados o pretendidos, se imponían mediante la fuerza de las partes, como en las etapas primitivas de la elaboración del derecho las trasgresiones, supuestas o verdaderas, se persiguieron por medio de la venganza individual, reminiscencia de la arcaica venganza privada. Es natural que la conciencia jurídica individual rechazara esa forma primaria de buscar la reparación de las injusticias, de igual modo que, paulatinamente, la legislación del trabajo ha hecho menos agudas las luchas sociales encauzando las divergencias hacia fórmulas que no sólo logran la paz entre los elementos interesados sino que contribuyen al mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo (...)

"A la discusión estéril, al forcejeo inútil, al nacimiento de malentendidos, recelos y pugnas entre los factores que intervienen en la obra de la producción, al mantenimiento de las voluntades encastilladas en sus puntos de vista particulares y no dispuestas a ceder, bien puede seguir una era de comprensión y de confianza, nacida de la protección que el Estado dispense a los derechos recíprocos en un afán superior de armonía y concordia (...)

"De este modo será posible afianzar el convencimiento de que los avances del Derecho del Trabajo acorten cada día más la distancia que separa a los hombres de hoy del momento en que se sustituya efectivamente la autodefensa de clase por el imperio de la justicia"<sup>94</sup>.

Muchos de estos párrafos bien podrían pertenecer a alguno de los primeros discursos de Perón, de quien Figuerola fue el principal asesor en los aspectos técnicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP) y uno de los organizadores de la misma.

La tendencia del Estado a intervenir en las cuestiones sociales no se limitaba, por otra parte, a tratar de impedir las huelgas, sino que también se manifestaba en otras iniciativas y realizaciones. En 1937, por ejemplo, se proyectó el establecimiento de un sistema permanente y de carácter nacional para la fijación de salarios mínimos y, aunque no llegó a tratarse ese proyecto, dos años después se estableció por decreto que los salarios fijados en los convenios colectivos pasaban a considerarse como los mínimos en las respectivas ramas. En 1939, la Comisión Nacional para Combatir la Desocupación proponía la creación de un Ministerio de Trabajo y Acción Social, y desde 1940 el gobierno comenzó a dictar una serie de leyes, decretos y laudos ministeriales reglamentando las condiciones de trabajo en diversas actividades.

Donde estas tendencias intervencionistas se llevaron a la práctica en forma más coherente y completa fue en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Manuel A. Fresco (1936-40)<sup>95</sup>. En el mensaje que envió a la Legislatura acompañando un proyecto de reorganización del Departamento del Trabajo provincial en 1937, Fresco exponía su concepción del problema social en términos similares a los de Figuerola: "Los dos factores que concurren a la economía y a la producción —el capital y el trabajo— no deben ser considerados como fuerzas esencialmente contradictorias y en pugna permanente por fatalidad histórica, sino destinadas a la armonía y el equilibrio (...). El Estado debe intervenir con sus instrumentos legales de autoridad toda vez que el equilibrio sea roto, para restablecerlo, y toda vez que el abuso de alguna de las partes amenace, o bien el sentido de justicia, tan arraigado en el alma humana y flor de las más evolucionadas civilizaciones, o bien el sentido de la nacionalidad y el orden social".

Fijaba luego los propósitos de la proyectada reorganización en los siguientes puntos:

"1º. Que es de toda urgencia elevar el nivel de vida del obrero rural y fabril, facilitando su acceso a los bienes y comodidades;

"2º. Que es necesario organizar la protección del obrero en la reivindicación y defensa de sus derechos individuales económicos (indemnizaciones, despido, vejez, accidentes, etc.);

"3º. Que debe organizarse y legislarse la actividad sindical y colectiva de patronos y obreros, imponiéndoles deberes y responsabilidades y a la vez reconociéndoles la personería y los derechos que corresponden a los fines útiles de la asociación;

"4º. Que debe imponerse la creación de una instancia a cargo del Estado para dirimir de acuerdo a derecho los conflictos entre el capital y el trabajo, a fin de que el primero no use a su arbitrio los resortes de influencia y prepotencia que suelen estar a su alcance, y a fin de que el segundo tampoco use a su arbitrio la fuerza del número, la agitación y la propaganda anárquica o comunista;

"5º. Que se debe asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación del trabajo a fin de que sus preceptos no constituyan letra muerta a merced de las dilaciones y astucias de los litigantes, aplicándoles procedimientos simples y ejecutivos".

En cuanto a las organizaciones sindicales, afirmaba que "el gobierno de la provincia, lejos de ser enemigo de los trabajadores y su organización en sindicatos, busca y estimula la agrupación y convivencia de todos los sectores del trabajo en asociaciones gremiales para que, dentro de principios de justicia social y de orden, breguen por su bienestar y reclamen lo que les corresponde", ya que "mientras el Estado de tipo liberal sólo reconoce y otorga personería al ciudadano aislado, al trabajador aislado, átomo de la masa productora, el nuevo Estado, que integra dentro de su órbita todas las actividades económicas y coordina todas las capacidades, otorga derechos y exige responsabilidades a las asociaciones organizadas de productores" (CGT-Catamarca, 9-4-1937).

Buena parte de este programa fue llevado a la práctica: se dictaron numerosas leyes sociales y se vigiló el cumplimiento de las existentes; se establecieron procedimientos de conciliación y arbitraje obligatorio; el Departamento del Trabajo intervino activamente en todos los problemas laborales y el propio gobernador y sus ministros participaron frecuentemente en la resolución de los conflictos. Se estimuló, sobre todo, la firma de convenios colectivos, y en 1940 se habían acordado en la provincia 300, frente a los 39 de la Capital Federal.

Todo esto iba acompañado por una política autoritaria que buscaba mantener al movimiento sindical bajo el más estricto control y perseguía implacablemente a los comunistas. "Para el gobierno de La Plata —decía, por ejemplo, CGT-Independencia el 3-7-1936— no son subversivos sólo los comunistas; lo son los socialistas, los radicales y hasta el mismo Congreso que repudia sus representantes fraudulentos".

Los dirigentes sindicales no fueron, sin embargo, insensibles a esta inédita combinación de "justicia social" y autoritarismo. El 28 de enero de 1937, la Junta Ejecutiva de la CGT-Independencia se entrevistaba con Fresco para "poner de manifiesto la coincidencia de criterio de la organización mencionada con la acción oficial desarrollada en las cuestiones gremiales". "Expresaron los visitantes que se advertía un ambiente de

respeto por la acción netamente gremial, constructiva y de orden que desenvuelve por intermedio de sus filiales dentro del territorio de la provincia", salvo algunos incidentes aislados, y terminaron manifestando su conformidad con el desempeño del Departamento del Trabajo.

Fresco, por su parte, les aseguró que "es propósito inquebrantable de su gobierno crear para los trabajadores auténticas condiciones decorosas de salarios y remover, aún por gestión directa y propia, las situaciones paupérrimas y deprimentes de salarios de hambre, que son fuentes permanentes de rebeldía y de intranquilidad social. En cambio —agregó— la represión será implacable contra las personas que hagan profesión de la agitación sistemática" (La Nación, 30-1-1937).

Al mes siguiente, otra delegación de la CGT-Independencia fue a saludar al gobernador con motivo de celebrarse el primer aniversario de su asunción. Fresco aprovechó la oportunidad para asegurarles la pureza de sus intenciones: "Quiero que ustedes sepan —dijo— que al venir a mi despacho encontrarán siempre al gobernante y al ciudadano, pero nunca al político. Me interesa profundamente la suerte de la clase trabajadora argentina y deseo, como gobernante de la provincia, colaborar seriamente con la obra de mejoramiento y de justicia social que anima a los obreros. No lo hago para conquistar votos de los trabajadores. Yo sé conquistar éstos por mi acción política (!), pero en el caso de los trabajadores, lo que exclusivamente me interesa es contribuir a la solución de sus problemas. Ustedes pueden traerme, pues, las cuestiones gremiales que les preocupen, y deben hacerlo sin ninguna prevención". Aclaraba finalmente que "mientras los trabajadores, como en este caso \*, me presenten situaciones de justicia, los apoyaré con toda resolución. Pero les prevengo que mi gobierno no tolerará perturbaciones ni desórdenes de ninguna especie. Las reprimiré con la misma energía con que apoyaré las causas justas de los obreros" (El Día, 26-2-1937).

En el discurso pronunciado al celebrarse el primer aniversario de su mandato, Fresco no dejaba de mencionar sus éxitos en relación con el movimiento obrero: "La adhesión expresamente reiterada al gobierno por los representantes del auténtico movimiento obrero organizado en la CGT —decía—, y de la que se han hecho eco en múltiples informaciones y comentarios todos los diarios del país, constituye un jalón más en la política obrera del Poder Ejecutivo provincial" (CGT-Catamarca, 26-2-1937). Uno de esos diarios, que no estaban seguramente entre los más alejados de las fuentes de inspiración del gobernador bonaerense, comentaba así ese discurso: "El Dr. Fresco presentó el cuadro que más deseábamos, es decir, el de un nacionalismo sindicalista, jerarquizado y totalitario. La obra del Dr. Fresco habrá de completarse con la sindicalización obligatoria de los trabajadores, propiciada por el Estado y por él reglamentada y dirigida" (Bandera argentina, 20-2-1937).

Recordemos, para terminar, que Fresco apoyó la candidatura presidencial de Perón en 1946 y que Armando Spinelli, Jefe del Departamento del Trabajo,

\* Mediación en demanda de aumento de salarios para los textiles.

mento provincial del Trabajo durante su gobierno fue uno de los principales colaboradores de Perón en la STP como Director General de Trabajo.

"En el Estado anterior a 1943 —concluyen Gaudio y Pilone— ya se manifestaban formas de intervencionismo social, algunas sorprendentemente afines (y otras menos) con lo que resultó típico en la década siguiente. La descripción y el análisis de tales formas de intervención en la década del 30 muestran ya un Estado que comienza a desempeñar y a arrogarse como legítimamente propias funciones tales como la de intermediario en el conflicto social y la de normatizador de un tipo de relaciones hasta entonces consideradas como 'privadas' y, por consiguiente, pertenecientes a la esfera de la sociedad civil", agregando que "la clase obrera no fue ajena al proceso indicado en el punto anterior. Por un lado, intentó beneficiarse con este primer esbozo de política social emprendido desde el Estado y, en parte, lo logró; por el otro, lo estimuló y secundó con interés, de una manera que no resultó contradictoria con las orientaciones dominantes en el seno del movimiento obrero de la época. Tales hechos confirman la idea de que en la conciencia de los trabajadores estaban presentes de antemano los elementos que constituyeron los ejes principales sobre los que giró el peronismo en materia laboral"<sup>96</sup>.

Con respecto a las organizaciones gremiales, aunque en forma menos sistemática que en la provincia de Buenos Aires, no dejaron de atraer la atención del gobierno nacional. En 1936 se realizó el primer censo de asociaciones profesionales, repetido en 1941, y el DNT estudió en 1938 la elaboración de una reglamentación que las rigiera. Así como impulsaba la organización de asociaciones patronales en las ramas en que éstas no existían, el DNT insistía en que los sindicatos obreros fueran inscriptos, auorizados y fiscalizados oficialmente, y se llegó a proponer una ley que hiciera obligatoria la agremiación. El objetivo de esta legalización de los sindicatos, así como la incomprensión que esos proyectos encontraban en otros niveles del gobierno, aparecen tempranamente expresados en una nota que el presidente del DNT, Eduardo F. Maglione, dirige en mayo de 1931 al ministro del interior apoyando una queja de la FOM de Bella Vista (Corrientes) contra la prefectura local y anunciando su renuncia al cargo:

"Aparte de las dos divisiones fundamentales de un campo de patronos y otro de obreros —decía, entre otras cosas, el funcionario—, actúan dos tendencias no menos antagónicas en el campo obrero: la de los que quieren encaminar la lucha en el terreno revolucionario y los que quieren conquistar las mejoras por evolución, dentro de un marco de la justicia y la ley. Un gobierno inteligente, que se preocupe y que estudie las cuestiones de esta naturaleza, debe forzosamente penetrarse de la necesidad absoluta —diré vital para el país— de fomentar las organizaciones que tratan de encauzar las actividades obreras dentro de la legalidad.

"Evidentemente, el obrero, por su inferior condición social, se determina preferentemente hacia la actividad revolucionaria. Si el gobierno no apoya a los que tratan de guiarlo en el otro sentido, éstos pierden su fuerza y la batalla se libra con todos sus extremos de violencia y de odio. Así, el gobierno es el causante directo de la violencia. Próximo a retirar-

me del Departamento, dejo a mi sucesor ésta como una de las más serias enseñanzas (...)

"Por otra parte, lo que se dice en la nota (de la FOM) es exacto. La autoridad, sobre todo las del interior y la prefectura marítima, extraños como son a las preocupaciones y entendimiento de las cuestiones obreras, no solamente creen que éstas se resuelven por el rigor, sino que confunden las actividades revolucionarias con las pacíficas, como derecho de reunión, de asociación, etc. Aplican a estos últimos la misma vara que a los otros y los arrojan fatalmente al campo revolucionario, donde es de suponer que los acogen con los brazos abiertos" (*La Vanguardia*, 19-5-1931).

Estos conceptos, naturalmente, eran aplaudidos por los socialistas, para quienes la renuncia aparecía como "el estallido de una crisis entre el espíritu atrasado y bárbaro, para el que la experiencia nada edifica, y el espíritu comprensivo que siente la imperiosa necesidad de fomentar las organizaciones obreras, verdaderas instituciones de bien social" (*idem*).

Efectivamente, las inquietudes generadas en el DNT, al que un elenco de funcionarios estables daba cierta continuidad por encima de los cambios políticos, no siempre encontraban eco en otros niveles del gobierno que, preocupados generalmente por cuestiones más inmediatas, tendían a ignorar la gravedad del problema social que se estaba incubando y la potencial capacidad transformadora de una clase obrera crecientemente y marginada.

### El vacío político

En realidad, la mayor parte de los cambios a que nos hemos referido no parecen haber sido cabalmente registrados por los dirigentes políticos de la época: ninguno de ellos demuestra haber cobrado conciencia de su profundidad ni de su trascendencia. Todos parecen haber seguido manejándose, por el contrario, con una imagen del país y de la sociedad que iba alejándose cada vez más de la realidad, y donde este desfase se pone más claramente en evidencia es en el terreno político.

El tesorero intento de restaurar la hegemonía de los intereses predominantes en el agro contrasta fuertemente con las limitaciones que la nueva estructura del comercio mundial imponía al desarrollo de los mismos y con la creciente importancia que iban adquiriendo los intereses industriales. El crecimiento numérico y el papel clave en el aparato productivo del país que iba asumiendo la clase obrera difícilmente podría contenerse dentro de las estrechas perspectivas que le ofrecía la política parlamentaria del PS ni la actividad clandestina del Partido Comunista (PC). Así fue creándose ese vacío político que sería llenado finalmente por Perón.

Repasemos brevemente el proceso político de la época, por otra parte bien conocido<sup>97</sup>. La irrupción del ejército en el escenario político —cosa que ocurría por primera vez desde que el mismo se había con-

vertido en una institución profesional— no sólo abre el período cronológicamente, sino que es también un signo de los nuevos tiempos: las tensiones generadas por la crisis eran demasiado violentas para que pudieran resolverse por las vías tradicionales de equilibrios, acuerdos y compromisos. Esta presencia del ejército, ya sea en primer plano o entre bambalinas, será desde entonces un dato insoslayable de la realidad política.

Sin embargo, habiendo cumplido su objetivo con el derrocamiento del tambaleante gobierno de Yrigoyen y la proscripción que impidió al radicalismo reconquistar el poder, el ejército pronto cedió el dominio de la escena a su heredero. La habilidad política de Justo le permitió combinar los elementos de una coalición que sustentó las reformas necesarias para mantener los intereses de la clase dominante relativamente protegidos frente a las consecuencias de la crisis y de la depresión. Pero esos elementos no eran, en cambio, suficientes como para asegurarse un respaldo electoral, y así, cuando el radicalismo levantó la abstención y amenazó con trastornar esa frágil estructura política, la permanencia de la alianza gobernante sólo pudo asegurarse mediante el fraude. Esta práctica no era nueva, por cierto, en la política argentina, pero hacía ya mucho tiempo que había pasado a ser sólo un fenómeno marginal: su retorno al papel de piedra angular del régimen no podía ser aceptado fácilmente por una opinión pública más evolucionada.

Los primeros pasos para desmontar la maquinaria del fraude dados por Ortiz fueron interrumpidos por su enfermedad, y Castillo no estaba dispuesto, por cierto, a seguir ese camino, que implicaba el retorno del radicalismo al gobierno. De modo que el fraude, escándalo permanente del régimen —amén de otros escándalos más crematísticos— sería el argumento básico para su derrocamiento.

Pero, dado que el ejército había cerrado los ojos ante el fraude y la corrupción durante una década, otras deben haber sido las razones que lo decidieron a volver a desempeñar el papel protagónico. Por un lado, la coalición sabiamente articulada por Justo se desarmaba, y la muerte de su creador la dejaba sin el único candidato que, además de ser satisfactorio para el ejército y aún para amplios sectores de la oposición, le permitía mantenerse unida. Por otro lado, así como ante una situación semejante de vacío de poder en 1930 la crisis económica había desempeñado el papel de detonante, ahora ese papel sería desempeñado por la guerra. Tanto el espectro político como el militar estaban profundamente divididos frente a la misma, pero mientras en el primero predominaban los sectores favorables a la causa de los aliados, en el segundo tendían a imponerse los neutralistas y los que, más o menos desembozadamente, simpatizaban con el Eje. La perspectiva de que, después de una elección fraudulenta, un candidato ampliamente impopular y con muy débiles bases de sustentación como el elegido por Castillo pudiera cambiar la orientación de la política internacional hacia una posición aliadófila resultaba insoportable para importantes sectores del ejército. Peor aún era la otra posibilidad: el triunfo del Frente Democrático que, con la participación del PC, se gestaba en la oposición. Todo llevaba, pues, a que el nudo gordiano del régimen fuera cortado por la espada.

En todo el proceso que acabamos de comentar es conspicua la ausencia de dos sectores que habían asistido al mismo como convidados de piedra: precisamente los dos sectores que más se habían desarrollado gracias a las nuevas condiciones económicas. Por un lado, la burguesía industrial —y sobre todo sus miembros más recientes y débiles— que no veían reflejados sus intereses por ninguno de los partidos en pugna: el fracaso del Plan Pinedo no dejaba a dudas en cuanto a qué podía esperar de un régimen totalmente dominado por los intereses agropecuarios, y el radicalismo no les ofrecía mejores perspectivas. Por otro lado, la clase obrera.

Quizá la imagen de una clase obrera formada principalmente por extranjeros y en la que predominaban las ideologías anti-políticas —imagen que ya no se ajustaba a la realidad— influyó en parte para ocultar a la percepción de los políticos el potencial electoral que su creciente número representaba. Quizá la práctica habitual del fraude y la manipulación electoral los absorbía demasiado como para prever que en unas elecciones verdaderamente limpias su peso podría ser decisivo. Lo cierto es que ninguna de las dos fuerzas políticas mayores puso demasiado empeño en conseguir su apoyo.

El radicalismo, que como partido mayoritario y de raigambre popular, estaba en mejores condiciones para lograrlo, nunca lo intentó seriamente: las vinculaciones que Yrigoyen había sabido establecer con algunos sectores no fueron mantenidas por sus sucesores, y ninguno heredó tampoco la imagen "obrerista" y la fama de sensibilidad social del viejo caudillo. Claro que Alvear no era la persona más indicada para hacerlo, pero tampoco lo intentó. Sólo en el nivel de algunos caudillos locales encontramos una relación más fluida con grupos obreros, pero esa relación se establecía sobre los moldes del patrocinio tradicional y en ese terreno los radicales tenían que competir con los caudillos conservadores, que tampoco dejaban de incluir trabajadores entre sus clientes en las ciudades y pueblos del interior.

En cuanto a la coalición en el poder, su actitud hacia la clase obrera fue más variada. Uriburu recurrió abiertamente a la represión, sobre todo contra anarquistas y comunistas: fusilamientos, deportaciones, cárcel y torturas, clausura de locales y periódicos, persecuciones de todo tipo. Si creyó lograr algo extorsionando al secretario de la CGT y obligándolo a firmar una nota de apoyo a cambio del indulto para tres choferes condenados a muerte, eso sólo demuestra que su ignorancia sobre el mundo obrero era total.

Las organizaciones más moderadas fueron menos hostigadas, y el presidente del DNT, E. F. Maglione, comenzó a tomar contacto con sus dirigentes y a asegurarles que sus derechos serían respetados. Pronto, sin embargo, tuvo que renunciar. "Nosotros comprendemos —comentaba *La Vanguardia* el 24-5-1931— la decepción que debe apoderarse de un funcionario cuya acción liberal y amplia se dirige en el sentido de encauzar los conflictos del trabajo por las vías de la legalidad, cuando ve que otras autoridades ejecutivas utilizan el expediente burocrático para contener soluciones viables y útiles iniciativas, o persiguen a los militantes obreros como a vulgares delincuentes, o clausuran las secretarías

de los sindicatos y encarcelan a sus miembros más destacados, o restringen y limitan la libertad de reunión, creando un ambiente de temor e inquietud que impide la libre y fecunda acción de los gremios obreros (...). La inutilidad del esfuerzo realizado con la mejor intención se estrella fatalmente cuando se castiga la emisión de un pensamiento contra el gobierno, se deporta a militantes del gremialismo sospechados de extremistas y agitadores y se establecen penas severas e irreparables contra los promotores de una huelga que pueda afectar un servicio público".

Más dúctiles, los conservadores bonaerenses incluían entre sus candidatos a diputados nacionales en 1931 a dos prominentes directivos de la UF, pero fue un caso excepcional: entre los múltiples apoyos que Justo combinaba no entraba, evidentemente, el de la clase obrera, y sólo se limitó a atenuar ocasionalmente la represión sobre sus actividades.

En cambio, el respaldo de algún sector de los trabajadores era importante para las escasas bases en que pensaba asentar Ortiz el desarrollo de sus planes de limpieza electoral, y se dedicó a conseguirlo con ahínco. Contaba, como punto de partida, con su vieja relación con Antonio Tramonti, presidente de la UF hasta 1934 y que seguía acaudillando una importante fracción de la misma. Ambos habían dialogado muchas veces cuando Ortiz era ministro de Obras Públicas de Alvear y abogado del Ferrocarril Oeste y conservaban buenas relaciones. Pero Tramonti había sido desplazado de la conducción de la UF y su grupo —acusado, entre otras cosas, de utilizar a la central obrera para propagandizar la candidatura de Ortiz— había perdido también el control de la CGT. Desde la presidencia, Ortiz presionó primero sobre las autoridades de la UF para que varios miembros de la fracción de Tramonti fueran incorporados a la Comisión Directiva (CD) y, al no lograrlo, respaldó una escisión destinada a fracasar. Su hostilidad tuvo el efecto de obligar al sucesor y archienemigo de Tramonti a dejar la presidencia de la UF, pero fuera de eso Ortiz sólo pudo recompensar a su amigo nombrándolo presidente de la Caia de Jubilaciones para ferroviarios.

Fuera de los ferroviarios, Ortiz había entablado también relaciones con otros dirigentes: Según R. Stordeur, por ejemplo, el presidente "había llegado a crear un pequeño núcleo obrero de apoyo, sobre la base de los sindicalistas, con los cuales era muy amigo"<sup>88</sup>. Pero todo esto desapareció con su renuncia, ya que Castillo no tenía el menor interés en continuar esos contactos.

De modo que, en el momento en que los sectores más radicalizados del movimiento obrero iban quedando marginados —como los anarquistas— o comenzaban a variar su actitud —como los sindicalistas—, y los dirigentes se veían cada vez más impulsados a entrar en el diálogo e intercambiar apoyos con el gobierno, sólo encontraron por parte de éste —salvo en la época de Ortiz— una fría y total indiferencia.

Así, prácticamente ignorada por radicales y conservadores, la clase obrera sólo podía buscar su expresión política a través del socialismo y el comunismo. El primero, pese a sus sangrías decenales (1918, PS Internacional; 1927, PS Independiente; 1938, PS Obrero) no dejó de crecer durante el período, aunque desde 1935 los radicales volvieron a disputarle la mayoría en la Capital Federal. Pero su mismo éxito elec-

toral —debido en buena parte, durante la primera mitad de la década, a la abstención del radicalismo— no haría más que reforzar aquellas características que lo hacían menos atractivo para la clase obrera. La excesiva preeminencia que asignaba a la labor parlamentaria —de la que sólo lograba extraer algunos frutos gracias a concesiones de la mayoría conservadora, no siempre exentas de contrapartes— tenía múltiples implicancias. Por un lado, acentuaba el tradicional reformismo que lo llevaba a conformarse con el papel de minoría consentida y limitada al ámbito capitalino, sin mayores perspectivas de que pudiera llegar a convertirse en una fuerza capaz de disputar el poder a nivel nacional frente a los grupos hegemónicos.

Por otra parte, su base electoral estaba lejos de ser exclusivamente obrera. El análisis ecológico realizado por G. Germani de las elecciones en la Capital Federal revela que la correlación entre porcentaje de obreros y de votos socialistas en 1940 y 1942 no es demasiado significativa: la de 1940 no se aleja demasiado de la registrada respecto a patrones de comercio y servicios (+ 0,197 y + 0,163 para obreros y patrones respectivamente), y la de 1942 tampoco se diferencia radicalmente de la existente con los patrones industriales (+ 0,388 y + 0,294 respectivamente). Algo más alta entre los obreros industriales (+ 0,276 y + 0,554 en los dos años mencionados), está siempre por debajo de la que vinculaba a ese sector con Concentración Obrera (+ 0,733 y + 0,626) o la que, años después, la vincularía con el peronismo (+ 0,898 en 1946) o con el PC (+ 0,718 en 1948)<sup>89</sup>.

El PS dependía entonces, en gran medida, del apoyo de amplios sectores de las clases medias, que aportaban también la casi totalidad de los dirigentes del partido y teñían enteramente su mentalidad. Estos dirigentes, por fin, constituían un pequeño grupo cerrado que mantenía un estricto control sobre los afiliados y que sólo se renovaba por cooptación, sin permitir el acceso de nuevos elementos que pudieran amenazar su estabilidad. Los dirigentes gremiales, por ejemplo, que a través de estos años irían aumentando considerablemente su importancia, no llegaban nunca a ocupar cargos importantes en la conducción del partido. El descontento por estas circunstancias —se llegó, incluso, a denunciar fraude en las elecciones internas— estallaba periódicamente y culminaba con esas escisiones en las que generalmente se apartaban del partido buena parte de sus juventudes.

En suma, el PS aparecía más bien como integrado al régimen en funciones de oposición consentida —ya que no lo ponía en peligro— antes que como una fuerza enfrentada con el mismo y que representara una alternativa, más como un partido dirigido por intelectuales con inquietudes sociales que como un partido obrero.

De todas estas características, el PC sólo compartía una, y aún más acentuada: la rígida disciplina interna y el carácter perpetuo e intocable del pequeño grupo dirigente. Se trataba, en cambio —en aquella época—, de un partido mucho más específicamente obrero, no sólo por la composición de sus bases sino por el papel que alcanzaban en su dirección los dirigentes gremiales y por la importancia que en el conjunto de sus actividades se asignaba a las relacionadas con el movi-

miento sindical (basta echar una ojeada a los órganos de prensa de ambos partidos para percibir esta diferencia).

Otros eran, en cambio, los factores que dificultaban su expansión. En primer lugar, su dependencia de las directivas de la Comintern y los frecuentes y súbitos cambios de línea de la misma hacían que sus actitudes no resultaran muy coherentes: del aislacionismo practicado hasta 1935 al énfasis posterior en la unidad hasta llegar, en 1945, a esa verdadera promiscuidad de la Unión Democrática; del neutralismo a ultranza de 1939 a la igualmente ferviente pro-beligierancia de 1941, para no dar sino algunos ejemplos. Más importante que estos zigzagueos, sin embargo, era el peso de otro factor: ilegal y blanco predilecto de todas las persecuciones, la militancia en el PC exigía un grado de riesgo y de compromiso que pocos estaban en condiciones de afrontar. Así, aunque creció considerablemente durante el período —sobre todo en el campo sindical—, difícilmente podría llegar el PC en esas condiciones a convertirse en un partido de masas.

Un sector muy importante de la clase obrera no se sentía, pues, representado por ninguno de los partidos existentes y no encontraba canales adecuados para su participación política, de ahí que acogiera con tanto entusiasmo la perspectiva abierta por Perón.

### 3. El movimiento obrero en la década del 30 (I)

Durante la década que precede a la aparición del peronismo, el movimiento obrero se desarrolló en medio de complejas circunstancias, tanto de orden nacional como internacional. Al impacto inicial de la crisis y la depresión sucedió, como hemos visto, un proceso de rápida industrialización destinado a transformar la estructura económico-social tradicional, así como la composición misma de la clase trabajadora. Al régimen represivo surgido del golpe de septiembre, siguió una restauración conservadora que, aunque abrigando pocas simpatías por las reivindicaciones obreras, se mostraba cada vez más inclinada a intervenir en los conflictos laborales y a controlar el movimiento sindical. Mientras tanto, se asistía en Europa al ascenso del fascismo, la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto influyó sobre el movimiento obrero argentino en sentidos diferentes: tanto impulsando como frenando su crecimiento; acentuando el desarrollo de tendencias iniciadas en los años previos o provocando la aparición de otras nuevas; relegando definitivamente algunas características tradicionales o motivando el eclipse momentáneo de otras.

Así, por ejemplo, si el número de obreros organizados llegó a magnitudes muy superiores a las alcanzadas anteriormente, éstos nunca representaron a lo largo de la década más de un 10 o 15 % del total de asalariados. La inclinación a buscar apoyo en el poder político para concretar las reivindicaciones gremiales —que, como vimos, se había iniciado durante los gobiernos radicales— no dejó de acentuarse durante esta época, pero acompañada por una creciente burocratización de las organizaciones sindicales: aparece entonces una capa de dirigentes para quienes la vinculación con los factores de poder no es sólo un medio para obtener mejoras para sus representados, sino también para conservar su propia posición. El enfrentamiento violento y frontal de los trabajadores con el Estado pasó a ser cosa del pasado —junto con la influencia anarquista—; la intervención de éste en el campo social no sólo fue universalmente aceptada sino también insistentemente reclamada, y no faltaron grupos que apelaron a la intervención estatal incluso para resolver a su favor enfrentamientos internos en las organizaciones gre-

miales. El movimiento obrero también reclamó —y en parte obtuvo— una participación en entidades estatales que implicaba un reconocimiento mutuo. Paradójicamente, quienes iniciaron o desarrollaron todas estas tendencias fueron los sindicalistas, que controlaron a la CGT durante la primera mitad de la década.

Las circunstancias mundiales, sin embargo, hacían cada vez más difícil sostener el principio de prescindencia política en que los **sindicalistas** se basaban. La amenaza del fascismo y el impacto emocional de la guerra civil española impulsaban una creciente politización, de la que no sólo se beneficiarían los socialistas —que por primera vez lograron imponer su hegemonía sobre el movimiento sindical desde 1935— sino también los comunistas, cuya influencia creció en forma explosiva durante la segunda mitad de la década.

Estos últimos se dedicaron principalmente a organizar a los trabajadores de la construcción y de la industria manufacturera, cuyo creciente peso en la estructura productiva tardaba en reflejarse dentro del movimiento obrero, donde los tradicionales gremios de servicios conservaban un predominio absoluto. Ante el doble desafío de estos advenedizos —que al mismo tiempo cuestionaban su preeminencia e intentaban llevar al movimiento obrero hacia posiciones más combativas— los grandes gremios del transporte se atrincheraron en los cargos directivos de la CGT, utilizando las mismas maniobras burocráticas que antes habían reprochado a la conducción **sindicalista**, y recurrieron a los mismos argumentos de prescindencia política y limitación a lo estrictamente gremial. Así reaparecía, ahora bajo un tenue barniz "socialista", aquel economicismo básico que parecía haber sido desplazado por una superficial politización. De este modo, una nueva polarización —agravada por las posiciones divergentes de socialistas y comunistas en los primeros años de la guerra mundial— volvió a desgarrar la unidad del movimiento obrero: el período, que se inicia prácticamente con una central única —porque la FORA ya era poco más que una reliquia histórica—, termina con cuatro (CGT-Nº 1, CGT-Nº 2, USA y FORA).

Esta fragmentación del movimiento obrero —que llevaba a sus militantes a gastar buena parte de su tiempo, de sus energías y de sus recursos en combatirse mutuamente— conspiraba contra la posibilidad de que éste desempeñara en la política nacional un papel acorde con su potencial. La creciente aspiración de sus dirigentes de participar activa y eficazmente en la vida política se veía trabada por la imposibilidad de encontrar una fórmula —pese a todos los proyectos de unión democrática y frente popular— que les permitiera contar con el respaldo indiscutible de la clase que pretendían representar. La clase obrera no había encontrado, pues, una identidad política que le permitiera unificarse y hacer valer su peso numérico y su importancia en la estructura productiva, identidad que sólo encontraría a través del peronismo. Veamos el camino que, a través de la década del 30, conduce a ese final.

## La organización sindical

Pese a todas las dificultades que tuvo que afrontar (desocupación, represión, divisiones), el volumen del movimiento obrero no dejó de crecer a lo largo del período (ver Cuadro Nº 8).

Si tenemos en cuenta que en el referéndum sobre la fusión de la COA y la USA, en 1930, no habían votado más que 43.487 afiliados de ambas organizaciones, advertiremos la rápida expansión de la CGT durante la primera mitad de la década. En 1936 nucleaba el 71 % de los trabajadores organizados, porcentaje que se redujo al 62 % en 1939 para volver a subir al 75 % en 1941.

El crecimiento no era parejo, sin embargo, en las distintas ramas de actividad (ver Cuadro Nº 9, pág. 66): mientras el número de obreros ocupados en industrias manufactureras había aumentado en un 51 % entre 1935 y 1941, y casi en la misma proporción entre ese año y 1946, la cantidad de trabajadores organizados en ese rubro había crecido entre esos años en un 74 y un 93 % respectivamente. De ese modo, mientras en 1936 sólo representaban un 11 % del total de afiliados, en 1941 llegaban al 16 % y en 1945 al 26 %. En cambio, tendía a disminuir el peso de los trabajadores del transporte (terrestre y marítimo), que en 1936 representaban el 41 % de los trabajadores organizados, en 1941 el 35 % y en 1945 sólo un 22 %. Lo mismo ocurre con los otros grandes gremios del sector terciario (empleados de comercio y estatales), cuya participación relativa baja de un 30 % en 1936 a un 21 % en 1941 y al 13 % en 1945, si bien la declinación del número de afiliados en ese

Cuadro 8. Número de afiliados a organizaciones sindicales

	1936	1937	1939	1940	1941
CGT	262.630	289.393	270.320	311.076	330.681
USA	25.095	32.111	26.980	23.039	14.543
FACE <sup>a</sup>	8.012	8.079	18.500	18.675	13.550
Autónomos	72.834	68.105	120.809	120.038	82.638
Indefinidos	1.398	21.214	—	—	—
Total	369.969	418.902	436.609	472.828	441.412
NI	100	113,23	118,01	127,80	119,31

<sup>a</sup> Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas (no desarrollaba actividades propiamente sindicales, sino de carácter exclusivamente mutual, y agrupaba sobre todo a empleadas de comercio y del Estado).

Fuente: DNT, Organización sindical. Asociaciones obreras y patronales, 1941, Buenos Aires, págs. 2 y 27.

Cuadro 9. Número de organizaciones sindicales y de afiliados por rubros

	1936		1941		1945	
	Org.	Afil.	Org.	Afil.	Org.	Afil.
Actividades primarias .....	3	2.100	10	4.267	44	9.203
Alimentación .....	18	10.688	39	29.171	205	97.426
Comercio, bancos, oficinas y seguros .....	80	64.976	69	60.841	77	29.849
Comunicaciones .....	3	4.779	2	3.200	32	2.889
Confeción .....	7	9.428	10	12.906	37	14.410
Construcción y materiales .....	14	35.588	34	74.238	79	14.346
Electricidad, gas y agua .....	2	600	4	650	8	812
Espectáculos públicos .....	14	6.170	14	8.589	32	15.873
Gráficas, prensa y papel .....	4	3.700	2	5.045	29	3.713
Hotelería .....	8	9.519	25	3.470	46	6.139
Madera .....	5	8.827	10	6.304	17	6.885
Metales .....	3	1.975	4	4.459	21	5.992
Profesiones liberales .....	1	620	5	1.821	14	3.047
Químicas .....	2	166	2	250	29	5.884
Servicios sanitarios de higiene y limpieza .....	4	1.218	8	3.679	30	6.351
Textil .....	2	5.550	2	12.504	8	2.613
Transportes marítimos, fluviales y servicios portuarios .....	28	10.272	14	14.306	31	9.611
Transporte terrestre .....	57	141.576	30	140.601	91	109.023
Actividades del Estado, provincias y municipios .....	14	44.655	15	31.480	42	41.471
Varios .....	57	10.576	57	23.566	97	142.986
Total .....	296	369.969	356	441.412	969	528.523

Fuentes: "Primer censo de asociaciones profesionales obreras", en DNT, Boletín Informativo, año XVIII, época VI, septiembre-octubre 1936, pág. 4.732 y DES, Investigaciones sociales, 1943-45, pág. 29.

último año en el rubro Comercio — así como en Construcciones y Textiles — se debe a las convulsiones políticas que agitaban a esos gremios.

Esta distribución de los obreros organizados, que no coincide totalmente con la estructura ocupacional, nos revela grados muy diferentes de sindicalización. En términos generales, Germani calcula que en 1941 sólo un 11 % del total de asalariados estaba sindicalizado, subiendo el porcentaje al 13 % en el sector secundario y al 23 % en la industria manufacturera<sup>100</sup>. Esta última cifra, sin embargo, parece discutible: el número de obreros organizados en los rubros manufactureros según el censo de 1936 sólo representa un 8,7 % del total de obreros industriales de 1937<sup>101</sup>, y en 1945-46 la relación sólo había subido a un 15,3 %<sup>102</sup>.

Aún dentro de la industria manufacturera, el grado de sindicalización variaba considerablemente según las ramas (ver Cuadro 10, pág. 68). Algunas referencias parciales confirman, aproximadamente, los porcentajes que hemos calculado. Por ejemplo, en la reunión del Comité Central Confederado de la CGT en 1942 se dice que el sindicato metalúrgico tiene 5.000 cotizantes sobre 70.000 obreros ocupados en la industria (7%), o 9.000 sobre 107.000 (8%)<sup>103</sup>, y Luis Ramiconi, que fue secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), estima que un 15 o 20 % del gremio estaba organizado (PHO, ITDT). Otros dirigentes de la época calculan el porcentaje de trabajadores organizados en sus respectivos gremios de la siguiente manera: estatales 30 %, del calzado 25 %, telefónicos 20 o 25 %, municipales 10 %<sup>104</sup>.

Resulta difícil precisar el porcentaje de cotizantes en el gremio de la construcción debido a las grandes fluctuaciones de la actividad en esa rama y a la imprecisión de los datos. Celia Durruty estima que la Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC) agrupaba en 1941 al 49 % de los trabajadores ocupados<sup>105</sup>, aunque admite que ese alto porcentaje puede deberse a una subestimación de la cantidad de ocupados. Efectivamente, en la mencionada reunión del CCC de 1942 se dice, sin que los interesados lo desmientan, que la FONC sólo reunía a 38.000 cotizantes sobre cerca de 300.000 trabajadores del ramo (13 %) <sup>106</sup>.

Tampoco es fácil la estimación en Confecciones ya que, como hemos dicho, las estadísticas industriales subestiman enormemente la cantidad del personal ocupado: si nos guiamos por las cifras del Censo Industrial de 1946, estarían sindicalizados un 28 % de los trabajadores, pero si seguimos las del Censo General de 1947, el porcentaje se reduce al 4 %.

Sólo los sindicatos ferroviarios, en realidad, agrupaban a la gran mayoría de los trabajadores del gremio: Pedro Pistarini afirma que LF reunía al 96 o 97 % de los maquinistas y fogoneros (PHO, ITDT), y José Domenech dice que el 80 % de los ferroviarios estaban afiliados a la UF (PHO, ITDT). Aunque Horowitz estima que para 1941 el último porcentaje era del 58 %<sup>107</sup>, se trata igualmente de cifras no alcanzadas por ningún otro gremio. Eso explica el peso que tenían sus organizaciones sobre el conjunto del movimiento sindical (ver Cuadro 11, pág. 69).

Nótese que los tres sindicatos del transporte terrestre —UF, LF y Unión Tranviarios (UT)— controlaban en 1939 el 40 % de los delegados al congreso de la CGT, y en 1942 conservaban el 35 %. Aliados con

**Cuadro 10. Trabajadores sindicalizados en algunas ramas de la industria.**

	1935-36			1941			1945-46		
	Ocupados	Afiliados	%	Ocupados	Afiliados	%	Ocupados	Afiliados	%
	Alimentación y bebidas ..	98.702	10.688	11	139.373	29.171	21	189.084	97.426
Imprenta y publicaciones	20.181	3.700	18	25.444	5.045	20	34.632	3.713	11
Madera .....	30.910	8.827	28	53.454	6.304	12	98.114	6.885	7
Metales .....	39.020	1.975	5	61.163	4.459	7	91.146	5.992	6
Textiles .....	50.212	5.500	11	76.020	12.504	16	117.110	2.613	2
Electricidad, gas y agua ..	10.062	600	6	13.272	650	5	14.972	812	5
Químicas .....	12.644	166	1	21.557	250	1	38.052	5.884	15
Promedio .....			11			12			14

Fuentes: Censo industrial de 1946, págs. 26-30; "Primer censo de asociaciones profesionales obreras", ob. cit.; DES, Investigaciones sociales, 1943-45, pág. 29.

los otros grandes gremios del sector terciario —Confederación General de Empleados de Comercio (CGEC), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UDEM— tenía asegurada la mayoría en los cuerpos directivos de la central (56 y 52 % de los delegados en los mencionados congresos). Dado que la pieza clave de esa coalición —y, al mismo tiempo, el gremio más heterogéneo en cuanto a orientaciones político-ideológicas— era la UF, no debe extrañarnos que la puja entre las diversas tendencias que se disputaban la hegemonía en el movimiento obrero pasara generalmente por el control de esa organización. En manos del grupo liderado por Antonio Tramonti hasta 1934, esto permitió a la tendencia *sindicalista* con la que ese grupo tenía relaciones de afinidad y alianza, dominar a la CGT durante sus primeros años.

#### La CGT sindicalista

Volviendo al relato de los hechos, recordemos que en julio de 1928, por iniciativa de la Federación Obrera Poligráfica Argentina, se habían iniciado las gestiones de unidad entre la COA y la USA. Largas y laboriosas negociaciones fueron limando asperezas y atenuando mutuas desconfianzas, hasta que la represión desencadenada por el golpe militar dio el impulso decisivo para estrechar filas en torno a la defensa de la

**Cuadro 11. Principales organizaciones sindicales: número de afiliados y representación en los congresos de la CGT<sup>a</sup>**

	1936		1941	
	Afiliados	<sup>b</sup>	Afiliados	<sup>c</sup>
Unión Ferroviaria .....	100.000	39	90.000	37
Fed. Obr. Nac. de la Construcción <sup>d</sup> ..	28.500	19	58.680	20
			40.000 <sup>e</sup>	
Conf. Gral. de Empleados de Comercio	18.489	12	35.000	16
Fed. Obrera de la Alimentación <sup>f</sup> ....	500	1	19.513	6
			6.000 <sup>e</sup>	
La Fraternidad .....	15.000	10	12.795	11
			15.000 <sup>e</sup>	
Unión Tranviarios .....	10.000	9	13.000	10
			15.000 <sup>e</sup>	
Asoc. Trabajadores del Estado-CGT ..	30.000	6	10.000	7
			8.000 <sup>e</sup>	
Asoc. Trabaja. del Estado-Autónoma ..	—	—	8.165	—
Unión Obrera Textil .....	5.000	5	10.000	6

	1936		1941	
	Afiliados	b	Afiliados	c
Centro de Protección de Choferes (aut.)	11.500	—	11.743	—
Federación Obrera Marítima (USA) . . . .	4.000	—	5.600	—
			7.470 <sup>e</sup>	
Fed. de Obr. y Empl. Telefónicos (USA)	4.729	—	2.700	—
			5.000 <sup>e</sup>	
Federación Obrera del Vestido . . . . .	5.000	2	3.000	3
Unión Obr. y Empl. Municipales . . . .	8.900	7	6.850	7
			10.000 <sup>e</sup>	
Sind. Unico de Obr. en Madera (aut.) .	8.000	—	3.655	—
Asociación Bancaria (aut.) . . . . .	3.323	—	6.994	—
Federación de Obreros Cervecedores . .	—	—	6.000	5
Sindicato de Obreros Panaderos . . . .	6.100	2	1.000	—
Federación Gráfica Bonaerense . . . . .	3.000	4	5.000	6
Sind. Obr. de la Ind. Metalúrgica . . . .	1.500	3	4.000	3
Sind. Obr. de la Ind. del Calzado . . . .	500	1	3.840	2
			2.000 <sup>e</sup>	
Asoc. Personal de Hosp. y Sanatorios	480	3	2.000	—
			3.000 <sup>e</sup>	

<sup>a</sup> El número de afiliados a cada organización tiene sólo una validez relativa. Aparte del hecho de que la diferencia entre el número de adherentes nominales y el de cotizantes efectivos es enorme en algunas organizaciones (como, por ejemplo, la FONC), los datos se basan en la información proporcionada por las mismas, que tendían a inflarlos para obtener una mayor representación en los cuerpos directivos de la central. En 1936, por ejemplo, el órgano de la CGT-Catamarca aseguraba que el Sindicato Obrero de la Alimentación sólo tenía 1/3 de los cotizantes que se atribuía, la CGEC la mitad, la UF 80.000, la UT 8.000, LF 6.000 y la UDEM 6.000 (CGT-Catamarca, 4-12-1936)

<sup>b</sup> Número de delegados al Congreso de la CGT en 1939 (total 145).

<sup>c</sup> Número de delegados al Congreso de la CGT en 1942 (total 165).

<sup>d</sup> En 1936, Sindicato de Obreros Albañiles, del Cemento Armado y Anexos.

<sup>e</sup> En diferentes cuadros de la misma fuente (DNT, **Organización sindical**, 1941, págs. 6 y 12) aparecen ambas cifras: la primera parece haber sido proporcionada directamente por las organizaciones censadas y la segunda por la CGT.

<sup>f</sup> En 1936, Federación Obrera de la Industria de la Carne.

Fuentes: "Primer censo de asociaciones profesionales obreras", ob. cit., págs. 4733-55; DNT, **Organización sindical**, 1941, págs. 6 y 12; **La Vanguardia**, 8-7-1939 y 6-12-1942.

supervivencia misma de la organización sindical, y el 27 de septiembre de 1930 se constituyó la CGT.

En el referéndum previo habían votado 29.451 cotizantes de la COA y 14.054 de la USA, pero tanto el CNS como la Junta Ejecutiva (JE) encargados de organizar y dirigir provisoriamente a la nueva central estaban integrados por igual número de representantes de las entidades co-fundadoras (15 y 5 de cada una respectivamente). Sumados los miembros de la ex USA a los delegados de la UF, los **sindicalistas** dispusieron de una cómoda mayoría en ambos cuerpos. Esta se mantuvo al ampliarse el CNS, en abril de 1931, con la incorporación de otros 10 delegados en representación de los sindicatos autónomos que se habían integrado a la central y, al postergarse indefinidamente la convocatoria del Congreso Constituyente, siguió al frente de la CGT hasta fines de 1935.

Detrás de la opaca figura de Luis Cerutti —cuyo principal mérito para ocupar la secretaría general parece haber sido el hecho de ser ferroviario— estaba el poderoso Antonio Tramonti y el activo grupo **sindicalista** formado por Alejandro Silvetti, Andrés Cabona, Sebastián Marotta, José Negri y Luis F. Gay—. Los socialistas, además de estar en minoría, perdieron su figura más relevante al rechazarse la incorporación al Comité de Francisco Pérez Leirós "por no ser obrero en actividad".

De todos modos, la impotencia general ante la crisis y la represión, que redujo a la central a una vida puramente vegetativa durante sus primeros años, hizo que los enfrentamientos entre ambas tendencias quedaran relegados a un segundo plano. "Si hasta ayer —decía, por ejemplo, el **Boletín de la CGT (B-CGT)** el 15-2-1932— los afanes por la unidad de la organización obrera no habían logrado su concreción definitiva debido a que se había dado demasiada importancia a las divergencias teóricas y éstas, no siempre importantes, ocuparon el primer plano de las preocupaciones de los militantes, hoy, después de la dolorosa comprobación realizada, era lógico que se procediera de un modo distinto, vale decir, conforme a las enseñanzas recogidas en duras lecciones de hecho".

Al aparecer, en enero de 1932, el primer número del **Boletín** mensual de la CGT, hacía una reseña de la obra realizada por la central desde su fundación, señalando las difíciles circunstancias en que se había desempeñado ("de ahí que ella no resulte en extremo abultada"). Sus principales logros habían sido la libertad de 225 presos gremiales y la conmutación de la pena de muerte impuesta por un tribunal militar a tres choferes que se habían tiroteado con la policía. Para lograr esa conmutación, aclaraba el periódico, "no (se) vaciló en prescindir de ciertos principios". En efecto, la nota elevada a Urriburu comenzaba de esta manera: "La CGT, órgano representativo de las fuerzas obreras sanas del país, convencida de la obra de renovación administrativa del gobierno provisional y dispuesta a apoyarlo como está en su obra de justicia institucional y social...". Y terminaba así: "Convencida esta Confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial sino para asegurar la tranquilidad pública y para hacer respetar el prestigio y la autoridad del gobierno, aún más, entendiéndolo que los procedimientos y sentencias se han ajustado en absoluto a los regla-

mentos militares, promueve esta gestión invocando como única razón el hecho de que los condenados no registran antecedentes policiales" (La Nación, 10-12-1930).

Si los términos en que estaba redactada esa nota despertaron general indignación en los medios sindicales, cuando se supo que el texto de la misma había sido impuesto por Uriburu como condición para acceder a la petición, esa indignación se extendió también al autor de tan ignominioso chantaje. El tema reaparecería en lo sucesivo cada vez que las autoridades cegetistas eran criticadas por su actitud complaciente frente al poder político: en abril de 1934, por ejemplo, los albañiles de La Plata afirmaban que la nota había sido firmada a cambio de la designación del ferroviario Bernardo Becerra —que en 1931 sería uno de los candidatos a diputado nacional por el partido conservador bonaerense— como delegado obrero a la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (CGT, 1-5-1934).

Los tres choferes —que eran miembros del sindicato anarquista, no adherido a la CGT— no sólo salvaron su vida, sino que dos años después su condena de reclusión perpetua fue nuevamente conmutada (por dos años de prisión! El episodio nos habla a las claras del ambiente de arbitrariedad en que debió moverse el movimiento obrero en esos primeros años de la década del 30, así como de la debilidad de la central que debía recurrir a medios tan poco dignos para obtener sus objetivos más elementales.

Aparte de eso, la CGT había solicitado infructuosamente el levantamiento del estado de sitio y la construcción de obras públicas para disminuir la desocupación. Sólo podía presentar dos pequeños triunfos: la anulación de la exigencia del certificado de buena conducta para trabajar en el puerto y la formación de una bolsa de trabajo controlada por el sindicato en el puerto de Diamante (Entre Ríos).

Pese a los 300.000 afiliados que decía representar —cifra más que dudosa dada la modestia de sus contingentes iniciales y el hecho de que en el censo de 1936 no pretenda alcanzarla— la CGT no pudo impedir que Uriburu se despidiera del gobierno deportando a sus países de origen —la Italia fascista en la mayoría de los casos— a 150 trabajadores. Sólo atinó a comunicarse con la Confederación Nacional del Trabajo española para que ésta tratara de que se les permitiera desembarcar en su país.

"El gobierno surgido del levantamiento del 6 de septiembre de 1930 (...) —sintetizaría el B-CGT el 15-2-1932— ha hecho caer sobre las espaldas de los trabajadores organizados, que no tenían vínculo alguno con el depuesto y eran por lo mismo ajenos a él, todo el peso de su fuerza coercitiva.

"Como consecuencia de medidas adoptadas para asegurar el 'orden', el nivel de vida de los obreros ha descendido hasta el punto de ser hoy limítrofe con el hambre. La persecución de los hombres que sustentan ideas de renovación social fue la labor a que algunos funcionarios públicos se dedicaron con verdadera e inconcebible fruición. Por millares se cuentan los que sin causa real han desfilado por las cárceles del país; varios centenares de ellos permanecen aún detenidos o han sido

confinados en el presidio de Ushuaia, reclusos en desguarnecidos galpones de cinc, y suman numerosísimo contingente los que han sido desterrados del país.

"Y cuando por la proximidad de la vuelta al régimen constitucional era lógico que la infinidad de trabajadores que llevan largos meses de detención esperaran ser puestos en libertad (...) el gobierno, en una muestra de refinada e inútil crueldad, ordena su expulsión del país para ser entregados a regímenes condenados por la opinión libre del mundo.

"Estos actos de prepotencia no superados por los más despóticos gobiernos que ha padecido el país, entrañan un baldón para la tradición liberal del pueblo y un broche con el que se cierra, queremos creer que para siempre, un período amargo para la clase trabajadora".

La traumática experiencia de la dictadura militar parece haber sensibilizado a los dirigentes sindicalistas hasta el punto de hacerles olvidar momentáneamente su tradicional repulsa a participar en actos comunes con los partidos políticos. Es así que el 18 de junio de 1932 ante una oleada de rumores que aseguraban la inminencia de un nuevo golpe militar, sumaron sus fuerzas al "mitín de la libertad" auspiciado por los socialistas y otros partidos. Durante el mismo, Luis Cerutti expresó que "la clase trabajadora, que había observado con indiferencia el golpe de Estado del 6 de septiembre, no permitiría en estas circunstancias la ejecución de un hecho igual o parecido, pues sus consecuencias serían para las organizaciones de los trabajadores tan funestas como las experimentadas durante la dictadura instalada el 6 de septiembre". Por lo tanto, "ante los inconvenientes que ofrecen los regímenes de fuerza para el desenvolvimiento de las organizaciones sindicales (...) instó a los trabajadores a prepararse para impedirlos a toda costa" (B-CGT, 25-6-1932). Irónicamente, los mismos dirigentes que no habían movido un dedo para respaldar al gobierno de origen democrático y popular de Yrigoyen, salían ahora en defensa del régimen fraudulento y reaccionario de Justo.

Este gesto, además de una actitud sumamente prudente y moderada en todos sus actos —por ejemplo, ante la nueva declaración del estado de sitio en diciembre de 1932 la central se limitó a expresar que esperaba que la medida no se prestara a la reacción patronal— pronto abrieron a los dirigentes cegetistas las puertas del despacho presidencial: a la primera audiencia, celebrada en enero de 1933, se sucedieron otras casi mensualmente.

El acceso de los dirigentes sindicales a la radiofonía, esporádico hasta entonces, se hizo regular desde mayo de ese año, en que dispusieron de media hora diaria para propalar sus noticias. Desde ese mes la CGT integró también, junto con el DNT, la UIA, la Sociedad Rural y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, una comisión encargada del estudio de la jornada de 40 horas semanales, y en junio una comisión tripartita —con representantes del DNT y de los patrones— para estudiar la posibilidad del trabajo diurno en las panaderías. En septiembre, la CGT se dirigió por nota al presidente de la Cámara de Diputados pidiendo la intervención y el contralor sindical en la gestión de varios organismos estatales (DNT, Direcciones Generales de Ferrocarril-

les y de Navegación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Más tarde integraría, con representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la ANT, la UIA, la Bolsa de Comercio y otras instituciones, la Junta Nacional para combatir la desocupación (diciembre de 1933).

El creciente reconocimiento que iba logrando la CGT era interpretado por los socialistas —para no hablar de los vitriólicos comentarios de anarquistas y comunistas— como contraparte de una conducta claramente oficialista. Por otra parte, restablecida la actividad electoral, el PS no se resignaba a aceptar la “prescindencia” del movimiento sindical. Hasta fines de 1932 las relaciones entre la CGT y el PS habían sido correctas: la CGT había celebrado algunos de sus actos en locales del partido; socialistas como Martín S. Casaretto colaboraban en el periódico sindical, mientras que otros —como Angel G. Borlenghi— estaban frecuentemente entre los oradores principales de los actos cegetistas; no había ataques en los órganos de prensa. Pero esta convivencia no duraría demasiado.

Ya en abril de 1932 se había suscitado una disputa cuando la FGB —dirigida por socialistas— protestó por la designación de S. Marotta —que dirigía la organización rival (Unión de Linotipistas, Mecánicos y Afines, ULMA)— como delegado a la conferencia de la OIT\*. En noviembre, un ofrecimiento del PS para colaborar en la campaña que llevaba a cabo la CGT contra los intentos reaccionarios y por la reducción de la jornada de trabajo, había sido respondido con refinada sutileza: la JE resolvió “aceptar el ofrecimiento que el PS nos hace, así como toda otra adhesión que la JE estime necesaria y de utilidad para la campaña que la CGT viene desarrollando”. “A ese fin —agregaba— toda adhesión que reciba será bienvenida y apreciada. Igual actitud pueden, de acuerdo con esta resolución, asumir aquellos organismos que aún no siendo específicamente políticos, vean con simpatía esta campaña y quieran prestar su concurso. Nos referimos a los organismos estudiantiles y sindicatos independientes. El ofrecimiento del PS lo aceptamos complacidos en el carácter de la primera adhesión de fuerzas políticas a una campaña obrera” (B-CGT, 25-11-1932). Imposible poner en su lugar de manera más clara y a la vez elusiva al PS.

En febrero de 1933 el PS creó un Comité de Defensa Obrera, que la CGT interpretó como competitivo con su Comité Pro-Presos. Al mes siguiente, el tercer congreso de ATE —que con sus 20.000 afiliados era una de las organizaciones más importantes de la central— censuró a la conducción de la CGT por su participación en el acto del 18 de junio y por mantener sindicatos paralelos, exigiendo la pronta convocatoria del Congreso Constituyente. La CD del sindicato también fue criticada y reemplazada por otra con mayoría socialista.

\* El problema de la existencia en la central de dos organizaciones del mismo gremio —que también se daba en el caso de los municipales con la UDEM y la Asociación de Trabajadores de la Comuna (ATC)— derivaba de que en el momento de la fusión uno de ellos pertenecía a la COA y el otro a la USA. El mantenimiento de esta situación sería luego otra de las críticas frecuentes a la conducción sindicalista.

Estos vieron reforzada su posición dentro de la central en agosto, con el ingreso de LF. La vieja y prestigiosa organización, siempre centrada en sus propias reivindicaciones —y frecuentemente acusada de elitista y poco solidaria por otros gremios— nunca había desempeñado hasta entonces un papel destacado en la política sindical. Por esos años se convertiría, sin embargo, en la punta de lanza de la ofensiva socialista. Detrás de ella se alinearían la UDEM, férreamente controlada por Pérez Leirós desde 1919 y la militante FGB. Menos estrechamente asociada al PS que las anteriores, la FEC conocía por esos años una rápida expansión bajo la hábil conducción de Borlenghi. Sus intensas campañas por la reforma del Código de Comercio, que culminaron exitosamente en 1934, habían ido ampliando considerablemente su volumen y su prestigio, permitiéndole organizar una Confederación en escala nacional que pronto se transformó en una de las más importantes organizaciones de la CGT. La influencia socialista era ya también predominante en la UT y otros sindicatos, como la Unión Obrera Textil (UOT) y el Sindicato Obrero de la Industria del Calzado (SOIC). Los socialistas contaban ya, entonces, con la fuerza necesaria como para desafiar a la mayoría sindicalista cuya pasividad, actitud complaciente con el gobierno y demora en convocar el Congreso Constituyente iban generando creciente oposición.

#### La CGT disputada: socialistas y sindicalistas

Apoyándose en algunas medidas represivas tomadas contra anarquistas y comunistas, en episodios de violencia política recientemente registrados —como el asesinato de un diputado socialista en Córdoba— y en la organización de grupos paramilitares como la Legión Cívica, los sindicatos dirigidos por los socialistas comenzaron a presionar a la conducción de la CGT para que coordinara una acción conjunta con los partidos y otras organizaciones democráticas contra lo que caracterizaban como amenaza fascista.

La JE respondió a esas solicitudes con el desafortunado manifiesto del 8 de noviembre de 1933, destinado a convertirse en la piedra del escándalo. Empezaba por afirmar que “salvo rarísimas y no reiteradas excepciones, los actos de los sindicatos que la integran (a la CGT) no han sido molestados. Realizan regularmente sus asambleas, sin que medidas especiales pesen sobre ellos o los obliguen a callar su pensamiento sobre ninguno de los asuntos que tengan entre manos; ni siquiera están impedidos, en la medida de las posibilidades de cada uno, tanto de luchar para la defensa de conquistas como para realizar todas las que estén a su alcance. No se conoce el caso de militantes ni de miembros de los cuerpos centrales de la CGT que hayan sido detenidos ni perseguidos en virtud de la acción sindical. Las giras de los representantes de la Central Regional\*, así como las periódicas visitas seccionales de los miembros de los cuerpos directivos de las organizaciones adheridas, ocu-

\* Los sindicalistas se resistían todavía a usar el adjetivo “nacional”.

rren sin impedimento alguno. Los periódicos sindicales hacen la prédica que consideran conveniente, sin censura previa y sin represalia posterior. La correspondencia sindical circula libremente. Si esto es exacto, y no se ha documentado lo contrario, ¿qué motivos tendría la CGT para aprestarse a luchas que girarían en el vacío y no hallarían ambiente por lo mismo que carecen de fundamento serio?”.

En cuanto a los hechos de violencia política, sostenía que, además de no ser nuevos en la historia del país, escapaban al campo de acción específica de la central. Restaba también importancia a las medidas represivas contra algunos sectores del movimiento obrero —comparándolas con hechos más graves ocurridos en el pasado— y a la organización de grupos fascistoïdes, afirmando que no se daban en la Argentina las condiciones que habían determinado el auge del fascismo en Europa.

Finalmente, los miembros de la JE “se felicitan de que el presidente de la República, en su entrevista del 6 del corriente, haya confirmado la orientación democrática del actual gobierno, lo que indica la necesidad de estimularlo en su decidido propósito de mantenerse dentro de la ley, luchando, para bien general, contra todo intento de sustituir el orden, sea oriundo de la demagogia o venga de la reacción” (B-CGT, 25-11-1933).

De más está decir la tormenta que desató semejante manifiesto. “Negar la realidad del momento —comentaba, por ejemplo, *La Vanguardia*, el 10-11-1933—, atenuar la gravedad de la existencia peligrosa de bandas armadas al servicio de la reacción, olvidar que existen trabajadores que pasan la vida en las cárceles por delitos de opinión, queriendo explicar lo que sucede con referencia a hechos aún más graves del pasado, constituye, aún sin quererlo, una justificación de los graves hechos del difícil momento que vive la clase trabajadora argentina. El apoliticismo que persigue la central obrera ha dado así a su manifiesto un deplorable sentido político (...) Estamos seguros por eso que el manifiesto no interpreta el verdadero sentir de la clase obrera”.

Durante los días siguientes se multiplicaron, en efecto, las declaraciones de sindicatos condenando el manifiesto. La FEC insinuaba en su declaración la existencia de simpatizantes del fascismo en la JE y, ante el pedido de aclaraciones por parte de la misma, respondía que “si bien es verdad que no puede comprobar que algunos de sus miembros están en relación con los fascistas, tampoco está en condiciones de confirmar lo contrario” (B-CGT, 5-1-1934).

El secretario general de la FGB, Juan A. Erneta, por su parte, declaraba a un diario que “hay un componente de la Mesa Directiva autora del manifiesto de marras que está entusiasmado con la idea del gobierno corporativo y funcional”, y que “ya ha hecho un cálculo de cuántos representantes de la entidad a que es afiliado le corresponderían al implantarse el sistema, los que, según el cálculo, serían unos 40”\*. Agregaba que “el manifiesto es propio de elementos que se han

\* Según se supo después, el aludido era José Negri, de la UF, y la declaración parece haber sido un tiro por elevación contra Tramonti, a quien por esos días los socialistas acusaban de corporativista.

pasado al otro bando” y que en el mismo “campea, netamente definido, el espíritu fascista” (CGT, 25-4-1934).

Mientras tanto, según *La Vanguardia*, “diarios vinculados a las actividades fascistas, así como los que se imprimen bajo la inspiración del clericalismo y los conocidos representantes del privilegio y del capitalismo, todos fueron uno en el coro favorable al tono y contenido del manifiesto obrero (...). La circunstancia de la unanimidad del elogio sin reserva de procedencia tan sospechosa, unida a la disconformidad general de los gremios obreros y de los trabajadores, comprueba cuánta razón tuvimos cuando nos limitamos a dejar constancia de que el manifiesto estaba muy lejos de interpretar el sentir y el pensar de la masa obrera argentina” (21-11-1933).

El órgano de la central, por su parte, respondía a estos ataques con un artículo titulado “Intentos divisionistas en la CGT”: “algunos sindicatos que han tomado resoluciones acerca de la orientación de la CGT (...) —decía— han insinuado un movimiento de escisión, y algunas personas afectas a determinados intereses políticos la proclaman desembozadamente. Esta actitud tendría como fundamento el fracaso de las reiteradas solicitaciones a la CGT para sacarla de su cauce natural y aliarla a determinadas fuerzas políticas, so pretexto de efectuar una campaña de interés común. Apresurémonos a decir que los propósitos cismáticos no son de ahora; ellos son tan antiguos que se remontan al origen de la CGT y sólo una cuestión de táctica indujo a quienes los sustentan a mantenerlos ocultos, dándolos ahora a luz por estimarlo oportuno. Este divisionismo que ahora no se oculta, y que en ciertos casos se agudiza, tiene su raíz en el deseo de acoplar las actividades sindicales a la suerte de un partido político que, no obstante sus reiteradas manifestaciones de que es respetuoso de la autonomía del movimiento obrero, sostiene agrupaciones destinadas exclusivamente a desconocer su autonomía, dando el movimiento obrero una orientación conveniente a sus intereses”.\* (B-CGT, 25-11-1933).

Los argumentos de ambas partes se repitieron, ampliaron y diversificaron en las tumultuosas sesiones del 30 de noviembre de 1933 al 5 de enero de 1934 en el Comité Confederal (CC) —al que los socialistas ahora negaban ese título, recordando que se trataba sólo del CNS provisorio de una CGT aún no constituida—, donde salieron a relucir todo tipo de viajes y nuevas recriminaciones. Finalmente, el manifiesto aprobado por el Comité el 15 de diciembre no sólo no rectificaba las afirmaciones contenidas en el de la JE sino que, además de atacar veladamente al PS, hacía amplia ostentación de ortodoxia sindicalista: “Expresión de un movimiento esencialmente emancipador —decía—, dado que aspira a eliminar las causas en que se basan los principios autoritarios que caracterizan al sistema social vigente, cualquiera sea su estructura política y jurídica, la CGT ha afirmado su profunda aspiración libertaria en el hecho mismo de haber fundamentado su existencia en la libre coordina-

\* Se refiere, naturalmente, al Comité Socialista de Información Gremial (CSIG), que sería desde entonces la *bête noire* de los sindicalistas.

ción de sus fuerzas y en su inconfundible posición autonómica. Ninguna autoridad extraña al medio de su desarrollo tiene ni debe tener acceso en su seno (...)

"Cualquier ligazón que estableciese con grupos extraños, además de no significar ningún otro aporte que el verbal, se traduciría en una reducción de su personalidad y en una limitación de su libertad (...) Parecería que la alianza proyectada sólo tendría por finalidad provocar nuevas y agrias discusiones —a todas luces cismáticas (...) La organización obrera (...) debe afianzar su unidad en el terreno de la economía, que le es propio, y del cual no debe nunca salir" (B-CGT, 25-12-1933).

Agregaba que los grupos o partidos que se sintieran identificados con los fines del movimiento obrero podían colaborar con él desde sus propias esferas, sin inmiscuirse en los actos de la central ni pretender sacarla de su campo específico. En cuanto a la amenaza de reacción capitalista —no mencionaba el término "fascista"— señalaba la inutilidad de las protestas verbales y que ésta debía ser combatida en las causas que la originaban, es decir, en la situación económica y más especialmente en la desocupación.

El nuevo manifiesto venía, pues, a echar sal sobre la herida, y desde entonces el enfrentamiento entre sindicalistas y socialistas se hizo cada vez más agudo. El congreso de la CGEC, por ejemplo, repudiaba el nuevo documento basándose en que "en él se aconseja a la clase trabajadora la prescindencia en la lucha contra el fascismo y demás legiones armadas" (B-CGT, 28-2-1934) y recibía con muestras de hostilidad al representante de la central. "Los que han visto siempre en el movimiento obrero un excelente medio de lograr posiciones ventajosas en los respectivos partidos políticos por reflejo de la influencia ejercida en aquél —decía, por su parte, el B-CGT del 25-12-1933—, al ser rechazados en su pretensión de que la CGT adoptase medidas tendientes a acreditarlos personalmente, se dieron a la búsqueda de motivos para atacarla y, al parecer, encontraron uno excelente en el manifiesto del Comité Confederado".

La contraofensiva sindicalista se basó principalmente en la denuncia de las actividades que desarrollaba el CSIG. Este, según afirmaba A. Silvetti en la reunión del 18 de diciembre de 1933 del CC, "tiene como función principal malograr la orientación de la CGT (...), imprimirle la que estima útil al PS y, finalmente, subordinar a su dirección las fuerzas confederales; sin desechar la idea, por otra parte, de destruir la CGT para formar con los restos que pudieran serle adictos una central obrera inspirada por el partido referido, en la hipótesis de que la actual formación confederal no se rindiere a sus designios.

"Para lograr sus designios, la CSIG, en la que actúan representantes del Comité Ejecutivo del PS, se ha ramificado por las localidades donde halló secuaces y el movimiento confederal reviste alguna importancia; dispone de un órgano periodístico y celebra con cierta frecuencia reuniones de dos tipos con propósitos distintos: unas, de carácter público, profusamente anunciadas, se destinan a comentar tendenciosamente la orientación de la CGT acerca de determinados problemas, y al lado de hombres de relativa responsabilidad en el organismo confederal

hablan, en tono de maestros, los que no tienen ninguna por no pertenecer a la vida del trabajo; otras, secretas como conjuras, tienen como fin realizar todo aquello que públicamente daría lugar a situaciones enojosas. En estas reuniones de 'hombres de confianza' (...) se instruyen recíprocamente los conjurados sobre el modo de obrar en los distintos medios sindicales; se conciben las maniobras cuyo éxito finca en la sorpresa de los adversarios desprevenidos; se confeccionan las listas de candidatos a puestos directivos, la que al triunfar han de satisfacer los anhelos de hegemonía política y de sojuzgamiento; se clasifican los militantes sindicales que ocupan puestos de responsabilidad en dos categorías: los fieles y los herejes (...) en dignos y honestos si pertenecen al primer grupo y como 'peligrosos traidores al proletariado' si pertenecen al segundo. A éstos hay que difamarlos solapadamente hasta que el desprestigio los invalide para toda acción que tienda a preservar las filas confederales de influencias externas tendientes a someterlas. Finalmente, a esas reuniones secretas también se les da el cometido de juzgar a los militantes socialistas por sus acciones en la CGT.

"Para subordinar a la CGT o en su defecto destruirla, la CSIG utiliza también otros medios: apaña los elementos desplazados de las organizaciones regulares por distintos motivos —incluso los de traición—, los disciplina y opone a esas organizaciones en actitud de competencia. Y para que estos elementos actúen con eficacia frente a las organizaciones que los han excluido, los dota de recursos materiales de propaganda del PS" (B-CGT, 28-4-1934).

Aunque obviamente tendenciosa, esta descripción de las actividades de la CSIG no parece apartarse demasiado de la realidad. "Nos reuníamos —dice, por ejemplo, el ferroviario Juan Rodríguez, uno de sus miembros por aquella época— porque los compañeros del sindicato A nos decían que iba a haber elecciones y tiene que ir fulano de tal; lo analizábamos por distintos conductos de información. Después convocábamos a la gente de ese sindicato, por supuesto de las filas del partido, diez, veinte, treinta, los que conseguíamos, y entonces hablábamos del asunto. Ahí se promovían los candidatos y ahí se hacían las grandes luchas en todos los sindicatos (...). Solamente se ocupó de promover a la gente en cada sindicato que fuera del partido" 108.

Finalmente, el CC designó una comisión para que se entrevistara con el Comité Ejecutivo del PS y le planteara la necesidad de limitar las actividades de la CSIG de modo que no se inmiscuyera en la vida de los organismos sindicales. Poco después, el CC decidía la separación de la FGB, al negarse su Comisión Administrativa (CA) a dar explicaciones por las mencionadas declaraciones de su secretario general. El dictamen de la comisión que había recomendado la medida reseñaba la conducta de la organización desde su fundación, haciéndole todo tipo de recriminaciones, y desde entonces la polémica entre las autoridades de la FGB y de la CGT sería permanente. La FEC, por su parte, había sido objeto de un serlo llamado de atención por los términos en que su CA había respondido al pedido de aclaraciones de la JE.

Mientras tanto, la contraofensiva iba acompañada de constantes ataques contra la CSIG y el PS por parte del periódico cegetista —casual-

mente transformado en semanario desde abril— y por una intensa propaganda doctrinaria **sindicalista**. A los artículos de los dirigentes locales se sumaban ahora colaboraciones de Arturo Labriola, León Jouhaux (secretario general de la CGT francesa), Cornelio Mertens (que ocupaba el mismo cargo en la central belga) y otros, mientras que S. Marotta —que junto con J. Negri asistía a la conferencia de la OIT en Ginebra— enviaba reportajes a otros dirigentes **sindicalistas** europeos (como Angel Pestaña, que acababa de fundar en España un **Partido Sindicalista**).

En ese ambiente de creciente tensión se inició finalmente, en mayo de 1934, la discusión del anteproyecto de estatutos. Los debates se centraron en tres artículos. Por el 1º, mientras la mayoría llamaba a agruparse en la CGT a todos los “trabajadores asalariados”, la minoría proponía una fórmula más amplia que incluía a las profesiones liberales. En el 5º, el dictamen de la mayoría establecía que “la CGT no se inmiscuye en la forma que tengan de encarar los problemas sociales los partidos políticos o agrupaciones ideológicas, ni pretende fijarles normas de orientación; en reciprocidad, exige de éstos la observancia de una conducta igualmente respetuosa”. El de la minoría, en cambio, proponía “intervenir constantemente en todos los problemas nacionales que afecten a los trabajadores; defender las libertades individuales; recabar de quienes correspondan leyes que favorezcan a la clase trabajadora para el acceso a la dirección de la producción”<sup>109</sup>. Finalmente, el artículo 29º del proyecto mayoritario establecía que los miembros del secretariado, de la CA y del CCC no podrían ser candidatos a ninguna función política y que la presentación de su candidatura implicaba la renuncia al cargo confederal que ejercieran. La minoría planteaba la eliminación lisa y llana de este artículo.

Mientras tanto, a medida que la desocupación iba disminuyendo, varios gremios comenzaban a movilizarse y exigían de la CGT un respaldo más activo. Socialistas y comunistas arremetían en sus críticas contra la pasividad y el oficialismo de la dirección **sindicalista** que, por otra parte, tan pocos beneficios reportaban. La agrupación socialista Solidaridad, por ejemplo, señalaba que “el movimiento obrero argentino sigue estando sometido a influencias grises, aletargadoras, atentas sólo a servir el interés casi siempre político de la persona o grupo que esté en el gobierno del país” (B-CGT, 11-5-1934).

Ante todas estas presiones y conciente de la insatisfacción de las bases, la JE decidió finalmente, en junio de 1934, lanzar una movilización por un plan de emergencia de tres puntos:

“1º) Jornada máxima semanal de 40 horas y vacaciones anuales pagas.

“2º) Establecimiento de comisiones paritarias en cada industria para fijar periódicamente el salario mínimo de los trabajadores y la rotación en el trabajo. Salario mínimo, estabilidad y escalafón para los trabajadores del Estado y entidades de carácter público.

“3º) Cumplimiento de la legislación social. Seguro nacional a la desocupación, a la invalidez y a la ancianidad. Mantenimiento de las re-

formas al Código de Comercio sancionadas por el Parlamento” (CGT, 22-6-1934).

El CC trataba de justificarse recordando que la CGT había nacido en circunstancias muy difíciles, y que por eso “huyó de las actitudes apresuradas y de las agitaciones vanas y estériles. Comprendió que no debía aumentar el caos económico y político en que se debatía la nación y estimó debidamente todo esfuerzo para ponerle fin”.

Pero recordaba también que hacía tres años que su Programa Mínimo estaba en el Congreso Nacional sin que se le prestara atención, concluyendo que “en el país, cuyo nombre se invoca a cada rato por los que han sido elegidos por él para servirlo, parece que no estamos comprendidos los trabajadores”. “Al comprobar ésto —terminaba—, el CC cree llegado el momento de que la clase obrera abandone su actitud de espera y se apronte a la acción que le es propia para conseguir lo que con justicia reclama. Y si al decir esto a los trabajadores el CC recuerda la conducta seguida por la CGT hasta ahora, lo hace con el propósito de que el antecedente sirva para explicar y justificar la medida extrema adoptada y el cambio de actitud que aconseja a los obreros” (idem).

Pero el giro que la dirección **sindicalista** se manifestaba dispuesta a encabezar llegaba demasiado tarde. Por esos días ocurría un acontecimiento que sellaría su destino: el grupo de Tramonti perdía el control de la UF, que pasaba a manos de una coalición con mayoría socialista.

#### Cambio de manos en la UF y “golpe de estado” en la CGT

El grupo **sindicalista** que manejaba la CGT no tenía, en realidad, bases de sustentación propias. Silvetti y Cabona, por ejemplo, que habían abandonado sus antiguos oficios de ebanista y mimbrero para entrar en dependencias estatales —hecho que sus enemigos atribuían a sus buenas relaciones con el gobierno— no tenían tras de sí a ninguna organización, pues aquellas a las que habían representado se habían disuelto. Marotta dirigía un pequeño sindicato de linotipistas. Sólo el benjamín del grupo, Gay, estaba respaldado por un gremio relativamente importante (telefónicos). En los últimos años, además, los **sindicalistas** habían ido perdiendo el control de la FGB, el SOIC y la ATE, mientras que su tradicional baluarte, la FOM, iba perdiendo su importancia relativa. Si pudieron mantenerse al frente de la central, entonces, era sólo gracias a su alianza con el grupo de Tramonti que controlaba la UF, de ahí que su destino estuviera estrechamente unido al del caudillo ferroviario.

Pero éste debió enfrentar, durante los años de la crisis, una serie de problemas que fueron minando su prestigio y provocando descontento entre las bases de su gremio. En 1931, ante la declinación del tráfico y de las ganancias, las empresas ferroviarias iniciaron una política de reducción de gastos que contemplaba el despido de 6.000 trabajadores.

Para evitarlo, tanto la UF como LF debieron ceder algunas de sus conquistas: la primera aceptó el "prorrato" (distribución del trabajo entre el personal existente; cuando éste resultaba excesivo se reducían sus jornadas); la segunda, descuentos sobre los sueldos para que se pudiera pagar al personal sobrante.

El acuerdo fue aceptado a regañadientes por los ferroviarios porque evitaba los despidos y no se reducían, en principio —aunque sí en la práctica—, los salarios. Pero las empresas y el gobierno —que ahora las respaldaba totalmente— siguieron presionando y en 1933 la UF debió aceptar un acuerdo con el Ferrocarril Sur —luego extendido a los demás— que incluía reducciones de salarios. El nuevo acuerdo, que violaba además una resolución del Congreso Extraordinario reunido poco antes, provocó un descontento generalizado. Muchas seccionales se pronunciaron en contra y decidieron negociar por sí mismas con las empresas. Socialistas y comunistas emprendieron una vociferante campaña contra Tramonti, acusándolo de traición, de estar vendido al gobierno y a las empresas y de simpatías corporativistas. La reacción autoritaria del caudillo, que recurrió a la intervención de seccionales y a la expulsión de opositores, no hizo más que empeorar la situación.

Uno de los protagonistas de esas luchas relata así sus entretelones: "Resulta que Don Antonio nos dice: —Veán, compañeros, cualquier cosa que ustedes voten en contra, yo ya he firmado los documentos y esto ya está resuelto. Entonces le dijimos: —¿Por qué llama a un Congreso Extraordinario si ya está resuelto? Y ahí se produce la gran discordia, digamos así, entre un sector y otro. Entonces los socialistas, los comunistas y algunos sindicalistas y algunos radicales muy liberales, formamos una conjunción de izquierda y ahí fue cuando hicimos la lucha y lo echamos a Tramonti de la UF"<sup>110</sup>.

En realidad, agrega el mismo testigo, ocurre que Tramonti "no se avenía al PS, él se creía un sindicalista, entonces nosotros los socialistas, que ya habíamos creado una cantidad de cosas, no podíamos dejar a una persona en contra de todo eso, que se manejaba tan bien, con tanta mentira... Este fue un factor que incidió en la lucha también. En cambio Domenech se afilió al partido, porque tampoco estaba afiliado en aquel entonces (...) si no, también lo hubiéramos hundido"<sup>111</sup>.

Por cierto que, aunque aperecía encabezando una coalición con mayoría socialista, las relaciones de José Domenech con el partido siempre fueron conflictivas. El las resume así: "Creo que fue en el año 28. Estábamos en un congreso de la UF (...) Los afiliados socialistas de la CD fuimos citados por la CSIG (...) Nos dijeron, de buenas maneras, que habla que tener en cuenta que la CSIG habla resuelto que los miembros afiliados socialistas tenían que tener tales o cuales actitudes \*. Y yo les dije: —No estoy de acuerdo, yo soy afiliado socialista y aquí cumplo con lo que el partido me dice, pero no estoy dispuesto a de-

\* Más adelante aclara que "la determinada línea de conducta era que teníamos que actuar como socialistas, desembozadamente como socialistas, y hablar del PS".

jarme sujetar a ninguna CSIG. Yo estoy dispuesto a actuar, en cualquier parte, por mi cabeza y con mis sentimientos. Y me enojé y renuncié al partido. Me mandaron varias notas, el Comité Ejecutivo, haciéndome reflexionar, pero no acepté y estuve diez años sin ser afiliado. Yo me afilié al PS, creo que fue en el año 42, y lo hice no del todo convencido, porque me parecía que sin ser afiliado actuaba con más libertad dentro del gremialismo"<sup>112</sup>.

Por otra parte, en el CC de la CGT Domenech había seguido disciplinadamente las directivas de su organización y había votado por consiguiente con el grupo tramontista. Recién comenzó a diferenciarse al abstenerse en la votación sobre la separación de la FGB, argumentando que la medida podía llevar a la división de la central.

De modo que, en un primer momento, el cambio en la composición de la CD no pareció ser tan radical. Tramonti —que no había sido reelegido por su seccional— no presentó su candidatura para la CD con el argumento de que prefería dedicarse exclusivamente a su tarea de director obrero en la Caja de Jubilaciones Ferroviaria. Domenech fue el orador principal en la comida de camaradería con que se le despidió y el caudillo desplazado retribuyó luego los elogios de su sucesor en un reportaje: "Comparto y retribuyo sus cordiales sentimientos para conmi-go —decía—. Estamos ligados por una vieja amistad, pues actuamos juntos en la organización de los obreros ferroviarios desde hace muchos años y tanto en los congresos como en la CD, de la que él forma parte casi desde hace tantos años como yo, con algunos intervalos hemos coincidido en la apreciación de los más grandes problemas del gremio. Lo sé voluntarioso, enérgico y preparado, de tal manera que estoy seguro que ha de ser útil a la organización (...) Y, en cuanto a mí, como soldado disciplinado, estoy a sus órdenes para lo que pueda ser necesario (CGT, 21-9-1934).

Ambas partes trataron, pues, en un principio, de disimular la magnitud del cambio: los triunfadores porque su mayoría en la nueva CD era muy precaria (un solo voto) y porque seguramente temían que una transición demasiado brusca pudiera conmocionar al gremio y aún provocar una escisión; los derrotados porque probablemente esperaban mantener buena parte de su influencia y aún recuperar su predominio.

Pero la CSIG no podía dejar de proclamar indiscretamente su victoria ni de develar sus antecedentes: la anterior CD —decía su Circular Nº 4— "valiéndose de una mayoría ocasional, había emprendido una campaña de intriga y persecución contra nuestros compañeros que luchaban con altivez dentro de la misma, a tal punto que les hacía casi imposible continuar actuando en los cuerpos centrales. Esta persecución dio motivo a que varios compañeros nuestros resolvieran organizar en todo el país y en todos los ferrocarriles comisiones de coordinación a los efectos de disciplinar la actividad de los mismos (...) De la coordinación y disciplina de los compañeros socialistas surgió la nueva CD (...) De los 17 miembros que componen el cuerpo central de la UF, 8 son socialistas, 3 simpatizantes socialistas y 6 de otras tendencias; pero de los 8 socialistas hay que descontar a los ciudadanos Melani y Caamaño, que siempre discrepan con los socialistas, sumando sus vo-

tos en todos los casos en contra de nuestros compañeros. En cambio, nuestros compañeros cuentan con los votos de los 3 simpatizantes. En definitiva, para los casos de votaciones de importancia, nuestros compañeros cuentan con 9 votos a favor y 8 en contra" (facsimil en CGT, 30-11-1934).

De más está decir que los sindicalistas vieron en el contenido de esta circular la plena confirmación de sus denuncias acerca de las actividades de la CSIG y no dejaron de propalarlo a los cuatro vientos, pero muy pronto una extraña calma se extendió sobre el ámbito gremial. Después de alcanzar su paroxismo en vísperas de la renovación de la CD de la UF, la violenta polémica entre socialistas y sindicalistas parecía dejar paso a una tensa expectativa: la prensa de ambos bandos no volvió sobre esos temas sino raramente y con sordina y un delegado de LF viajó a la conferencia de Ginebra junto con Negri y Silvetti. Si los dirigentes de la CGT conocían lo precario de su situación y trataban de no agitar el ambiente, a los nuevos conductores de la UF no les faltaban problemas.

La puja con las compañías había sido sometida finalmente al arbitraje presidencial, y Justo había emitido un laudo que transformaba el prorrateo en retenciones sobre los salarios, variables según las finanzas de las empresas, y que permitía a éstas efectuar la reclasificación en categorías del personal. Después de haber centrado la campaña contra Tramonti en su actitud claudicante frente a las empresas y el gobierno, el grupo de Domenech se veía ahora en la ingrata obligación de justificar y defender el controvertido laudo y recibía las mismas acusaciones que antes había lanzado. Su autoridad no estaba aún consolidada, y esto se evidenció en la asamblea de mayo-junio de 1935: contrariando la posición de la CD, ésta aprobó el anteproyecto de estatuto propuesto por la mayoría del CC y comprometió a los delegados ante el próximo Congreso Constituyente de la CGT a sostenerlo. Esto significaba una considerable derrota para el grupo de Domenech y una gran desilusión para los socialistas: sin los votos de la UF no lograrían que las cláusulas anti-políticas del proyecto se anularan.

Simultáneamente con la de la UF se desarrollaba la asamblea de LF, que, en cambio, aprobó el anteproyecto de la minoría y pidió la pronta convocatoria del Congreso Constituyente. Durante esta asamblea se originó un incidente que señalaría el camino para la ruptura de la impasse en que habían entrado las relaciones entre la CGT y la UF. Un delegado afirmó que la demora en convocar el Congreso Constituyente obedecía "a los intereses que hay entre los miembros del CC, que no representan a sindicatos debidamente constituidos sino a entidades que no son de sello y de membrete, pertenecientes a las ex COA y USA, y que la mayoría de ellas ya no existen", agregando que "algunos de esos representantes se han constituido en burócratas sindicales" (CGT, 31-5-1935).

La JE respondió que en la CGT sólo había dos dirigentes remunerados (el secretario general y el director del periódico, que era Silvetti) y publicó la siguiente lista de los sindicatos a que pertenecían los miembros del CC:

UF .....	13
UT .....	3
ATE .....	3
LF .....	2
UOEM .....	2
ATC .....	2
SOIC .....	2
FOM .....	1
UOT .....	1
FEC .....	1
ULMA .....	1
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOET) ..	2
Federación de Oficiales de la Marina Mercante (FOMM) ..	2
Cámara Sindical de Cocineros .....	1
Total .....	36

(CGT, 31-5-1935)

Poco después, ATE preguntaba socarronamente cuáles eran los tres representantes que se le atribuían en esa lista, ya que el sindicato no reconocía más que a uno\*, a lo que la JE contestó que "en el CC no hay representantes de sindicatos determinados; sus miembros representan individual y colectivamente a todos los obreros del país adheridos a la CGT" (CGT, 21-6-1935). Se trataba, evidentemente, de sentar un precedente para impedir que un sindicato pudiera cambiar los miembros del CC, negándoseles a éstos el carácter de representantes de sus respectivas organizaciones.

El entredicho parece haber inspirado a Domenech la forma de resolver la situación planteada entre la CGT y la UF. Al discutirse en el CC, a fines de octubre, la readmisión de la FGB —medida que había obtenido el respaldo de los recientes congresos de la UF, LF y UT—, Domenech propuso que la votación se hiciera por número de cotizantes en lugar de la habitual votación por delegados. La moción fue rechazada con el mismo argumento con que se había respondido a la ATE, pero de todos modos la fórmula propuesta por el nuevo presidente de la UF no hubiera cambiado el resultado de la votación, ya que —a pesar de la resolución del congreso de la UF— el único ferroviario que votó con él por la reincorporación fue Cerutti.

En realidad, Domenech ya había iniciado su maniobra el día anterior a esta votación: en nota al secretario general de la CGT le comunicaba que la CD de la UF había resuelto reemplazar a los seis delegados de la organización en el CC que habían dejado de pertenecer a ese cuerpo directivo, por considerar que al no estar ya en contacto directo con los problemas gremiales no podían reflejar fielmente las opiniones del gremio. Exceptuaba de esa medida a Cerutti —por las cualidades que había demostrado en el desempeño de su cargo— y a

\* Los otros dos eran, obviamente, Silvetti y Cabona.

Tramonti —por su larga actuación en la UF y su permanencia en la Caja de Jubilaciones—.

Otros párrafos de la nota dejaban entrever, sin embargo, las verdaderas motivaciones de la medida. Decía, por ejemplo, que mientras no tuviera un estatuto y una dirección elegida de acuerdo con el mismo, la CGT debía "ser inspirada en su acción por los sindicatos que la integran". Agregaba que la UF siempre había velado por que la CGT "se encaminara y desarrollara por los mismos métodos de acción que permitieron el engrandecimiento de nuestra entidad" y que ese propósito se había ido cumpliendo en términos generales, pero que "de un tiempo a esta parte se ha creado una situación que lo contraría y que da lugar a que los representantes de los sindicatos más pequeños sean quienes en realidad dirigen la CGT, debiendo ir a la zaga de ellos los camaradas que representan a la UF" (CGT, 20-12-1935).

El reemplazo de los seis miembros del CC hubiera significado la pérdida de la mayoría para el grupo sindicalista (en la votación sobre la readmisión de la FGB se habían impuesto por 21 a 9, y pocos de los 6 ausentes votaban habitualmente con ellos). De modo que en su respuesta del 29 de noviembre la JE insistía en su posición "reglamentaria", apelando a la jurisprudencia. Las Bases de Unidad establecían que los miembros del CC serían designados por el voto general de los afiliados o por referéndum. El reglamento interno aprobado por unanimidad en 1932 determinaba que los mismos "representan en el seno del CC a todos los sindicatos confederados y no a organizaciones determinadas; por tal razón, están obligados a rendir cuentas de sus actos relacionados con la CGT únicamente al cuerpo de que forman parte", y lo mismo establecía un artículo del anteproyecto de estatuto que no había sido objetado por ningún sindicato. No había ningún precedente para la teoría de que para ser miembro del CC hubiera que pertenecer a la CD de un sindicato y Cerutti, por ejemplo, nunca había integrado la CD de la UF. Por lo tanto, la JE no reconocía a la UF atribuciones para cambiar a ningún miembro del CC, reservando ese derecho al próximo Congreso Constituyente, que ya había sido convocado para marzo del año siguiente. En cuanto al presunto predominio de los sindicatos más pequeños, la JE recordaba que 3 de los 4 miembros de la Mesa Directiva, 5 de los 10 de la JE y 13 de los 36 del CC pertenecían a la UF.

El conflicto planteado tendría una rápida e insólita solución. El 11 de diciembre, la CD de la UF decidió suspender el pago de sus cotizaciones a la central y comunicar el hecho a los demás sindicatos. En la noche del 12, un grupo de dirigentes de la UF, LF, UT, CGEC, ATE y UOEM, dirigidos por Domenech, ocupó el local donde funcionaba la CGT, gracias a la complicidad de Cerutti —desde entonces, "el felón" para los sindicalistas— que les franqueó la entrada. El grupo declaró la caducidad de las autoridades anteriores de la central y constituyó una junta provisional encargada de dirigirla, confirmando a Cerutti como secretario general.

"El pronunciamiento usado por ciertos generales sudamericanos, la confabulación, el golpe de mano hitlerista, el asalto realizado a amparo de las sombras de la noche —dramatizarían los depuestos—, serán tam-

bién en lo sucesivo procedimientos que se utilizarán cuando los cuerpos dirigentes de los organismos obreros tengan la osadía de negarse a servir los espurios intereses de grupos políticos que están siempre al acecho para dar el zarpazo a los sindicatos"<sup>113</sup>.

El manifiesto de los ocupantes acusaba a las autoridades destituidas de desconocer la voluntad mayoritaria de los gremios y de realizar todo tipo de maniobras para perpetuarse, apoyándose en pequeñas organizaciones y en un sector minoritario de los ferroviarios, llevando a cabo una acción disolvente en el seno de los sindicatos y tratando de preparar un Congreso adicto mediante las intrigas de los delegados en gira. Atacaba, finalmente, las actitudes políticas asumidas en nombre de la "prescindencia".

Los depuestos, por su parte, después de señalar el peligroso precedente que se introducía en las prácticas sindicales con el "asalto", atribuían la inspiración del mismo a la CSIG, con el objetivo inmediato de frustrar la reunión del Congreso Constituyente que sancionaría un estatuto contrario a sus intereses y, más globalmente, con la finalidad de apoderarse de la CGT.

La JE desalojada decidió expulsar a Cerutti y a los 9 miembros del CC que participaron en la asonada y convocar a los restantes, de los que sólo acudieron 22 que confirmaron lo actuado por la junta y eligieron secretario general a Tramonti.

Desde entonces habrá, pues, dos CGT. que se diferencian por el local en que fijaron su sede: una en el de la UF, Independencia 2880, y la otra en el de la FOET, Catamarca 577.

#### 4. El movimiento obrero en la década del 30 (II)

##### El ocaso del sindicalismo

Desde fines de 1935, ambas CGT iniciaron una campaña de intensa propaganda y furiosos ataques mutuos, centrados a veces en la honestidad de los respectivos dirigentes: si Independencia, por ejemplo, calificaba de "vividores" a Silvetti y a Cabona, éste bautizaba "garbanceros" a sus rivales; las denuncias sobre supuestas "avivadas" —que hoy nos parecen conmovedoramente insignificantes— no dejaban de multiplicarse. Se acusaba a Domenech, por ejemplo, de estar cobrando entre las remuneraciones que le pagaba la UF<sup>\*</sup> la compensación por desgaste de herramienta que cobraría si siguiera trabajando en los talleres cuando, según los "catamarqueños", las únicas herramientas que gastaba en su nuevo cargo eran las uñas y la lengua.

Tres meses después, la CGT-Catamarca informaba haber elevado la circulación de su periódico a 25.000 ejemplares, difundido su manifiesto a través de 50.000 folletos y 30.000 carteles, y haber enviado delegados en gira a toda la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán. El balance que trazaba era optimista: "La campaña escrita, como la oral —decía el informe de la JE—, ha reportado excelentes resultados, y si esta última se hubiese podido realizar con alguna anterioridad, las pocas seccionales ferroviarias y sindicatos del interior que aprobaron el asalto (...) a buen seguro en su mayor parte se hubieran manifestado contra el mismo. La labor de esclarecimiento realizada por los delegados ha dado origen a que la mayoría de las organizaciones de las localidades en que ellos han intervenido se hayan pronunciado contra el asalto, ratificando así su adhesión a las autoridades legítimas de la central.

"Alrededor de 70 sindicatos se han pronunciado en ese sentido, contando entre los mismos las organizaciones de tipo regional. En cuanto a

\* Los dirigentes rentados tenían un salario equivalente al que cobraban cuando ejercían su oficio.

la UF, en torno a la cual gira toda esta cuestión —no sólo por el número de sus adherentes, sino porque sus dirigentes jugaron un papel espectacularísimo—, de las 114 seccionales que se han pronunciado, únicamente 34 lo han hecho a favor de los autores del asalto. Las 80 restantes —excepto 6 cuyas resoluciones son poco categóricas— lo han hecho contra el asalto.

"De las otras organizaciones confederadas, ya se ve por las cifras apuntadas que muy pocas adhirieron al grupo de asaltantes, no obstante la opinión favorable de algunas de las respectivas CA (...). En esta situación se encuentran la UT, LF y alguna otra. La organización cuyas seccionales se han pronunciado en buena parte de los asaltantes es la de los empleados de comercio, pero como no lo ignora el CC la significación numérica de la misma es de escasa importancia.

"En la situación de adherentes a la junta 'de facto' compuesta por los asaltantes de la CSIG y coautores del asalto se encuentran, por resolución de asamblea, la LOEM, la UOT, el SOIC y la Federación Obrera del Vestido (FOV), todos de la capital federal, y algunos otros de menor importancia. La situación de la ATE es de indecisión\*.

"Después de los sucesos del 12 de diciembre adhirieron también a la junta 'de facto' por razones de afinidad moral y política, la FGB, desplazada de nuestras filas por las causas conocidas; la Unión de Cortadores de Confección, que no hubiese tenido cabida en nuestra central por ser la creación de Cipriano Barreiro, expulsado de la ex COA por traidor, y algunas otras. Por las causas dichas, otras organizaciones hasta ahora independientes preparan en estos momentos su ingreso al grupo de asaltantes" 114.

El Congreso Constituyente reunido por la CGT-Independencia el 30 de marzo de 1936 sólo contaría con la asistencia de 25 organizaciones y estaría totalmente dominado por los "asaltantes". Después de elegir presidente a Domenech y vice a Pérez Leirós, aprobaría unos estatutos depurados de sus artículos anti-políticos y nombraría a Domenech secretario general.

"Producto del asalto y de la campaña de calumnia y mentiras empeñosamente sostenida en las columnas del periódico confederal, en la prensa de los partidos complicados en esta política de sometimiento de la central obrera a sus designios y en el diarismo chantajista con ribetes izquierdistas —comentaría más adelante un folleto anónimo pero cuya procedencia no es difícil adivinar— fue el congreso de la CGT, que abrogó del estatuto las cláusulas que, por dar a la central expresión de un

\* En el Consejo Directivo de ATE se había producido un empate entre los que aprobaban y los que condenaban el "golpe", de modo que después de declarar que el cuerpo no había tenido conocimiento previo del mismo y que los dos miembros que habían participado en él lo hicieron a título personal, resolvió mantenerse al margen de las dos centrales hasta que se aclarara la situación. Más tarde se produjo una escisión entre la seccional Buenos Aires, controlada por los sindicalistas y el resto, que se incorporó a la CGT-Independencia.

movimiento sindical autónomo, habían suscitado sañudo encono en las facciones sectarias.

"En una atmósfera de renunciamiento vergonzoso a las más elementales nociones de la dignidad humana, los autores del asalto, con José Domenech a la cabeza, obtuvieron de los delegados, especialmente de los ferroviarios, representantes de la mayoría de los confederados, que votasen un estatuto que era, precisamente, la negación del que había aprobado en su asamblea general la UF, realizada en mayo de 1935, como lo demuestran sus propias actas.

"Por el estatuto aprobado en el congreso confederal después del asalto, los partidos políticos y sus agentes electorales adquirirían carta de ciudadanía para ejercer el contralor de la organización obrera, pretensión que había sido denegada expresamente en el propiciado por el comité 'depuerto'. Los diputados, senadores y concejales socialistas, generosamente estipendiados por el Estado, tendrían en adelante abiertas las puertas de la central para, no obstante su desvinculación del trabajo asalariado, desempeñar en ella cargos directivos.

"La CGT, que hasta el 12 de diciembre de 1935 venía actuando sin tutorías de ningún género, y que se orientaba por sí misma, tendría en adelante asesores en los partidos políticos, uno de los cuales, el senador socialista Dr. Mario Bravo, ocuparía un puesto destacado, y el otro, el diputado F. Pérez Leirós, sería miembro de la CA pese a que desde largos años dejó de ser 'obrero en el ejercicio de su profesión'" 115.

La amargura que trasuntan estos párrafos indica claramente que las expectativas optimistas de los primeros tiempos no se habían concretado. En realidad, como había dicho Tramonti a los pocos días del "asalto", "el pleito no es de la CGT sino por reflejo. Se resolverá allí donde tuvo su origen: en la UF" (CGT, 20-12-1935). La lucha por el control de esa organización fue, entonces, el principal objetivo de las dos facciones en que se había dividido el movimiento obrero.

Previendo las perturbaciones que esa lucha podría producir en los servicios ferroviarios y siguiendo la creciente tendencia del Estado a intervenir en los asuntos sindicales, el ex presidente del DNT y entonces secretario de la presidencia, Eduardo J. Bullrich, citó a Domenech y Tramonti para tratar de reconciliarlos. Su principal argumento fue que si la UF se dividiera encontraría dificultades insalvables para gestionar ante el gobierno la solución de los problemas gremiales. Pero a pesar de esta amenaza, las tentativas fracasaron.

El 30 de enero de 1936 la CD resolvió expulsar a Tramonti junto con otros doce socios (tres de ellos miembros de la CD) por desacato, con motivo de las notas que habían firmado sobre la sustitución de los miembros del CC y sobre el "asalto". Pocos días después, el 5 de febrero, se producía un serio incidente frente al local sindical. Según esa versión, unos 150 sujetos encabezados por Tramonti habían intentado apoderarse del local, contando con la pasividad cómplice de la policía, y habían sido rechazados por sus legítimos ocupantes. Según la otra, una manifestación de 1.000 ferroviarios que expresaba su solidaridad con los expulsados y que pedía la renuncia de Domenech fue atacada a balazos

desde el interior del edificio, dejando un saldo de varios heridos. **CGT-Catamarca** publicaba en los días siguientes fotos de la policía custodiando el local ferroviario, denunciando que por primera vez en la historia del movimiento obrero argentino un grupo de dirigentes sindicales debía recurrir a la policía para que lo protegiera de sus representados.

No sería ésa, sin embargo, la única innovación en las prácticas sindicales producida durante el pleito: al mes siguiente, los expulsados pidieron la intervención de la Inspección General de Justicia, alegando que a varios de ellos se les había sancionado para que no pudieran participar en las elecciones (eran candidatos a la Asamblea), y denunciando otras violaciones al estatuto. La inspección resolvió que las expulsiones fueran suspendidas hasta que se reuniera la Asamblea y nombró inspectores para fiscalizar las elecciones, pero ninguna de ambas partes quedó conforme: la CD se negó a reincorporar a los expulsados y éstos pidieron una intervención más amplia, que incluyera la suspensión de la CD y la conducción del proceso electoral por parte de su interventor. El asunto pasó entonces a la justicia civil: el juez ordenó que se hicieran efectivas las reincorporaciones dispuestas por la Inspección y nombró un interventor para que convocara y fiscalizara las elecciones.

Era la primera vez que un organismo del Estado intervenía en los asuntos internos de una entidad gremial, y lo hacía a pedido de una parte de sus miembros. Casi todos los sindicatos —menos, obviamente, los que aún dirigían los **sindicalistas**— protestaron airadamente contra esta intervención, considerándola como una amenaza contra la autonomía del movimiento obrero. Socialistas y comunistas vieron además en la medida un avance del proceso de "fascistización". A través de múltiples actos públicos se llevó a cabo una intensa campaña contra la intervención y el grupo de Tramonti —y, por extensión, los **sindicalistas**— perdieron buena parte del prestigio que les quedaba a raíz de esta desgraciada apelación.

Mientras tanto, sin embargo, 55 seccionales se habían pronunciado en contra de las expulsiones y el Congreso Extraordinario reunido en mayo se mostraba profundamente dividido. En medio de innumerables impugnaciones y mutuas acusaciones de manipulación electoral, no pudo llegar a constituirse y la relativa paridad de fuerzas parecía llevar a una escisión. Ambas facciones acordaron entonces, con la mediación del asesor letrado de la organización, Juan Atilio Bramuglia, iniciar negociaciones. Como resultado de las mismas, la CD resolvió dejar sin efecto las expulsiones y someter el asunto al Congreso, mientras los expulsados retiraban su presentación a la justicia y pedían el levantamiento de la intervención.

El Congreso, constituido finalmente el 1º de agosto, avaló el acuerdo mediante una serie de resoluciones contradictorias: dejaba sin efecto las expulsiones pero aprobaba la interpretación del estatuto hecha por la CD en esa circunstancia; señalaba que "el procedimiento utilizado el 12 de diciembre de 1935 contraría normas elementales de democracia obrera" pero mantenía la adhesión a la CGT-Independencia. "No conocemos nada más contradictorio en materia de resoluciones —comentaba **CGT-Catamarca** el 14-8-1936—. Los que piensen que con semejante acuerdo

queda zanjado el conflicto suscitado en la UF, se equivocan profundamente (...) Después del acuerdo el gremio ha quedado virtualmente tan dividido como lo estaba".

Efectivamente, la enconada lucha entre ambas fracciones no sólo continuaría sino que llevaría finalmente a la escisión: en 1938 los tramontistas se separaron, formando la Federación de Obreros y Empleados Ferroviarios (FOEF). Prontamente reconocida por el gobierno de Ortiz —cuya amistad con Tramonti no era ningún secreto— la nueva organización se lanzó a una desenfadada competencia con la UF para captar la adhesión de las bases. Como cada una trataba de mostrarse más combativa que su rival, multiplicando las medidas de fuerza, la situación amenazaba con anarquizar el tráfico ferroviario, de modo que el gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, inició las gestiones tendientes a la reunificación.

Esta se vio facilitada por el escaso éxito de la FOEF, que pese a sus denodados esfuerzos no logró nuclear —según sus propias cifras— a más de 20.000 afiliados. La UF por su parte, había visto descender sus efectivos de 72.000 a 57.000, y el gremio en su conjunto veía disminuir su capacidad de negociación frente a las empresas y el gobierno: las campañas emprendidas para lograr la anulación del laudo Justo, por ejemplo, habían fracasado. De modo que, bajo la presión del gobierno por un lado, y de las bases cansadas de enfrentamientos estériles por el otro, las dos facciones terminaron por llegar a un acuerdo y en 1940 se produjo la reunificación.

Mientras tanto, la decisión del Congreso de 1936 había decidido la suerte de las dos CGT: el peso de la UF, sumado al de los demás sindicatos principales (CGEC, LF, UT, UOEM) inclinaría decididamente la balanza a favor de Independencia y decidiría la elección de los que al principio vacilaron, como es el caso de ATE.

La CGT-Catamarca sólo conservaría la adhesión de la FOM (siempre fiel a su tradición **sindicalista**), la FOET (firmemente controlada por Gay), la FOMM (generalmente asociada con la FOM), la ATC (enemiga irreconciliable de la UOEM) y una serie de pequeños sindicatos de oficio: cartoneros, mimbreros, molineros, cocineros, etc. En el interior, sólo consiguió el apoyo de la Unión Provincial de Entre Ríos (muy vinculada con la FOM), el sindicato del frigorífico de Zárate, varias sociedades de estibadores y de oficios varios del litoral y de la Patagonia. Sobre tan escuálidas bases, convencidos ya de la imposibilidad de recuperar la CGT, los **sindicalistas** decidieron, en 1937 la resurrección de la USA, con 42 organizaciones y 32.000 cotizantes. La CGT, reforzada por la incorporación de los sindicatos controlados por los comunistas y de algunos autónomos, reunía en esos momentos más de 289.000 afiliados. Dos años después, en su primer Congreso, la USA sólo contaba con 33 organizaciones y menos de 27.000 cotizantes, que en 1941 se reducirían a 14.000. Abroquelada en la ortodoxia **sindicalista**, la USA pasaría a ser cada vez más —siguiendo el camino de la FORA— una reliquia del pasado.

Marginados, pues, del escenario que durante tanto tiempo habían dominado, los **sindicalistas** no volverían a jugar un papel relevante como tendencia. Sin embargo, la herencia que dejaban no era nada desdeña-

ble: sus constantes esfuerzos por mantener la independencia del movimiento sindical frente a los partidos políticos —que se había transformado, de hecho, en abierta hostilidad hacia socialistas y comunistas— había contribuido a que la inserción de éstos en el movimiento obrero sólo se lograra en forma tardía y superficial, y ello es uno de los factores que sin duda facilitarían la tarea al peronismo. Por otra parte, como veremos, muchas de sus actitudes características fueron retomadas por dirigentes de filiación o simpatías socialistas (es notable por ejemplo, la similitud de las críticas que en 1942-43 recibía el grupo de Domenech con las que ese mismo grupo había hecho en 1935 a la conducción **sindicalista**). Finalmente, la idea de una acción política basada exclusivamente en las organizaciones sindicales es la que encontraremos en 1945 en la base del Partido Laborista (PL), y no es casual que su presidente, Luis F. Gay, haya sido el último secretario general de la USA.

Por el momento, el hundimiento del **sindicalismo** parecía significar que los socialistas ya no tendrían rivales en su empeño por lograr el control del movimiento obrero. Sin embargo, su hegemonía pronto sería cuestionada por una nueva corriente de impetuoso desarrollo.

### El avance de los comunistas

“Yo recuerdo —dice el general José Epifanio Sosa Molina refiriéndose a la manifestación del 1º de Mayo de 1943— que fuimos comisionados muchos jefes y oficiales para apreciar **de visu** el valor de esa columna. Fue realmente imponente. Una multitud con banderas rojas al frente, con los puños en alto y cantando La Internacional presagiaban horas verdaderamente trágicas para la república. Las fuerzas armadas no podían permanecer indiferentes ante ese peligro”<sup>116</sup>.

Aunque se trataba probablemente de una pacífica manifestación socialista —ya que los comunistas no desfilaron ese día, sino que participaron en el acto de la CGT N° 2 en el Luna Park— es evidente que los jefes militares relacionaban esos símbolos con la amenazante expansión del comunismo. La alarma con que percibían ese avance, que hoy parece tan exagerada, no dejaba de reflejar una realidad: a diferencia del largo camino lentamente recorrido por los socialistas antes de llegar a ocupar una posición prominente en el movimiento sindical, el ascenso de los comunistas fue rápido y espectacular.

Hemos visto cómo habían aparecido ya militantes comunistas en el XIº Congreso de la FORA (1921), con suficiente representatividad como para que se les asignara cinco de los quince cargos del Consejo Federal, a los que renunciaron sin embargo al no aprobarse la adhesión a la Internacional Sindical Roja. Los renunciantes eran tipógrafos, metalúrgicos y tabaqueros, gremios en los que comenzaba a manifestarse una influencia que luego iría extendiéndose entre los petroleros, textiles, trabajadores de la madera, de la carne y de la construcción. En un nuevo referéndum sobre afiliación a Internacionales realizado en 1924, los que votaron por la Roja fueron más de 11.000 (es decir, más de un tercio de los efectivos de la USA en esos momentos)<sup>117</sup>.

En 1929, siguiendo las directivas de la Comintern, las organizaciones dirigidas por los comunistas y los militantes de esa tendencia en otros gremios constituyeron un organismo propio, el Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC). “Poco a poco —dice un historiador comunista del movimiento obrero— este Comité fue adquiriendo el carácter de otra central, pues se argumentó que ‘los comunistas no podían ya trabajar dentro de los sindicatos reformistas’ ”<sup>118</sup>. No participaron, entonces, en las gestiones que llevaron a la constitución de la CGT, por considerarlas como un acuerdo entre dirigentes, sin participación de las bases, y se dedicaron, en cambio, a promover comités de fábrica independientes de los sindicatos.

Durante los años siguientes —pese a ser el blanco predilecto de la represión a través de la famosa Sección Especial de la policía— los comunistas lograron organizar importantes sindicatos por industria, reuniendo a las organizaciones de oficio, y conducirán las huelgas más importantes del período. Su combatividad los llevará a atraer a los sectores más explotados y sumergidos de la clase obrera, pero su propia pujanza, vista como avasalladora por sus rivales, despertará también fuertes resistencias contra ellos en el conjunto del movimiento obrero.

Ya en 1931 habían organizado una Unión Gremial de Obreros Petroleros en Comodoro Rivadavia, que al año siguiente (en el momento más agudo de la desocupación) lanzó una huelga por la reincorporación de seis obreros despedidos. Una extraordinaria movilización de marineros, socavos y policías fue necesaria para apaciar el movimiento, con un saldo de centenares de presos y deportados. También fue violentamente reprimida la huelga llevada a cabo en los frigoríficos de Avellaneda por la recientemente creada Federación Obrera de la Industria de la Carne (FOIC), dirigida por José Peter y sobre la que en 1937 se formaría la Federación Obrera de la Alimentación (FOA).

Pese a la desfavorable situación económica, a la represión y a la modestia de los contingentes que podía movilizar, el CUSC declaró en 1932 y 1933 dos huelgas generales en Buenos Aires: la primera, junto con la FORA, en protesta contra un ataque a un acto de la Federación Obrera local, y la segunda contra la llegada de dos naves alemanas, en repudio al hitlerismo.

Los primeros éxitos en la conducción de las luchas reivindicativas los obtendrán los comunistas con los obreros de la madera. Los sindicatos de ebanistas, tallistas, doradores y tapiceros se habían unificado poco antes en un Sindicato Obrero de la Industria del Mueble. Uno de sus organizadores recuerda las resistencias que encontraban: “Los sectores estábamos divididos. En los escultores de madera estaban anarquistas partidarios del sindicato por industria, socialistas partidarios del sindicato por industria, y anarquistas y socialistas contrarios, que querían su viejo sindicato. Decían que aquí no estaba todavía maduro para eso, que eso era una copia servil de lo que pasaba en Europa, que allá había habido una concentración ya, y eso lo determinaba la concentración en los grandes establecimientos, en las grandes fábricas, y que aquí ese proceso no se había dado todavía, entonces que era prematuro hacerlo”<sup>119</sup>.

El sindicato por industria, sin embargo, tuvo bastante éxito, y en 1930 una escisión dirigida por los comunistas llevó a la formación del Sindicato Único (o Unitario) de Obreros en Madera (SUOM), que cuatro años después impulsó una importante huelga de 46 días por aumentos de salarios y semana de 44 horas. Al año siguiente, con otra huelga, el gremio fue uno de los primeros en conquistar la semana de 40 horas, pese a que los dirigentes del sindicato fueron procesados por asociación ilícita. Estos triunfos, los primeros obtenidos por los obreros desde 1930, rodearon al sindicato y a sus dirigentes de un gran prestigio y permitieron la reunificación del gremio bajo la conducción comunista.

Más importante todavía sería el éxito de los comunistas en el gremio de la construcción. Este, uno de los más numerosos, estaba también dividido en múltiples sindicatos de oficio (albañiles, pintores, yeseros, marmolistas, parquetistas, carpinteros, aserradores, escultores, modeladores, etc.) dirigidos, en su mayor parte, por anarquistas. Varios intentos de unirlos habían fracasado, y la derrota de la huelga de albañiles de 1929 había desprestigiado a la conducción anarquista. Un núcleo comunista dirigido por Guido Fioravanti comenzó entonces a adquirir predicamento en el gremio, y tres de ellos entraron en la CA, pero pronto fueron expulsados y eso originó la escisión. Después de intensos trabajos de propaganda en obras y empresas, los comunistas formaron, en 1935, el Sindicato de Obreros Albañiles, del Cemento Armado y Anexos. Este proclamó en octubre de ese año una huelga que duraría 96 días y en la que llegaron a participar 60.000 trabajadores.

Se formaron comisiones barriales, que organizaron comedores y realizaron colectas para proveer de víveres a los huelguistas, así como un Comité de Defensa y Solidaridad que nucleó a 68 sindicatos de la capital y sus alrededores. Masivas asambleas en el Luna Park, marchas y petitorios, culminaron a principios de 1936 con una huelga general de solidaridad que, pese a no haber sido formalmente declarada por ninguna de las dos CGT, fue prácticamente la única que tuvo un cumplimiento efectivo en toda la década. Ese día se celebró también un mitín en Plaza Once que terminó con muertos, heridos y centenares de presos: la policía informó sobre 580 detenciones, pero **La Vanguardia** calculaba 2.000 (9-1-1936). En los días siguientes continuaron las medidas represivas (clausura de locales sindicales y comedores, prohibición de asambleas y mitines, etc.), pero nada pudo evitar el triunfo del movimiento, calificado por **La Vanguardia** —pese a la escasa simpatía que sentía por sus conductores— como "la más grande e impresionante de las huelgas habidas en nuestro país en estos últimos tiempos" (24-1-1936).

En la cúspide de su prestigio, los dirigentes comunistas (junto a Fioravanti estaban también Pedro Chiaranti, Rubens Iscaro y otros) convocaron una Conferencia Nacional del Gremio de la Construcción, que resolvió la creación de la Federación Obrera Nacional de la Construcción. Con más de 58.000 afiliados (de los cuales unos 40.000 cotizaban regularmente), ésta se convirtió en la segunda organización del país, sólo superada en número de adherentes por la UF<sup>120</sup>.

Durante 1936 y 1937 estallaron varias huelgas parciales en las actividades complementarias de la construcción, que culminaron con la firma

de convenios. Pero una nueva huelga general, en 1937, fue violentamente reprimida, con la clausura de locales y la detención de numerosos dirigentes. Cinco de ellos —incluido G. Fioravanti— fueron deportados a la Italia fascista pese a las protestas del gremio, que no obtuvo el apoyo de la CGT para declarar una huelga general.

La combatividad de la FONC hizo, además, que fuera discriminada por los organismos oficiales. Desde 1941, por ejemplo, el DNT se negó a mantener relaciones con sus dirigentes, lo mismo que con los de la UOT, alegando que todos ellos eran "comunistas proutrariados que, lejos de tener una actuación sindical normal, en beneficio de la clase trabajadora, se hallan encauzados en una corriente política anarquizante, tratando en toda forma de desviar al movimiento sindical para hacerlo servir a su ideología política"<sup>121</sup>.

Aparte de estas organizaciones, los comunistas habían formado también la Federación Obrera de la Industria Textil, rival de la UOT controlada por los socialistas. En 1936 se fusionaron y dos años después los comunistas dominaron la UOT. Pese a que en 1941 los socialistas se escindieron, el sindicato, dirigido por Jorge Michellón, contaba en ese año con unos 10.000 cotizantes. La FOA tenía más de 19.000, y el Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIM), también organizado por los comunistas, unos 4.000.

En 1935, el 7º Congreso de la Comintern lanzó la consigna del frente popular, prontamente adoptada por el 3º Congreso del PC argentino. Consecuentemente, en el ámbito gremial se disolvió la CUSC y los sindicatos controlados por los comunistas iniciaron las gestiones para ingresar en la CGT. Estas no fueron recibidas, por cierto, con ningún entusiasmo por parte de la tambaleante dirección sindicalista. Durante cinco años el intercambio de diatribas había sido feroz, y la idea de poder convivir ahora con los "aventureros divisionistas" que no habían dejado de difamarlos hasta la víspera, era vista con bastante escepticismo.

La CGT, entonces, aunque alegrándose de la tendencia a la unidad que aparecía "en ciertos medios hasta ahora hostiles", declaró que "no en todos los casos esa tendencia a refundirse en el seno de la CGT responde a una inspiración esencialmente obrera; intereses políticos perturbadores de la armonía de que tanto ha menester nuestra central se agitan en el fondo de las manifestaciones favorables a la unidad". Fijaba, entonces una serie de condiciones para la admisión de nuevos miembros, entre las cuales figuraban el respeto por la independencia del movimiento obrero; "que no aceptará ni tolerará ninguna consigna que emane de grupos externos"; el acatamiento de las decisiones de la mayoría y a los procedimientos orgánicos; la renuncia al uso de la calumnia y la difamación, etc. Finalmente, el CC se reservaba el derecho de admisión (CGT, 1-5-1935).

Este virtual rechazo sirvió entonces a los dirigentes comunistas para justificar su cambio de línea sin referirse a las nuevas directivas de la Comintern: su aislamiento anterior era explicado, sin mayores precisiones cronológicas, por el hecho de que la conducción "pro-fascista, oficialista, frenadora y burocrática" de la CGT había impedido su ingreso. Pero tampoco las nuevas autoridades surgidas del "asalto" recibirían con

los brazos abiertos a los comunistas: los socialistas que predominaban entre ellas no habían recibido una cuota menor de injurias y de ataques que los sindicalistas, ni tenían menos que aquéllos a los manejos de sus flamantes aliados. De ahí que el Congreso de 1936 impusiera el requisito de tener un año de antigüedad en la central para poder votar y ser elegido para los cuerpos directivos —requisito bastante ilógico en un congreso “Constituyente”—, y que los delegados comunistas participaran entonces en él como “fraternales”, con voz pero sin voto.

Recién en el 1er Congreso ordinario (1939) los comunistas participaron con plenos derechos, obteniendo 17 de los 45 cargos en el CCC y uno en la CA. Hasta entonces, su convivencia con los socialistas no había provocado mayores problemas, pero las posiciones divergentes frente a la guerra serían el inicio de nuevos enfrentamientos que terminarían por llevar a la central a una nueva escisión.

### Socialistas y comunistas: una difícil convivencia

Durante los primeros años que siguieron a la incorporación de los comunistas a la CGT, su convivencia con la mayoría socialista no parecía imposible. Habiendo moderado sus consignas para ponerlas a tono con la nueva estrategia del frente popular, el énfasis puesto en la unidad hacía pasar a segundo plano las diferencias menores. Así, por ejemplo, los comunistas terminaron por aceptar la adhesión de la CGT a la Federación Sindical Internacional de Amsterdam, a la que siempre se habían opuesto. Al discutirse el asunto, incluso, el delegado de los albañiles “comienza diciendo que, cualquiera sea la resolución del Congreso, seguirán en la CGT” (LV, 3-4-1936), actitud que contrasta netamente con la intransigencia demostrada en ocasiones anteriores.

La campaña antifascista y, especialmente, la intensa repercusión popular de la guerra de España, ofrecían un amplio campo de coincidencias para socialistas y comunistas: colectas y actos de apoyo a la república española fueron el principal eje de movilización y acción conjunta.

El acto del 1º de Mayo de 1936, celebrado en forma conjunta por la CGT, el PS, el PC, la UCR y el Partido Demócrata Progresista (PDP), parecía iniciar una nueva era que sacaría al movimiento obrero de su tradicional aislamiento. Las consignas de ese acto, por otra parte, superaban ampliamente el marco de las reivindicaciones gremiales: si no dejaban de incluir la defensa de la ley 11.729, la derogación de la ley de residencia, el respeto por las libertades sindicales, la lucha contra la desocupación y por la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora, también planteaban numerosas cuestiones de política general: afirmación de las libertades democráticas; defensa de la ley Sáenz Peña y condena del fraude y la violencia; repudio de las dictaduras, de la oligarquía y el fascismo; amnistía para los presos políticos y sociales; reconocimiento legal de los partidos democráticos; control del capital financiero internacional y lucha contra su política imperialista; oposición a todo monopolio privado y en especial al monopolio del transporte (LV, 23-4-1936).

Pero ese hecho no se repetiría: en 1937 no hubo celebración conjunta y al año siguiente sólo compartieron la tribuna la CGT, el PS y el PC. Finalmente, el estallido de la segunda guerra mundial pondría fin a las coincidencias entre socialistas y comunistas, reemplazándolas por ásperos enfrentamientos.

El 1er Congreso ordinario de la CGT realizado antes del comienzo de la guerra, había sido unánime en condenar al nazi-fascismo. Considerando que los regímenes totalitarios anulan las libertades sindicales y los derechos individuales, fomentan el odio racial y las persecuciones, constituyen una amenaza para la democracia y un peligro para la paz mundial, su resolución reafirmaba la adhesión de la clase obrera a las instituciones democráticas y su propósito de defenderlas, luchando por las libertades públicas, la autodeterminación de los pueblos, la paz y la concordia en el mundo. Repudiaba los intentos expansionistas, instaba a la reducción de los armamentos y a borrar los odios raciales y nacionales. Finalmente, se comprometía “en el caso de amenaza o conflicto con los países totalitarios, (a) cooperar esforzadamente y sin limitación alguna por el triunfo de las ideas de paz, de democracia y de justicia social”<sup>122</sup>.

Consecuentemente, en la reunión del CCC de mayo de 1940, la mayoría de la CA propuso una declaración que resolvía “repudiar enérgicamente el desenfreno en que se ha lanzado la expansión totalitaria; condenar la invasión violenta a los países neutrales, contraria a los más elementales principios de la civilización; manifestar su decisión de luchar contra los métodos bárbaros en auge, para asegurar las normas que necesitan los pueblos de América y del mundo para convivir en la paz, en el trabajo y la dignificación humana, en su ascensión permanente hacia una vida mejor”<sup>123</sup>.

Pero mientras tanto se había firmado el pacto germano-soviético y los comunistas sostenían la más estricta neutralidad ante la contienda “inter-imperialista”. Por lo tanto, Pedro Chiaranti, el miembro comunista de la CA, “expresa que es el único miembro de la CA que discrepa fundamentalmente con el proyecto de declaración que se ha leído. Refiere que en el seno de dicho cuerpo hizo la salvedad de que esa declaración era unilateral, desde el momento que excluía la consideración del asunto desde el punto de vista de una guerra entablada entre dos bandos imperialistas que hacían alarde de lo que podría definirse, como alguien ya lo hizo, de brutalidad por una parte y de hipocresía por la otra. Sostiene que tanto Alemania como Francia e Inglaterra son responsables de lo que ocurre y que no es posible, entonces, asumir una actitud que no condene enérgicamente la guerra por su carácter imperialista y a la vez abogue en favor de la más estricta neutralidad del país (...) Entiende que por el documento elaborado por la CA se condenaría a una potencia imperialista y se omitiría toda referencia acerca de las otras, siendo que entre ellas no hay diferencia en cuanto al fin que persiguen en el sentido de establecer su predominio absoluto sobre el mundo”<sup>124</sup>.

Aunque la propuesta de la mayoría fue aprobada (sólo votaron en contra los 17 comunistas), éstos llevaron su posición al seno de los

sindicatos y las organizaciones que controlaban se pronunciaron por la neutralidad. En los actos del 19 de Mayo de 1940 se produjeron enfrentamientos entre ambas líneas, y en los actos antifascistas realizados por la CGT en el Luna Park en 1940 y 1941, Domenech fue silbado y abucheado por los comunistas.

El órgano del PC, **Orientación**, y el diario **La Hora** llevaban a cabo una ardiente campaña contra los "belicistas" y "lacayos del imperialismo" que dirigían la CGT. Lo mismo hacían los periódicos de los sindicatos comunistas. Por ejemplo, **El Obrero de la Construcción** decía el 1-6-1940: "Es traición a la causa del proletariado incitarlo a defender la causa de la 'democracia' practicada por los gobiernos del imperialismo aliado (...) Con un juego sangriento de palabras se nos quiere confundir. Nazismo, totalitarismo, quintas columnas etc., son las cortinas de humo lanzadas por los sirvientes del imperialismo guerrero. Para nosotros, trabajadores, han desaparecido los viejos calificativos. Las fuerzas en lucha que hoy actúan son guerrerristas y anti-guerreras; sirvientes del capitalismo y anti-capitalistas; mucamos de la burguesía y hombres de trabajo que quieren la paz y la felicidad de los pueblos. El que está por la guerra —no importa de qué bando— está contra los intereses económicos y morales de la clase trabajadora" <sup>125</sup>.

Pero la situación cambió bruscamente el 22 de junio de 1941, cuando se produjo la invasión nazi a la URSS, hecho que para el PC cambiaba radicalmente el carácter de la guerra. "En ningún momento de su historia —decía el mismo Chiaranti en octubre de 1942— ha tenido la clase trabajadora definida en forma tan concreta y precisa su tarea fundamental como en estos momentos en que libramos una lucha a muerte por la libertad y la democracia, como desde el 22 de junio de 1941. Esta es la guerra de los pueblos. Lo ha dicho la Unión Soviética el mismo día en que fuera atacada por las hordas hitleristas. Lo dijo Roosevelt y lo dijo Churchill. Lo han dicho México y Brasil al sumarse al núcleo de las Naciones Unidas que luchan contra el nazismo. Nosotros, aquí reunidos, representamos al sector más consciente y respetable del pueblo argentino, su clase obrera sindicalmente organizada. Veamos, entonces, qué posición ha correspondido a nuestra central obrera en el cumplimiento de un deber ineludible, de una obligación imperiosa, como es la de contribuir en la forma más efectiva posible al triunfo de la causa de la libertad y a la victoria de las Naciones Unidas" <sup>126</sup>. Esas palabras, como no es difícil adivinar, fueron la introducción a una feroz diatriba contra la CA ¡por no haber desplegado mayor energía en su campaña de apoyo a las "democracias"!

Este giro parecía, pues, eliminar la principal de las causas de discordia, pero no era la única. El secretariado y la CA eran también objeto de otras críticas, curiosamente similares a las que había recibido el grupo desplazado en 1935: "Se ha pretendido someter a la clase obrera sindicalmente organizada, con métodos y disposiciones que no siempre han encuadrado dentro de las normas sindicales, a un 'neutralismo político', a un aislamiento suicida, a una despreocupación por los problemas políticos, a una inercia y a un desentendimiento que sólo beneficia a la oligarquía pro-nazi y a la quinta columna hitlerista" <sup>127</sup>.

Más directamente, Arnedo Alvarez había dicho en el congreso del PC (noviembre de 1941) que "ciertos dirigentes de la CGT se preocupan de introducir de modo subrepticio las 'sugestiones' del Poder Ejecutivo" y que "algunos de ellos se dejan halagar por ciertos ministros del Poder Ejecutivo que les hacen promesas de favores personales a condición de que se comprometan a exigir de las organizaciones obreras que acepten sin protestar las arbitrariedades policiales y gubernamentales contra el movimiento obrero popular" <sup>128</sup>.

Ante esta campaña, y ante la incertidumbre de contar con una mayoría segura —ya que, como veremos, muchos dirigentes socialistas se sumaron a la oposición comunista— la conducción cegetista optó por una salida que tampoco era novedosa: desde mayo de 1940 no volvió a convocar al CCC —que estatutariamente debía reunirse cada cuatro meses— durante más de dos años, ni convocó tampoco al congreso ordinario. Pensando quizá que el cambio de actitud comunista ante la guerra podía atenuar los enfrentamientos, o no pudiendo simplemente demorarlos por más tiempo, el CCC fue finalmente convocado para el 13 de octubre de 1942 y se convirtió, como era previsible, en un campo de batalla.

La primera cuestión que se planteó fue la situación de Andrés Roca, autor del mencionado artículo de **El Obrero de la Construcción**, al que la CA había suspendido como miembro del CCC por los ataques contenidos en el mismo. Después de un largo debate que duró todo el día, el CCC avaló la decisión.

Luego se discutió la situación de la FGB, que no pagaba sus cotizaciones desde hacía tres años porque cuestionaba el monto de la cuota. La mayoría de la CA propuso suspenderla en sus derechos estatutarios hasta que se pusiera al día, mientras que el grupo opositor sostenía que se le debía dar plazo hasta la reunión del Congreso, manteniendo mientras tanto sus derechos. Una primera votación resultó empatada, lo que demuestra la paridad de fuerzas de ambos bandos y la importancia que en esas condiciones adquiría la cuestión: los votos de la FGB, hostiles al grupo dirigente, podrían decidir las futuras votaciones. Dispuesto a forzar la situación Domenech, anunció que renunciaría si el CCC aprobaba una resolución que violaba los estatutos y que sentaría un mal precedente. La amenaza surtió un efecto precisamente inverso al que se proponía: varios delegados que se habían abstenido en la primera votación se volcaron hacia la propuesta opositora, que obtuvo así una ajustada mayoría. Domenech renunció y casi simultáneamente la UF amenazó con dejar de pagar sus cotizaciones.

Aunque el grupo comunista no perdió la oportunidad de votar por la aceptación de la renuncia, la mayoría la rechazó y se envió una comisión a Domenech para que la reconsiderara. Este se negó a hacerlo si el CCC no reveía su decisión, pero una nueva votación la ratificó y casi todos los delegados ferroviarios se retiraron de la reunión.

Habiendo llegado así al borde de la división, la FGB pagó finalmente las cuotas adeudadas y Domenech reasumió su cargo, no sin ser objeto de fuertes críticas por toda su actitud: un delegado comunista expresó claramente que hubiera preferido que Domenech mantu-

viera su renuncia, a lo que un delegado de LF respondió que eso era precisamente lo que se había buscado. El asunto, que había absorbido siete sesiones distribuidas a lo largo de diez días, mostraba la profundidad del enfrentamiento.

Al iniciarse finalmente el tratamiento del primer punto del orden del día, Chiaranti leyó un largo documento en que expresaba su desacuerdo con la orientación de la CA. Además de atacar, como hemos visto, su actitud ante la guerra (ejemplificada en el languidecimiento de la campaña de ayuda a los pueblos en lucha contra el nazifascismo) y su política de aislamiento (rechazo de proposiciones de la USA y el PS para llevar a cabo una acción común por las libertades democráticas; del PS para hacer un acto conjunto el 1º de Mayo, etc.), criticaba fundamentalmente su inacción frente a las restricciones de las libertades sindicales y los derechos democráticos (por ejemplo, ante el estado de sitio), atribuyéndolo a una actitud pro-gubernamental.

Por otra parte, señalaba las violaciones de los procedimientos estatutarios que implicaban la no convocatoria del CCC ni del Congreso dentro de los plazos establecidos, el incumplimiento de resoluciones del Congreso del 39 y de la reunión del CCC del 40, interpretaciones unilaterales de la disciplina, etc. Todo esto constituiría una distorsión de la democracia sindical, a raíz de lo cual recordaba la experiencia del 12 de diciembre de 1935, lamentando que no hubiera sido debidamente aprovechada.

La respuesta estuvo a cargo del secretario adjunto, Camilo Almarza, quien además de tratar de desmentir esos cargos puso el acento sobre la actitud divisionista de los delegados comunistas y sobre la constante campaña de desprestigio contra las autoridades de la CGT que venía desarrollando esa fuerza desde 1939.

Aunque finalmente aprobado en general, el largo y apasionado debate que suscitó el Informe de la CA (ocho sesiones) se transformó en realidad en un pretexto para la elucidación de las posiciones que dividían a la central, máxime cuando en las primeras sesiones se había resuelto tomar nota taquigráfica de las exposiciones, imprimir las actas y distribuir las entre las organizaciones sindicales. Se trataba, por parte de los comunistas, de preparar el terreno para el desplazamiento del grupo dominante. Este, por su parte, se defendía sobre todo atacando a los comunistas, señalando su actitud agresiva y divisionista, su actuación conforme a consignas externas y su inconsecuencia. Un tercer grupo, que aparecía en posiciones más ambiguas y conciliadoras, lo constituía el encabezado por Pérez Leirós y Borlenghi. La alianza de este último grupo con los comunistas precipitaría finalmente la división.

#### 1943: La CGT dividida

Durante la reunión del CCC había surgido nítidamente la perspectiva de la división. "Afirmo categóricamente —dijo, por ejemplo, Domenech— que después de esta reunión del CCC, dados los puntos de vista que se han emitido, si pensamos que puede haber unidad en la clase

trabajadora estamos en un error, pues yo creo que vamos directamente a una división de hecho, ya que espiritualmente hace rato que existe", añadiendo que "mi visión no es individual, sino que lo veo como intérprete fiel de mi gremio"<sup>120</sup>.

Domenech acusaba a los comunistas de pretender imponer su predominio sobre la CGT: "Hasta aquí lo que vislumbro es lo siguiente: puede haber paz si nos sometemos todos al PC; pero si deseamos que triunfe ese pacto de caballeros (se refiere al Estatuto) no hay paz. Yo prefiero quedarme sin paz a ese precio"<sup>130</sup>. Desechaba, por otra parte, la posibilidad de una central dominada por los comunistas: "¿Piensan los compañeros que podrán tener una central comunista en el país?", no, "porque tropezarán con la oposición cerrada de todos los elementos que en el país debemos convivir y que son en su inmensa mayoría no comunistas y hasta anti-comunistas"<sup>131</sup>. Y finalmente, deslizaba una intencionada alusión, demostrando que estaba al tanto de lo que se tramaba: "Iscaro dijo, más o menos, que el secretario general no es el que interpreta a la CGT y que en cambio el compañero Pérez Leirós es el que interpreta el momento actual de la clase trabajadora"<sup>132</sup>. Cosa que, por cierto, Iscaro no había dicho —sus palabras fueron: "Hubiera sido para mí una gran satisfacción que el compañero Domenech no estuviera sentado donde está y no fuera el secretario general de la CGT", a lo que el aludido contestó: "No lo dudo"<sup>133</sup>— pero que tampoco se ocupó de desmentir.

Que el objetivo de los comunistas era desplazar a Domenech, aparece claramente en la intervención de Fiori: "En estos momentos necesitamos una dirección ágil, que comprenda los problemas políticos, y a mi juicio la actual conducción no reúne esas cualidades (...) Para nosotros —me refiero a la FONC— no es posible prolongar una situación que tiene que desaparecer. Yo estaría completamente satisfecho, aunque sintiera que algunos compañeros se sintieran lesionados en su susceptibilidad, si la actual dirección de la CGT fuera cambiada"<sup>134</sup>. Y, sabiendo que no lograrían mayoría en el CCC, deslizaba esta velada amenaza: "No ha de prosperar nuestro íntimo deseo con respecto a la dirección de la CGT, pero iremos al próximo congreso"<sup>135</sup>.

En ese congreso, efectivamente, la coalición opositora tenía amplia mayoría. Conscientes de esa situación, Domenech y Almarza se abstuvieron de hablar en el acto inaugural (15 de diciembre de 1942), pretextando la prohibición policial de referirse a ciertos temas. Hablaron, en cambio, Chiaranti y Borlenghi.

Al examinarse las credenciales, fue observada la de Peter —sancionado por la CA a raíz de su participación en sendas asambleas regionales en Córdoba y Mendoza que habían sido desautorizadas por la central— pero finalmente el congreso la aprobó. Al elegirse presidente, Borlenghi obtuvo el voto de representantes de 117.713 cotizantes y Domenech sólo el de 60.069. Desairado, Domenech se retiró y no volvió a participar en las sesiones. Chiaranti fue elegido vicepresidente contra un delegado de LF.

Al discutirse la Memoria y Balance, Iscaro enjuició duramente a la conducción cegetista y Almarza respondió vivamente a sus críticas, mien-

tras Pérez Leirós exhortaba a buscar los puntos de coincidencia y a la tolerancia. La Memoria fue finalmente aprobada en general, pero varios de sus capítulos merecieron las censuras del congreso: la CA fue criticada por no haber convocado al CCC ni al congreso dentro de los plazos estatutarios, por no haber organizado la celebración del 1.º de Mayo en conjunto con los partidos democráticos, por no haber encarado con suficiente energía la campaña de ayuda a las democracias en guerra, y sus declaraciones sobre estado de sitio, procedimientos policiales, libertad sindical, etc., fueron calificadas como excesivamente débiles y complacientes.

Sin embargo, otros puntos discutidos, como los asuntos disciplinarios, la condena a *La Hora* por su campaña contra el secretariado, una condena a la intervención de personalidades ajenas al movimiento obrero en los conflictos laborales —alusión a la práctica de los comunistas que solían recurrir a legisladores, dignatarios eclesiásticos, etc.—, fueron resueltos en sentido favorable al grupo dirigente, de modo que el saldo del congreso no parecía tan neto.

Un empleado de comercio de Tucumán sacaba, por ejemplo, estas conclusiones: "Llegué a esta capital apoderado de aquellas incertidumbres a que me refiero más arriba, pues estaba informado de las profundas diferencias existentes entre sectores de trabajadores que intervenirían en las deliberaciones del congreso. Sin embargo, el feliz término del mismo justifica evidentemente de que esas dificultades de métodos y de procedimientos en nada entorpecería el normal desarrollo de las actividades de la CGT (...) Lo más importante que merece destacarse es que si en algunos hubo pretensiones de imponer puntos de vista o consignas determinadas, ellas han sido desechadas oportunamente (...) Por esta razón podemos decir que 'nadie copó' nada y nadie impuso intenciones ni preponderancias" (LV, 2-12-1942).

El diario socialista también suspiraba con alivio: "La reunión de los trabajadores —decía— ha sabido sortear, con seguro instinto, abismos tremendos, para llegar finalmente a encauzarse por las normas orgánicas permanentes del movimiento obrero. Podemos decir que desde un punto de vista general el 2º Congreso de la CGT deja un saldo favorable, tanto por la importancia de las cuestiones abordadas como por el período que debió juzgar y por la reafirmación de principios sindicales subvertidos u olvidados por algunos sectores gremiales" (LV, 26-12-1942).

Un dirigente de la tendencia de Domenech sacaba incluso conclusiones casi triunfalistas: "Iniciadas las primeras sesiones del congreso, inmediatamente se pusieron de manifiesto dos corrientes antagónicas: la una, comunicante, y la otra, que fue minoría para convertirse en mayoría en las últimas sesiones por su tesonera y persuasiva labor, que salvó al congreso del descrédito en que había empezado, para terminar haciendo obra importante". Sin embargo, no podía ignorar las sombras que se cernían sobre el futuro: "En lo que se refiere a la unidad de la clase obrera, si no deponen su actitud de predominio y alzamiento a toda norma orgánica los elementos comunistas, éstos la llevan a la división

y sobre ellos caerá la culpa de tan grave hecho" (Alfredo Fidanza, en LV 31-12-1942).

También *La Vanguardia* concluía prudentemente: "Podemos decir así que el congreso de la CGT ha cumplido la primera parte en esta trayectoria de reajuste. Una nueva etapa comienza con el nuevo CCC. Cuando ella se inicie veremos en qué grado fue asegurada la unidad de los trabajadores" (26-12-1942).

La reunión del CCC, el 10 de marzo de 1943, resultaría efectivamente fatídica para la unidad. Una extraña circunstancia desencadenaría la ruptura: la paridad de fuerzas era tal que uno solo de los 45 votos determinaría la victoria de una u otra facción.

Se presentaron dos listas para elegir los miembros del nuevo secretariado y la nueva CA: la Nº 1, encabezada por Domenech, y la Nº 2, por Pérez Leirós. Como en esos cuerpos debían estar representados, en forma aproximadamente proporcional a sus cotizantes, las principales organizaciones, la lista Nº 1 incluía algunos comunistas de la FONC y otros opositores de la FEC y ATE, mientras que la Nº 2 comprendía a muchos ferroviarios y tranviarios. Los ferroviarios se apresuraron a declarar que habían sido incluidos sin ser consultados y a pedir que se los eliminara de la lista: alarmada ante la paridad de fuerzas, la UF había comenzado a presionar a sus delegados para evitar deserciones. En una reunión con la CD no sólo se les había dado expresas instrucciones de votar por la lista Nº 1, sino que incluso habían tenido que firmar un compromiso en ese sentido. Las compulsas previas demostraban que, si no había deserciones, la Nº 1 se impondría por un voto.

Pero he aquí que durante la votación, cuando le llegó el turno al ferroviario Marcos D. Lestelle, ante el estupor de sus compañeros, votó por la lista Nº 2. Cuando lograron recuperarse de la sorpresa, uno de los ferroviarios pidió la palabra para proponer que se pasara a un cuarto intermedio. Sin siquiera ponerlo a votación, Domenech dio por aprobada la propuesta y se retiró con sus partidarios, en medio de las protestas del otro sector. Al reiniciarse la sesión, la UF informó que había resuelto suspender a Lestelle y reemplazarlo por Juan Rodríguez. El grupo opositor no atinó a detener la maniobra y la lista Nº 1 resultó así ganadora por un voto, en medio de un desorden total.

En sendos comunicados, ambos bandos se atribuían la victoria. El de la lista Nº 1 decía: "Al procederse a tomar la votación, se produjo una incidencia en virtud de que el miembro Marcos D. Lestelle, perteneciente a la UF, violó un compromiso contraído y firmado en el sentido de proceder de conformidad con las instrucciones emanadas o que emanen de aquella organización en cuanto traten de la conducta y de las normas de disciplina sindical que deben observar sus representantes en el seno de la CGT. A raíz de ello se pasó a un cuarto intermedio, en cuyo interin la UF comunicó el reemplazo del citado por el compañero Juan Rodríguez, que se incorporó seguidamente a la sesión, prosiguiendo las deliberaciones. Efectuada la votación, resultó triunfante la lista Nº 1 por 23 votos contra 22 que obtuvo la lista Nº 2" (LV, 11-3-1943).

Por su parte, el comunicado del grupo opositor sacaba estas conclusiones de los hechos: "Que se concedió la palabra y se pasó a cuarto in-

termedio mientras se desarrollaba la votación; que se pretendió anular un voto ya emitido y computar el de una persona aiena al cuerpo; que se pretendió expulsar a un miembro e incorporar a otro con el propósito evidente de modificar el resultado de la votación; que se levantó la sesión sin haberse agotado el orden del día. Todos estos atropellos al Estatuto fueron cometidos por el Sr. José Domenech por sí y ante sí, sin haber sometido ninguno de estos procedimientos a la votación del cuerpo. Es ante este hecho que el CCC declara que las autoridades electas por los 23 miembros que firman el presente comunicado son los siguientes..." (y transcribe la lista Nº 2) (LV, 11-3-1943).

Los cinco candidatos que figuraban en ambas listas (Argaña, Borlenghi, Chiaranti, Tadioli y Tesorieri), por su parte, declararon que en su concepto había triunfado la lista Nº 2.

Aparentemente, se repetía la discusión de 1935 sobre a quién representaban los miembros del CCC, con la diferencia de que ahora había un estatuto, cuyo artículo 17 establecía que "los miembros del CCC (...) representan (...) a todos los sindicatos confederados y, por tal razón, sólo están obligados a rendir cuentas de sus actos relacionados con el cargo que invisten al cuerpo del que forman parte o al congreso confederal".

Conscientes de la fragilidad de su posición, las autoridades de la UF buscaban justificarla con otros argumentos: "Sabido es que a la CGT los sindicatos dirigidos por comunistas llevaron la modalidad de que sus representantes tenían que votar cerradamente de acuerdo con las consignas que ellos impartían —explicaba la CD—; a quienes no se sometían a ese mandato lo reemplazaban sin ningún miramiento.

"Mientras tanto, los otros gremios seguían dando a sus representantes cierta libertad de acción, cosa que los comunistas aprovechaban para provocar defecciones que impedían a los sindicatos respectivos pesar en las votaciones de acuerdo con el verdadero número de miembros que por su importancia tenían.

"Para eso se valían de los hombres de su tendencia que habían logrado enquistar en esos cargos y que una vez electos se consideraban autorizados a proceder en consonancia con las consignas de su partido y en forma contraria al pensamiento imperante en la organización que los había elegido. Pero como esto no era suficiente, rodearon a hombres de otras tendencias, a quienes complicaron en su labor y los hicieron actuar en contra de la opinión de su propio sindicato. Con promesas y halagos fomentaron ambiciones que esperaban realizarse con el apoyo de los comunistas. Los compromisos quedaron bien evidenciados en el 2º Congreso ordinario de la CGT, donde 12 de los 37 delegados de la UF desovertaron la opinión general de su gremio y se adhirieron al plan que los comunistas habían trazado, permitiendo, con su inconducta que parte de éste se realizara" (LV, 11-3-1943).

Durante los días siguientes, mientras los sindicatos se iban pronunciando por una u otra conducción, se entabló una verdadera guerra de comunicados. La CA Nº 2 anunciaba que el sábado 20 tomaría posesión del local de la CGT y convocaba para esa fecha al CCC. Al no permitírsele la entrada, hicieron labrar un acta e iniciaron acciones legales.

"Lo sucedido el sábado —decía el comunicado de la Nº 1 firmado por Almarza— es una consecuencia de una vasta maniobra que, con propósito de entregar el movimiento obrero a la dirección del PC, culminó en la reunión que el 10 del actual realizó, para constituirse, el CCC" (LV, 25-3-1943), y advertía contra maniobras confusionistas.

Pérez Leirós, por su parte, denunciaba "a los que recurren a los argumentos resobados por el nazifascismo, de atribuir a los comunistas o a maniobras de éstos lo que es un movimiento unánime de la clase obrera sindicalmente organizada contra los procedimientos antidemocráticos en el seno de la organización gremial, de cuyos procedimientos abusaron y pretenden seguir abusando el grupo que, desalojado de la dirección por la voluntad expresa y soberana de la mayoría del CCC, se quedan con los bienes y pretenden seguir presumiendo de dirigentes de la CGT" (LV, 26-3-1943).

Almarza responde que Pérez Leirós había sido votado por 15 comunistas y 7 "que no se sabe", "de lo cual resulta que quien gobierna ese grupo no es por cierto Pérez Leirós sino los militantes del PC" (LV, 28-3-1943). A lo que Pérez Leirós replica que algunos de aquellos cuya posición política Almarza pretende no conocer estaban afiliados al PS desde hacía treinta años, mientras que Almarza —y Domenech, agreguemos nosotros— sólo se habían afiliado hacía tres meses, recordándole también que su grupo había buscado el apoyo electoral de los comunistas, ofreciéndoles incluso invitar al partido al congreso de la CGT si votaban por Domenech.

Finalmente, el 1º de abril *La Vanguardia* cerraba sus páginas a la polémica "por considerar que nuestros lectores están ya en condiciones de juzgar sobre la división producida en la central obrera, precisamente en momentos en que el país está necesitando de la unidad democrática de su pueblo" (1-4-1943).

La crítica indirecta reflejaba mal, sin embargo, el desconcierto y la amargura de los dirigentes del partido ante una situación tan inédita como inesperada. Sólo hacía siete años que, después de cuarenta de pacientes esfuerzos, habían logrado una posición mayoritaria en la central sindical, y ya debían afrontar una división en que se enfrentaban dos afiliados, contando cada uno de ellos con el respaldo de muchos otros. El Comité Ejecutivo del PS intentó mediar entre ellos, proponiendo que ambos renunciaran a sus aspiraciones, pero Domenech se negó a hacerlo aduciendo que él se debía a la UF<sup>186</sup>. Borlenghi, por su parte, propuso una solución basada en renuncia de todos los componentes de ambas listas; renuncia de Domenech y Pérez Leirós a la candidatura para la secretaría general, y elección de las nuevas autoridades por "la mayoría del CCC, tal como fue electo originalmente por los sindicatos y sin presión o mandatos anti-estatutarios" (LV, 14-4-1943). LF que había dado libertad de acción a sus delegados —cada uno de los cuales votó por una lista diferente— intentó también una mediación que fracasó.

Muchos dirigentes —y, seguramente, muchos más dirigidos— veían el enfrentamiento como motivado por ambiciones personales: "Considero que uno y otro (Domenech y Pérez Leirós) —dice, por ejemplo, Jesús Fernández; que era presidente de LF— eran hombres del movimiento

gremial que podían figurar, pero ensoberbecidos, llenos de unas ínfulas de carácter personalista que los hacían creer que ellos eran todo y los demás no eran nada”<sup>137</sup>. “Lo que dijo J. Fernández —confirma Luis Ramiconi—, que coincide con lo que yo le decía (...) tiene relación con una manera de ser un poco... (no sé si la palabra puede resultar un poco fuerte), un poco caudillesca; entonces él (Pérez Leirós) trataba de mantener siempre una posición que le permitiera aparecer como líder. Y eso es lo que explica (la división), no se puede explicar de otra manera”<sup>138</sup>. “Pérez Leirós —agrega C. Almarza— actuó a mi juicio por ambición personal, y porque él quería ser el Largo Caballero argentino”<sup>139</sup>.

Efectivamente, esta situación no puede explicarse solamente por diferencias ideológicas y políticas, sino que también es necesario aludir a la aparición de un nuevo tipo de dirigente sindical que se había ido configurando a lo largo de la década.

### Un nuevo tipo de sindicalismo

Hasta ese momento, como hemos visto, todas las divisiones y reagrupamientos en el movimiento obrero habían seguido líneas claramente ideológicas. En esta nueva escisión, en cambio, la línea divisoria aparecía más confusa: ambas CGT estaban encabezadas por afiliados socialistas, los militantes de esa tendencia se repartían en forma más o menos equivalente entre las dos y no había cuestiones ideológicas de fondo que justificaran la ruptura.

La principal diferencia radicaba en que quienes apoyaban a la CGT Nº 2 aspiraban a que la central tuviera una participación más activa en las cuestiones de política nacional e internacional, en forma coordinada con los partidos políticos, mientras que los que sostenían a la Nº 1 se inclinaban por una actitud “neo-sindicalista” de prescindencia política, limitación a las reivindicaciones específicamente gremiales y buena relación con el gobierno, cualquiera que éste fuera. Algo similar a lo que poco después Perón definiría como “sindicalismo político” y “sindicalismo gremial”, respectivamente.

Pero el pleito también estaba relacionado con el mayor o menor peso que tendría la UF, baluarte de la segunda corriente, en la conducción de la central. “Nosotros —dice C. Almarza— no queríamos perder nuestra gravitación en el movimiento obrero argentino, sobre todo porque éramos el hermano mayor: siempre se decía que la UF era la columna vertebral del movimiento obrero argentino y no queríamos perder esa posición, pues lo contrario significaba entregarnos a los sindicatos pequeños que había en la CGT, que por lo general eran de tendencia extremista, tipo comunista”<sup>140</sup>. Efectivamente, la incorporación a la CGT de los sindicatos de la construcción y de la industria dirigidos por los comunistas había alterado la composición de la central y alentaba a la mayoría de los gremios a librarse de la tradicional hegemonía de la UF, debilitada además por sus luchas intestinas.

Pero en esta división aparecen también otros factores que hasta entonces sólo habían actuado en un segundo plano —o bien encubiertos

con ropajes ideológicos— y que ahora se mostraban desembozadamente: intereses de grupos, ambiciones de poder... Estamos muy lejos, evidentemente, de las épocas en que el papel de dirigente sindical implicaba tantos riesgos y sacrificios que no siempre era fácil encontrar a quien quisiera desempeñarlo, y no pocos sindicatos —sobre todo en el interior— debían confiarlo a voluntarios ajenos al gremio. Ahora los cargos directivos eran codiciosamente disputados, y no sólo en función del triunfo de una línea ideológica o de los intereses de determinada organización, sino también por el poder personal que daban a quien los ejercía.

La CGT, lo mismo que los sindicatos más importantes, se habían convertido en verdaderos factores de poder; capaces de movilizar a cientos de miles de trabajadores, sus dirigentes gozaban del respeto y la consideración de las autoridades estatales, los patrones y los políticos.

Por otra parte, las dimensiones alcanzadas por muchas de las organizaciones sindicales hacían ya imposible la reunión de todos sus miembros en asamblea y reforzaban, en cambio, el poder de los cuerpos directivos, que disponían de los recursos económicos y manejaban la prensa gremial. Dentro de esos cuerpos, finalmente, el poder tendía a concentrarse en unos pocos funcionarios rentados que podían dedicar todo su tiempo a la actividad sindical. Se había ido generando, así, una capa burocrática cuya principal preocupación sería la de conservar la posición de predominio que había alcanzado y que repararía cada vez menos en los medios para lograrlo.

Si las maniobras a que recurrió el grupo **sindicalista** para mantener su control sobre los cuerpos directivos de la CGT hasta 1935 todavía podían justificarse con argumentos ideológicos, difícilmente podría decirse lo mismo de las realizadas por el grupo de Domenech entre 1940 y 1943. Menos aún podían interpretarse como inspiradas principalmente en motivaciones ideológicas las luchas por el control de la UF: si la relación de Tramonti con el **sindicalismo** era ambigua, no lo era menos la de Domenech con el PS.

En cuanto al primero, probablemente hay mucho de cierto en estos juicios de R. Stordeur: “Tramonti era un hombre al que no se puede llamar **sindicalista**, no era **sindicalista**. Tramonti era un hombre ferroviario que accedió a la dirección de su gremio. Tengo entendido que era un hombre muy vivo y sobre todo que él sabía manejar ciertos hilos con bastante agilidad y con bastante habilidad, y además, ya que esencialmente era “tramontista”, por lo tanto era oponente de los socialistas. Entonces los **sindicalistas** se sirvieron, en realidad, de Tramonti, y también lo sirvieron a Tramonti; no porque ellos supusieran que Tramonti era un hombre que realmente tenía condiciones excepcionales y tenía siempre razón, no. Sencillamente porque el gremio ferroviario era muy importante, pesaba mucho, y ellos buscaban siempre, aún los idealistas, los **sindicalistas** puros, apoyos para sumar fuerzas a su posición”<sup>141</sup>.

En cuanto a Domenech, hemos visto cómo renunció al partido cuando vio que su condición de afiliado podía convertirse en un obstáculo para su carrera de dirigente sindical; volvió a afiliarse en momentos en que la paridad de fuerzas dentro de la CGT hacía que cualquier apoyo adi-

cional pudiera inclinar la balanza hacia uno u otro lado; no vaciló en enfrentar con su candidatura a la de otro afiliado socialista y finalmente, habiéndose producido la escisión, rechazó la fórmula propuesta por el Comité Ejecutivo de su partido para superar la embarazosa situación. Puesto en la alternativa de optar entre la fidelidad al PS y los intereses de su organización, Domenech se decidió por la segunda, cuyo control era la fuente de su poder. Lo mismo harían, después de junio de 1943 y en medio de circunstancias diferentes, numerosos dirigentes sindicales socialistas.

Hemos visto, a través de los ejemplos de la CGT y la UF, algunos de los procedimientos utilizados por esos dirigentes en la lucha por el poder: postergación de las reuniones de los congresos o del CC confederales según sus conveniencias; "preparación" de congresos y asambleas mediante todo tipo de manipulaciones electorales (desde la asignación del número de delegados o la adopción de determinados mecanismos electorales hasta el simple fraude); intervención de seccionales adversas y expulsión de opositores; uso faccioso de la prensa sindical, etc.

Algunos dirigentes desconfiaban incluso del ascenso de sus propios partidarios: cuenta Juan Rodríguez, por ejemplo, que aunque él era miembro de la facción de Domenech, cuando fue elegido para la CD en lugar de otro candidato preferido por el caudillo, éste intentó anular las elecciones en varias seccionales con el pretexto de que se había cometido fraude "Domenech, como otros directivos —comenta Rodríguez— apoyaban mucho a la gente que ya estaba en la CD, y a veces, cuando veían que una persona se estaba promoviendo o lo estaban promoviendo, le ponían trabas de todos los costados"<sup>142</sup>.

Por último, vimos también que en casos extremos podían llegar al uso de la fuerza —como en el "asalto" del 12 de diciembre o en el intento de tomar el local de la UF, donde también hicieron su aparición las armas de fuego—, pedir la intervención del sindicato o apelar a la protección de la policía contra sus rivales.

El último episodio de las luchas internas de la UF anterior al golpe militar resulta ilustrativo de clima reinante en los medios sindicales para esa fecha. Domenech, que en 1941 no se había postulado para la reelección por motivos que luego veremos, se presentó al año siguiente como precandidato para el cargo de director obrero de la Caja de Jubilaciones. Su rival, el radical Julio Duró Ameghino, derrotado en las elecciones internas de la UF, denunció que se había cometido fraude y fue expulsado de la organización. Pero he aquí que, al presentarse junto con un amigo fraternal como candidatos independientes frente a los candidatos oficiales de la UF y LF, estos "dos aventureros sin antecedentes en el gremio" ganaron ampliamente las elecciones, lo que parecía confirmar las denuncias anteriores.

Domenech atribuye este episodio a las intrigas de Pérez Leirós, quien se habría confabulado con los radicales para derrotarlo (digamos, de paso, que también el "traidor" Lestelle era radical). Pérez Leirós, por su parte, admite que se había vinculado con Duró Ameghino a través de Alvear, pero atribuye su victoria al hecho de que las autoridades de la UF no pudieron recurrir al fraude en la elección final porque el candi-

dato independiente tenía muchos amigos en el gobierno, e incluso en la Inspección de Justicia<sup>143</sup>.

El episodio, junto con el escándalo que lo rodeó, fue utilizado por el régimen militar como uno de los argumentos para justificar la intervención de la UF al año siguiente.

Aunque con menos dramatismo y publicidad, muchas de estas prácticas no dejaban de imitarse en las organizaciones menores donde las asambleas —generalmente controladas por los directivos en forma que dejaba muy poco margen para las disidencias— se fueron convirtiendo en un mero formalismo y contaban con una asistencia cada vez menor (ver concurrentes a reuniones sindicales en cuadro 4, pág. 48). En su lugar, unos pocos dirigentes rentados, reunidos habitualmente en torno a la figura de un caudillo que manejaba con mano dura la organización, tendían a perpetuarse en la dirección: Pérez Leirós en la UOEM (1919-44), Gay en la FOET (1928-47), Alfredo Fianza en el SOIC (1932-49), Borlenghi en la FEC (1931-46), Peter en la FOA (1932-46). De modo que, si a principios de la década todavía se daban casos en que algunos sindicatos cambiaban sus cúpulas por las vías estatutarias —incluso por una de distinta tendencia, como ATE en 1933 o la UF al año siguiente—, eso pasó a ser prácticamente imposible al llegar a los años 40.

La tendencia a la burocratización tenía, sin embargo, algunos antidotos que impedían que se extendiera más allá de ciertos límites. Por un lado, el hecho de que no hubiera ningún obstáculo legal para la existencia de varias organizaciones por gremio, hacía que los grupos dirigentes debieran esforzarse por lograr ciertos *modus vivendi* con los grupos opositores si querían evitar las escisiones. Así, por ejemplo, vimos cómo las dos facciones de la UF terminaron por llegar a un acuerdo y se reunificaron compartiendo los cargos de la CD en 1940. Lo mismo habían hecho los gráficos dos años antes: la ULMA sindicalista, la Federación Obrera Gráfica Argentina formada por partidarios de Concentración Obrera y el sindicato autónomo de los cartoneros se fusionaron con la FGB, compartiendo su dirección con socialistas y comunistas. En cambio, socialistas y comunistas no lograron convivir en la UOT y, pese a haberse unificado en 1936, volvieron a separarse en 1941. El autoritarismo y el sectarismo con que Pérez Leirós manejaba la UOEM, por otra parte, mantenía a los municipales divididos en varias organizaciones, producto de sucesivas escisiones: ATC (sindicalistas y radicales), Asociación Porteña de Trabajadores (antipersonalistas y conservadores), Federación de Obreros y Empleados Municipales (Concentración Obrera). Esta situación también sirvió de argumento para la intervención de la UOEM en 1944.

El otro factor que limitaba la autonomía de los dirigentes era el hecho de que, al ser la afiliación totalmente voluntaria, el descontento de las bases —si no podía cuajar en una escisión— se manifestaba en las desafiliaciones. La caída del número de cotizantes acompañó así a las luchas internas en la UF y ATE entre 1936 y 1941, y lo mismo ocurriría con la FONC, la CGEC y la UOT entre 1941 y 1945 (ver cuadros 11 y 9, págs. 69 y 66).

Habría que agregar finalmente que —a diferencia de lo que ocurriría en otras épocas— esta burocratización no iba acompañada por un pro-

ceso de corrupción de los dirigentes sindicales. Si el atildado vestir de Borlenghi —“el planchado”— y su despacho alfombrado provocaban tantas críticas y suspicacias, eso sólo pone de relieve la modestia con que habitualmente vivían los dirigentes, cobrando —los rentados— un salario equivalente al que tenían cuando ejercían su oficio. Ninguno de ellos —salvo, quizá, Pérez Leirós, acusado de manipulaciones con los fondos de su sindicato y de haber montado sobre esa base una empresa inmobiliaria\*— se enriqueció en el ejercicio de sus funciones. El caso de Domenech, el más poderoso de los dirigentes sindicales entre 1934 y 1943, es sintomático: al abandonar la secretaría de la CGT volvió a trabajar en los talleres ferroviarios de Rosario hasta jubilarse. También es elocuente el hecho de que, aún en los momentos de más virulento intercambio de invectivas, las acusaciones sobre irregularidades en el manejo de fondos o sobre honestidad personal de los dirigentes hayan sido muy escasas.

En cambio, uno de los argumentos más usados en los enfrentamientos entre tendencias y entre caudillos sindicales fue el de la connivencia con el gobierno. Los **sindicalistas**, acusados de cripto-radicales hasta 1930, seguirían siendo considerados pro-oficialistas durante la década posterior: “Se percibe fácilmente —decía, por ejemplo, **CGT-Independencia** el 14-2-1936—, a poco que se examinen los hechos y los no hechos de la CGT en su lustro de existencia, el cordón umbilical que los une en las esferas del gobierno. Cómo esa existencia sirvió a la mayoría del comité expulsado el 12 para el apañamiento de una política sindical gubernativa (...) Su ‘prescindencia’ les sirvió, así, para captarse las simpatías de las autoridades, representantes de los partidos burgueses, etc., a cuyas esferas se vinculaban en la misma proporción en que su pretendido odio o repulsa por la política sólo se manifestaba frente a la acción política de la clase obrera”, “Muy complaciente con el gobierno ese grupo (...) —dice, por su parte, Pérez Leirós—. Ellos eran semi-oficialistas, vergonzantemente oficialistas. Y el oficialismo los trataba con mucha deferencia, les daba ventajas, etc.”<sup>144</sup>.

Parece ser, por otra parte, que un grupo de **sindicalistas** actuó desde 1932 como asesor del presidente del DNT: “Bullrich tomó como consejeros para desarrollar una política social determinada en el DNT —dice R. Stordeur— a una serie de elementos obreros. Prácticamente a la conducción de los **sindicalistas** argentinos, del grupo **sindicalista** (...) Además del talentoso Lausset, hablamos de Silvetti, hablamos de Cabona, etc. No es que ellos fueran funcionarios, sino sencillamente que él vio la necesidad de buscar ideas, pensamientos, opiniones; tengo entendido (...) que recurrió al pensamiento, al consejo y a las opiniones de ellos”<sup>145</sup>. Como vemos, la práctica que adoptaría Perón en la STP tampoco carecía de precedentes.

Si caben pocas dudas de que el grupo **sindicalista** cultivó buenas relaciones con el gobierno de Justo (recordemos sus frecuentes visitas, el

manifiesto del 8-11-1933, etc.), Domenech tampoco estuvo a salvo de que se le atribuyeran simpatías oficialistas, aunque mucho más polifacéticas (“poliédricas” decían los “catamarqueños”). Según éstos, “siendo candidato a la presidencia de la república el Gral. Justo, ocultamente, en esta capital, hacía saber a cuantos tenían vinculación con él que podían contar con su apoyo. Contemporáneamente, en su calidad de vecino de Rosario, formulaba idénticas declaraciones de adhesión a los candidatos de la Alianza Demócrata-Socialista, Dres. de la Torre-Repetto, so pretexto de que ‘la espada no había hecho nunca nada’.

“Posteriormente al golpe de mano en la CGT, manifestaba a los adictos de la candidatura del Dr. Iriondo para la gobernación de la provincia de Santa Fe su adhesión, y a su vez, ofrecíase en Rosario al candidato de la UCR, Dr. Mosca, y pocos días después, en Santa Fe, al Dr. Alvear.

“Con motivo de la reciente campaña electoral, temeroso del acceso del Dr. Ricardo M. Ortiz a la primera magistratura del país, esforzose por hacerle conocer su simpatía y adhesión; al propio tiempo, recordando lo dicho por el periódico confederal, estimó que el triunfo del Dr. Ortiz iba a significar la consagración del ‘cuartelazo de septiembre’ y, para hacer desaparecer de la superficie, con su derrota, ‘el pozo que la mayor cultura cívica de las masas populares fuera depositando en el fondo del olvido de hábitos deplorables’ (...) entrevistase con el ingeniero Boatti, secretario del Comité Nacional de la UCR, para hacerle saber que, habiendo sido designado secretario de la CGT, podía contar con sus servicios en favor de la candidatura del Dr. Alvear (...)

“Cuando el resultado del escrutinio dio a conocer que ‘la mayor cultura de las masas populares’ no había sepultado ‘en el fondo del olvido’ a los hombres que ‘el cuartelazo de septiembre’ había sacado a la superficie, el presidente de la UF y secretario de la CGT recordaría a los presuntos amigos de Ortiz que él también había trabajado por el triunfo de su candidatura (...)

“Su periódico, refiriéndose a la situación política de la provincia de Buenos Aires, consideraba que ‘el enemigo común está a las puertas y tiene cercada la capital’, pero él no tendrá empacho en demostrar por centésima vez su consuetudinario doblez declarando al gobernador de la provincia, Dr. Fresco, y a sus altos funcionarios, acompañado por el secretario adjunto Camilo Almarza, militante socialista, su más absoluta solidaridad con la política social (...) que siguen en el primer estado argentino”<sup>146</sup>.

Agreguemos que fue Domenech quien, en la asamblea ferroviaria celebrada en Rosario el 9 de diciembre de 1943, donde Perón hizo sus primeras armas ante un auditorio obrero, tuvo la iniciativa de darle el título de “primer trabajador argentino”, hecho que luego negaría, pero que ningún dirigente de la época deja de recordar ni olvida mencionar<sup>147</sup>.

En realidad, ninguno de los sectores del movimiento obrero —salvo, naturalmente, los anarquistas— le hacía ascos al mantenimiento de buenas relaciones con quienes detentaban el poder político. Los mismos comunistas no desdeñaban, en las contadas ocasiones en que encontraban un funcionario accesible, hacer ostentación de esas relaciones. El 10 de enero de 1943, por ejemplo, la FOIC realizó un festival celebrando la obtención de vacaciones y otras mejoras, al que asistieron el gobernador de

\* “En 20 años de burócrata y politiquero —decía, por ejemplo, **CGT-Catamarca** el 2-4-1937— se ha enriquecido a tal extremo que es propietario de varias casas en esta capital, un chalet en Córdoba y está construyendo otro en los terrenos que fueron del hipódromo nacional, en Belgrano”.

la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, su ministro de gobierno Vicente Solano Lima, senadores, diputados y otros altos funcionarios. J. Peter lo recuerda con orgullo en sus memorias.

La vinculación de algunos dirigentes sindicales con el gobierno parece haber alcanzado su máxima expresión durante la breve presidencia de Ortiz. Mucho antes de las elecciones, el grupo **sindicalista** que controlaba la CGT era acusado de estar trabajando por su candidatura mediante la acción de los delegados en gira por el interior. Según Pérez Leirós, los partidarios de Ortiz, "como tenían una gran orfandad en la masa, como no eran gente popular, como era gente que no sabía triunfar si no era por el fraude (...), sabían que cualquier combinación que hiciesen sin elementos de base, de la masa, no tendría ningún resultado para ellos. Entonces se pensó en tomar a pseudo-gremialistas para que hiciesen campaña secreta en favor de los candidatos, es decir, a base de oferta de puestos, de dádivas, etc. Para eso se contaba con algunos elementos para salir al interior del país. Y la base, otra vez, de esta confabulación diríamos fraudulenta, eran los dirigentes de la UF, la mayoría de los dirigentes de la UF de entonces (...). Tramonti estaba metido hasta la perilla en ésas"<sup>148</sup>.

Si la acusación no parece muy plausible, dado que ese grupo había perdido el control de la UF y de la CGT varios años antes de las elecciones, la vinculación de Tramonti con Ortiz es indudable. Además de nombrarlo presidente de la Caja de Jubilaciones, cargo que le permitiría mantenerse en contacto con el gremio y podría servirle de base para tratar de recuperar su ascendiente sobre el mismo, todo parece indicar que Ortiz apoyó la escisión de la FOEF. El rápido reconocimiento de la nueva entidad por el gobierno, la postergación de la elección para la Caja de Jubilaciones (que evitó que se pusieran en evidencia sus escasas fuerzas), las propuestas hechas por el ministro de Obras Públicas para la reunificación (que coincidían con las demandas de la FOEF), son algunos de los indicios que parecen confirmar las acusaciones del grupo rival. "Ortiz tuvo mucho que ver en ese sentido —dice C. Almarza refiriéndose a la escisión—. Porque los **sindicalistas**, que nos decían a nosotros pisa-alfombras ministeriales, resulta que ellos tampoco las dejaron de pisar. Las pisaron tanto como nosotros, y Ortiz era muy amigo de ellos, porque los radicales siempre han sido muy amigos de los anarquistas y de los **sindicalistas**"<sup>149</sup>.

Finalmente, ante el fracaso de la FOEF, cuenta C. Almarza que Ortiz citó a Domenech y le dijo: "Usted es el presidente de la UF y usted manda en la UF; yo soy el presidente de la república y yo mando acá en la Casa Rosada, y yo deseo que usted, estos tres nombres que le voy a dar acá, sean miembros de la CD (...). Eran tres enroliados en la corriente **sindicalista**, que en aquellos tiempos tenían algún fuste, algún predicamento en la UF. Los **sindicalistas** siempre estuvieron así, fueron gente que tuvieron mucha influencia en el poder público"<sup>150</sup>.

Según Domenech, al negarse a aceptar esa orden se produjo una situación conflictiva con Ortiz que lo llevó a no presentarse al año siguiente (1941) para la reelección. Aunque es probable que ésa haya sido también una de las condiciones puestas por los tramontistas para la reunificación, el episodio nos da una pauta del tipo de relaciones que se había

ido estableciendo entre los dirigentes sindicales y los gobernantes y de la medida en que la permanencia de los primeros dependía de la buena voluntad de los segundos.

Esta creciente vinculación no dejaba de alarmar a los militantes de la generación anterior. Dice por ejemplo Jacinto Oddone, refiriéndose a la magnitud que había adquirido la CGT, que "por esa razón, quienes estaban a su frente se habían convertido en hombres de gran importancia, que tenían que habérselas con las más altas autoridades de los municipios, de las provincias y de la nación, con las cuales trataban mano a mano y a las que podían tener a raya con sólo agitar la amenaza de poner en movimiento la poderosa máquina de la organización, o podían apuntalar al gobierno movilizándolo un ejército de 300.000 hombres para ponerlo a su servicio en el caso de que se sintiera débil frente a sus enemigos internos, en apoyo de su política o simplemente de sus hombres (...).

"Y se acercaron a la Casa Rosada. Y fueron amigos de todos los gobiernos, aún antes de que se constituyera la CGT. Se acercaron a la Casa Rosada más de la cuenta, más de lo que convenía a los intereses de la clase trabajadora, con actitudes y declaraciones no siempre adecuadas y convenientes.

"Y apareció el 'dirigente gremial', especie de caudillo del movimiento obrero, desconocido hasta entonces. La política criolla se introdujo en la organización junto con algún politicastro de barrio (...) que los instaba a alejarse de los socialistas para salvar su política 'propia' y les brindaba su amistad y alguna mejora para los obreros".

Se refiere luego a las actitudes de los **sindicalistas** frente a Yrigoyen, Uriburu y Justo, para continuar: "Posteriormente, ya durante la presidencia del Dr. Castillo, (un dirigente) al referirse a los actos antifascistas realizados por la CGT decía que '...ese acto, de cuya magnitud no recuerda otro el país, no fue solamente con el propósito de manifestar sus ideas a favor de los que luchan por la democracia, sino también para desbaratar, como el 23 de agosto de 1940', los planes reaccionarios que se preparan con miras a copar la situación política y subvertir el régimen republicano y democrático de gobierno...'. Y otro miembro del CC manifestaba en el último congreso de la CGT que en los últimos días de la presidencia del Dr. Ortiz, '...cuando casi estaban por ganar la calle los fascistas y algunos militarotes andaban buscando en el movimiento obrero para ver si encontraban gente para ganar la calle (...) hemos dicho al señor presidente de la re-

\* Ese acto, de "afirmación democrática y solidaridad americana", se convirtió de hecho en un acto de apoyo a Ortiz, cuya renuncia —motivada por la implicación de uno de sus ministros en un escándalo financiero— debía tratar el Congreso al día siguiente. Borlenghi, por ejemplo, dijo que "el presidente Ortiz (...) puede estar seguro de que los trabajadores han sabido comprender su obra en procura de la verdad de los derechos del pueblo y en este momento el pueblo ya ha rechazado su renuncia". Agregando, por las dudas, que "esta misma simpatía acompañará al Dr. Castillo sí, lo esperamos, se muestra firme, decidido y enérgico defensor de la Constitución Nacional" (*La Nación*, 24-8-1940). Terminado el acto se organizó una manifestación hasta la casa de Ortiz.

pública que si tiene alguna dificultad frente a los elementos que quieren ganar la calle, nos deje a nosotros y nos encargaremos de barrerla' (...)

"Todo esto mareó a muchos. Autosugestionados, vieron crecer sus figuras al punto de creer que podían dirigir, desde fuera, los destinos del país, es decir, sin ser gobierno; o cuando menos constituir un peso tal que hiciera inclinar la balanza gubernativa hacia el lado que ellos decidieran que se inclinara (...). Perturbada su cabeza, no pocos entre- vieron la posibilidad de convertir la central en una poderosa organización política que reemplazara al PS, cuyos pocos millares de adherentes les resultaba una cosa despreciable frente a los centenares de miles que tenía la CGT, con cuyos votos creían contar para la realización de hipotéticos planes políticos de defensa de los intereses gremiales"<sup>151</sup>.

Hemos citado **in extenso** este testimonio porque en él se evidencia cómo muchos de los rasgos que caracterizarían al sindicalismo peronista —oficialismo, vocación de participación política basada en la propia organización sindical— aparecían ya en el sindicalismo anterior aún para alguien que, por su posición política, podríamos suponer más inclinado a atribuirlos a la influencia del "gran corruptor".

Otro viejo militante socialista y encargado de la sección gremial de **La Vanguardia** en aquella época, analizando en 1945 las causas del creciente "colaboracionismo" de los dirigentes sindicales con la "dictadura fascista", lo atribuye al deseo de no perder las posiciones adquiridas, al apego a lo estrictamente gremial y a la falta de comprensión para los fenómenos de orden político general, pero agregaba también, "sin que la referencia a esta altura del análisis importe disminuir su importancia ni ennumerarla correlativamente, la evolución sufrida por el movimiento gremial en estos últimos tres lustros (quince años), cosa que ha impreso a las grandes organizaciones gremiales obreras de nuestro país, como resultado de las restricciones de todo orden que debieron padecer, el carácter de meros organismos gestores, sin otra función práctica que la de tramitar expedientes, canalizando toda reclamación obrera por la vía de la tramitación oficial"<sup>152</sup>.

Dalperín, finalmente, sintetiza así la situación: "Sin duda que esa organización (se refiere a la sindical) enfrentaba las mismas disyuntivas que las fuerzas políticas de arraigo popular, y —si a menudo podía vérselas al lado de ellas en las estériles jornadas de protesta contra la política de la Restauración— más de un dirigente obrero había comenzado a sacar las conclusiones que esa esterilidad misma sugería, buscando abrir el diálogo con quienes tenían efectivamente el poder, ya para obtener ventajas para sus representados, ya —como suponían quienes veían no sin alarma ese desarrollo— son finalidades más políticas y menos impersonales. Esos primeros signos de la presencia de dirigentes obreros dispuestos a jugar el juego político según las reglas fijadas por la Restauración no eran en sí demasiado importantes, pese a la virtuosa indignación que lograban provocar en otros dirigentes más apegados a los antiguos usos. No lo eran sobre todo porque la voluntad de insertarse en los mecanismos del aparato político, aún a nivel modesto, no encontraba eco alguno en quienes dominaban ese aparato; aún así, esa actitud nueva eran también ella un anticipo de futuros rumbos"<sup>153</sup>.

"La revolución de 1930 —agrega más adelante— había inaugurado un período de persecuciones indiscriminadas, atenuadas luego pero nunca totalmente interrumpidas, en las que alcanzó su paroxismo la hostilidad de principio del poder político hacia toda forma de militancia obrera. A todo eso había tenido que acostumbrarse el movimiento sindical: incapaz de quebrar el orden político vigente, debía conquistar dentro del marco que él le brindaba, y cuidando cada vez más escrupulosamente de no mostrar hacia él ninguna hostilidad abierta, victorias siempre modestas y precarias. Cuando ese dispensador de tantos males que era el Estado pareció mostrar de pronto un rostro más benévolo nada tenía de extraño que las prevenciones se atenuaran rápidamente"<sup>154</sup>.

Efectivamente, lo que cambiaría desde fines de 1943 no era la actitud del movimiento obrero —y mucho menos de sus dirigentes— con respecto al poder político, sino la actitud de éste frente a aquéllos. Si hasta entonces todos sus intentos de acercamiento y participación sólo habían encontrado una respuesta fría y displicente en los medios gubernamentales, desde que Perón se hizo cargo de la política social del régimen militar esos contactos fueron buscados y cultivados con una intensidad sin precedentes y se convirtieron en la principal preocupación del personaje más importante del régimen. Ese cambio de actitud inauguraría una nueva era en la historia argentina<sup>155</sup>.

## Segunda parte

### El movimiento obrero y el coronel Perón

Esa clase obrera semi-organizada, con tantas aspiraciones insatisfechas y que había conocido tantas frustraciones; ese movimiento sindical permanentemente dividido, más tolerado que reconocido por los gobiernos, iban a atravesar, entre 1943 y 1946 una experiencia inédita que los transformaría profundamente.

Por primera vez, desde las esferas del poder alguien apelaba a ellos, no ya como meros proveedores de algunos votos o apoyos suplementarios, sino como eje y principal base de sustentación de un nuevo y vasto movimiento político capaz de desafiar a todos los preexistentes coaligados. Por primera vez, las mejoras concretas de todo tipo —y en cantidad también inusitada— venían antes y no después —o nunca— de haber obtenido su apoyo. Por primera vez —con la excepción parcial de Yrigoyen— un gobernante que decía estar identificado con los trabajadores parecía confirmar esa identificación al ser objeto de los más enconados y violentos ataques de las organizaciones patronales, la prensa conservadora y todas las demás instituciones tradicionalmente vinculadas con la clase dominante. Por primera vez, la organización de los trabajadores era estimulada y aún promovida desde el poder, y los dirigentes sindicales veían la posibilidad de participar activamente en las decisiones del gobierno sin tener que pasar por el *cursus honorum* de un partido político ni depender de sus autoridades, sino directamente, a través de su actividad específica y gracias al respaldo de sus propios gremios: el viejo lema sindicalista “los sindicatos al poder” parecía a punto de concretarse.

Pero frente a todas estas circunstancias que impulsaban a la clase obrera y al movimiento sindical a responder positivamente a los llamados del coronel Perón, había otras que actuaban en sentido contrario. En primer lugar, la desconfianza que siempre les había inspirado cualquier elemento ajeno a la clase que pareciera interesarse por sus problemas y pidiera su apoyo para solucionarlos: muchos años de experiencia con la “política criolla” cimentaban esa desconfianza, a la que no escapaban —como hemos visto— los políticos socialistas.

Para peor, quien buscaba ahora ese apoyo era nada menos que un militar: desde sus comienzos, y en todas sus tendencias, el movimiento obrero había sido siempre profundamente antimilitarista, y la experiencia recogida durante el régimen de Uriburu no había hecho sino reforzar esa tradición. Se conocía, por otra parte, la extensa influencia que desde hacía más de una década ejercían los modelos nazifascistas en los medios militares, y los partidos en quienes más confianza podía depositar la clase obrera —o, al menos, su parte organizada— no tardaron en atribuirle esa ideología al coronel obrerista.

Los discursos iniciales de Perón no hacían mucho por destruir esa acusación, y la política exterior del régimen militar hizo que la misma fuera prontamente recogida y ampliamente difundida por Washington. Imposible exagerar, después de más de una década durante la cual el fascismo había sido percibido como la peor amenaza para el movimiento obrero, y en momentos en que se estaba jugando la suerte del mundo, la importancia de este factor.

Por otra parte, aunque la vieja tradición de prescindencia política había comenzado a ceder en los últimos años, la nueva actitud "participacionista" no estaba aún suficientemente arraigada en el movimiento obrero, y si tanto había costado llevarlo a hacer causa común con los partidos obreros y populares tradicionales, cuál no sería la dificultad para acercarlo a un régimen al que esos partidos condenaban unánimemente.

Finalmente, el anatema de esos partidos podía arruinar la carrera de cualquier dirigente sindical que se embarcara en una aventura de consecuencias imprevisibles: ¿y si el simpático coronel resultaba finalmente un ambicioso demagogo dispuesto a utilizar al movimiento obrero para encumbrarse y luego volverse contra él? O si, simplemente, no lograba imponerse, ¿qué sería de los que lo habían apoyado?

Estos y otros razonamientos encontrados agitaron al movimiento sindical y a la clase obrera durante esos tres años intensos y decisivos. El desenlace es conocido: a través de su identificación masiva con Perón, la clase obrera superó las barreras que le habían impedido unificarse, protagonizó su primera gran movilización política a escala nacional e irrumpió como factor determinante en ese campo, donde no había tenido hasta entonces sino un papel sumamente marginal. Todo esto lo logró al precio de abandonar sus viejas tradiciones ideológicas —pronto sustituidas por otras más difusas— y, sobre todo, de ir perdiendo paulatinamente su autonomía en manos de un líder cada vez más autoritario y personalista.

Veamos ahora las etapas y las vías que llevaron a esos resultados.

## 1. El régimen militar entre la represión y la "justicia social"

El golpe del 4 de junio de 1943 fue recibido con beneplácito por algunos sectores —entre ellos, los radicales, que esperaban que el restablecimiento de la limpieza electoral significara su retorno al poder—. Difícilmente podría decirse lo mismo de los trabajadores, que si no te-

nían nada que afiorar del régimen depuesto, sabían lo que podían esperar de un gobierno militar. Sin embargo, pronto advertirían con clara sorpresa y creciente confusión que, lejos de ser una simple reedición de la odiada dictadura uriburista, el nuevo régimen presentaba también facetas insólitas.

## La línea autoritaria y represiva

Perón —uno de los principales inspiradores del golpe— afirmaría posteriormente que la realización de la justicia social había sido uno de los postulados básicos del mismo, e incluso el postulado básico<sup>156</sup>. Sin embargo, el manifiesto revolucionario que él mismo redactó no contiene ninguna referencia específica sobre el tema. Por el contrario, en el más tradicional estilo militar, abunda en alusiones a "la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción", al "escepticismo y la postración moral" y a "los sagrados intereses de la Patria", propugnando "la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de los bienes mal habidos" (*La Nación* (LN), 5-6-1943).

La proclama de Rawson, por su parte, sólo se refiere al problema social por la negativa y en términos algo inquietantes: "El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de provisiones sociales" (LN, 5-6-1943). Poco después se produjo el allanamiento de *La Hora* y la detención de José Peter y otros dirigentes sindicales y militantes comunistas.

El hecho no preocuparía demasiado a los dirigentes de la CGT Nº 1, que se apresuraron a diferenciarse a través de una declaración netamente defensiva: después de mencionar el alza del costo de la vida y la necesidad de tomar medidas contra la especulación, el anhelo de que imperara la voluntad popular expresada en comicios libres y de que se estrecharan los vínculos con los países americanos y las Naciones Unidas, la entidad manifestaba su esperanza de que "el nuevo gobierno no dificulte el desarrollo normal de las organizaciones obreras, ya que la actividad desplegada y a realizar por las mismas no saldrá en momento alguno de los cauces de la legalidad y el orden constitucional" (LN, 9-6-1943).

El primer contacto entre el nuevo gobierno y los dirigentes sindicales se realizó por la vía tradicional del DNT. Su presidente, Emilio Pellet Lastra, los citó a una reunión a la que asistieron representantes de veintiocho sindicatos, entre los cuales había conspicuas ausencias (FONC, FOA, UOT, SUOM, SOIM). Después de asegurarles que el DNT proseguía su acción, "de acuerdo al espíritu que anima a las nuevas autoridades, especialmente contraído al examen y atención de las necesidades y aspiraciones de la gente de trabajo", les endilgó la siguiente monserga: "Ahora bien, debo al propio tiempo significarles que me refiero a las 'necesidades reales' y a las 'aspiraciones legítimas', emanadas de la propia gente de trabajo y cuya expresión llegue al poder público por medio de sindicatos de orden o por representaciones obre-